



## MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

### DECRETOS

#### DECRETO NÚMERO 0000529 DE 2016

(abril 2)

*por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.*

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, y

#### CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las juntas directivas de las cámaras de comercio hasta en una tercera parte de cada junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto número 1074 del 2015, establece: “Integración de la Junta Directiva. Cada cámara de comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil (1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las juntas directivas de las cámaras de comercio de Buga; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La Guajira; Florencia para el Caquetá; Putumayo; Chocó; Sogamoso; Tumaco; Girardot; Ipiales; Sur y Oriente del Tolima; Aguachica; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas; Piedemonte Araucano; Honda; Chinchiná; Santa Rosa de Cabal; Magangué; Sevilla; Ocaña; Pamplona; San José; y Amazonas tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos (2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las juntas directivas de las cámaras de comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; Facatativá; Manizales por Caldas; Cauca; Santa Marta para el Magdalena; Pereira; Neiva; Villavicencio; Ibagué; Oriente Antioqueño; Montería; Tuluá; Pasto; Buenaventura; Armenia y del Quindío; Tunja; Valledupar; Barrancabermeja; y Casanare tendrán, con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las juntas directivas de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga tendrán, con independencia del número de afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el Gobierno nacional”.

Que a su turno, el artículo 2.2.2.38.2.2 del Decreto número 1074 del 2015, contempló que las juntas directivas de las cámaras de comercio que se elijan para el periodo 2014-2018 conservarán el número de integrantes vigentes a la fecha de la expedición de la Ley 1727 de 2014.

Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, corresponde a un total de cuatro (4) miembros principales y cuatro (4) miembros suplentes.

#### DECRETA:

Artículo 1°. Nombrar a Beatriz Eugenia del Socorro Uribe de Uribe, identificada con la cédula de ciudadanía número 21362040 de Medellín, como Miembro Principal en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en reemplazo de Tulio Enrique Gómez Tapias.

Artículo 2°. El nuevo Directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva de la respectiva cámara de comercio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto número 457 del 16 de marzo de 2016, así como las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de abril de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

*Cecilia Álvarez-Correa Glen.*

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

### DECRETOS

#### DECRETO NÚMERO 528 DE 2016

(abril 2)

*por el cual se crea y se organiza el Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita y se dictan otras disposiciones.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 43 de la Ley 489 de 1998, y

#### CONSIDERANDO:

Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 establece que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

Que mediante la Ley 1537 de 2012 se dictaron normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, por lo que, con fundamento en este marco jurídico, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, creó e implementó el Programa de Vivienda Gratuita, el cual tiene por objeto la entrega de viviendas de interés prioritario urbanas nuevas, a título de subsidio familiar de vivienda 100% en especie, para la población a que se refiere el artículo 12 de la misma ley.

### LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos estatales no requieren publicación ante la desaparición del Diario Único de Contratación Pública.

**DIARIO OFICIAL**

Fundado el 30 de abril de 1864  
Por el Presidente **Manuel Murillo Toro**  
Tarifa postal reducida No. 56

DIRECTORA: **DIOSELINA PARRA DE RINCÓN**

MINISTERIO DEL INTERIOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

**DIOSELINA PARRA DE RINCÓN**

Gerente General

Carrera 66 N° 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia  
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: [correspondencia@imprenta.gov.co](mailto:correspondencia@imprenta.gov.co)

Que los artículos 3° y 4° de la Ley 1537 de 2012 promueven la coordinación entre las entidades nacionales y las territoriales, para el desarrollo de programas de vivienda, y prevén la priorización en la construcción, dotación y operación de servicios complementarios a la vivienda tales como la educación, salud, seguridad, bienestar social, tecnologías de la información y las comunicaciones y la instalación de servicios públicos domiciliarios, entre otros.

Que el artículo 11 de la referida Ley dispone que algunos ministerios y las entidades que defina el Gobierno nacional, de acuerdo con los criterios establecidos por ellas, deben priorizar en sus presupuestos de inversión los recursos para la construcción y dotación de equipamientos públicos colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios, para los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria que se realicen con la financiación o cofinanciación del Gobierno nacional, de acuerdo con las directrices que establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el artículo 15 de la citada ley determinó que el Gobierno nacional, en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, coordinará con otras entidades tanto públicas como privadas el acompañamiento social que requieran los proyectos de vivienda de interés prioritario, en aspectos relacionados con la convivencia y el cuidado de las unidades privadas y las áreas comunes.

Que el Decreto 1649 de 2014, modificado por los Decretos 2594 de 2014 y 470 de 2015, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dispone en su artículo 8° que serán funciones de su Director, entre otras, la de coadyuvar en la formulación de las políticas públicas a cargo del Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa; atender las relaciones con los poderes públicos y demás organismos o autoridades a que se refiere la Constitución Política, de conformidad con los lineamientos que imparta el Presidente de la República, y coordinar con los ministros y directores de departamentos administrativos la gestión de las políticas gubernamentales correspondientes a sus respectivos sectores.

Que el artículo 34 del Decreto 1649 de 2014 define que para el cumplimiento de las funciones asignadas por el Presidente de la República al Vicepresidente de la República, este podrá contar con el apoyo de las direcciones de Proyectos Especiales, Coordinación de Infraestructura y Coordinación de Vivienda del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Que el mencionado Decreto establece las funciones de la Dirección para la Coordinación de Infraestructura (artículo 36) y la Dirección para la Coordinación de Vivienda (artículo 37), entre las que cabe resaltar la promoción de mecanismos de concertación, coordinación y orientación interinstitucional e intersectorial que contribuyan al desarrollo de la infraestructura del Estado, y de la eficiencia y eficacia de los programas de Vivienda, respectivamente.

Que el Decreto 210 de 2015 confió al Vicepresidente de la República la misión de coordinación interinstitucional e intersectorial en los proyectos relacionados con los sectores de vivienda e infraestructura y proyectos especiales de renovación urbana.

Que dadas las condiciones de vulnerabilidad de los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, quienes se encuentran en situación de pobreza extrema, situación de desplazamiento forzado, son damnificados por desastres naturales y/o habitaban zonas de riesgo no mitigable, es necesario implementar un acompañamiento especializado y diferencial a los mismos, para disminuir los riesgos generados por efecto de la relocalización residencial y la reversibilidad de los logros alcanzados en la superación de vulnerabilidades, así como promover la convivencia de los hogares en los proyectos de vivienda, su disfrute, el cuidado y buen uso de los mismos.

Que se hace necesario fortalecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades del nivel nacional y territorial, para promover de manera gradual y progresiva la adecuada estabilización de la población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en sus nuevos contextos territoriales, sociales, económicos y culturales.

Que es necesario organizar un sistema administrativo con el fin de coordinar y efectuar el seguimiento al acompañamiento social de la población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita y al desarrollo de la infraestructura social en los proyectos de vivienda ejecutados en el marco del Programa de Vivienda Gratuita.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

TÍTULO 1

SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA (SNAIS)

Artículo 1°. *Objeto.* Este Decreto tiene por objeto crear y organizar el Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita (SNAIS), el cual se encargará de orientar las acciones de planificación, ejecución, evaluación

y seguimiento que adelanten las entidades públicas y privadas, con el propósito de articular la oferta social y la infraestructura social en los proyectos que se ejecuten en el marco del Programa de Vivienda Gratuita.

Parágrafo. La responsabilidad por la ejecución de actividades, planes y programas en materia de infraestructura social y de servicios públicos domiciliarios estará exclusivamente en cabeza de cada una de las entidades públicas competentes, bajo la coordinación del Vicepresidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 210 de 2015.

Artículo 2°. *Ámbito de aplicación.* Las disposiciones de este Decreto se aplicarán a las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal que hacen parte del Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita, y que por sus funciones y oferta de servicios contribuyen a garantizar la permanencia y sostenibilidad de los hogares beneficiados con el Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie a los que les fue asignada una vivienda, dentro de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita promovidos por el Gobierno nacional.

Artículo 3°. *Definiciones.* Para los efectos del presente Decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

**1. Oferta Social.** Corresponde al conjunto de estrategias, programas, proyectos, iniciativas, servicios y acciones, con sus respectivos recursos, que entidades públicas y privadas diseñan, planean y ejecutan con el fin de responder a las necesidades generales o específicas de una población, promover su beneficio y calidad de vida, o favorecer grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

**2. Infraestructura Social.** Es el conjunto de equipamientos, elementos, instalaciones, edificaciones, dotaciones y espacios básicos, públicos y privados, que apoyan y sirven para proveer los servicios y la oferta social que demanda una comunidad para su desarrollo, funcionamiento y el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en áreas como educación, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusión productiva, bienestar familiar, participación comunitaria, servicios públicos domiciliarios, etc., y que sirven para brindar apoyo funcional a la administración pública.

**3. Acompañamiento Social.** Corresponde al trabajo de relación personal continuada, relativamente duradera, de comprender a las personas beneficiarias para contribuir a que ellas mismas entiendan y empiecen a dominar su situación y las claves de sus dificultades; de apoyarlas en la activación y movilización de recursos, en el fortalecimiento de sus capacidades y potencialidades, y en la comprensión y adaptación a su entorno.

**4. Estrategia de Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita.** Corresponde a las líneas de acción dispuestas por entidades del sector público y/o privado, que se implementen desde la perspectiva del acompañamiento social, para los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, las cuales incidan en: i) la construcción de nuevos tejidos sociales comunitarios y la inclusión social en el entorno receptor, para la generación de pertenencia en el nuevo contexto, ii) el fomento y creación de espacios de participación y gestión al interior de los proyectos de vivienda que promuevan capacidades colectivas y la cohesión social para el cumplimiento de objetivos y logros comunes, y iii) la articulación de la institucionalidad pública y privada en torno a los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita para armonizar la oferta de servicios sociales.

**5. Situación de Vulnerabilidad.** Se entiende por vulnerabilidad el resultado de la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente. Esta situación se relaciona, según la misma fuente, con los grupos socialmente vulnerables cuya identificación obedece a diferentes criterios: algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal, el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo, condición étnica) que se supone les confiere riesgos o problemas comunes. El riesgo se refiere a la posibilidad de que una contingencia (ocurrencia o presencia de un evento, característica o proceso) entrañe efectos adversos para la comunidad, hogar, persona, empresa y ecosistema. El riesgo no alude a un acontecimiento intrínsecamente negativo, sino a uno que puede generar daño o incertidumbre y cuyas consecuencias pueden ser ambiguas o mixtas, combinando adversidad y oportunidad.

**6. Servicios Públicos Domiciliarios.** Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal y como se definen en el artículo 14, numeral 14.21, de la Ley 142 de 1994 o en normas posteriores que la modifiquen.

**7. Organizaciones Comunales.** Son las instancias en las cuales las comunidades deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y veredas, que se materializan a través de la participación y el quehacer en la vida de las comunidades.

**8. Régimen de Propiedad Horizontal.** Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 675 de 2001 o en las normas posteriores que la modifiquen.

Artículo 4°. *Objetivos del SNAIS.* El Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita tendrá los siguientes objetivos:

1. Propender por la integralidad de las intervenciones sociales, infraestructura social y procesos de planeación destinados a mejorar la calidad de vida y la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de la población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita.

2. Promover el fortalecimiento de las comunidades y las organizaciones sociales en los proyectos de vivienda que hacen parte del Programa de Vivienda Gratuita y fomentar la integración y articulación entre estas y las comunidades y organizaciones localizadas en las zonas vecinas a los referidos proyectos.

3. Impulsar la coordinación institucional pública y privada, conforme a sus competencias y responsabilidades, en torno a los proyectos de vivienda que hacen parte del Programa de Vivienda Gratuita.



4. Articular la oferta social para el beneficio de los hogares que habitan los proyectos de vivienda que hacen parte del Programa de Vivienda Gratuita.

5. Coordinar la implementación de los programas y proyectos de acompañamiento social y/o infraestructura social, destinados a los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.

6. Promover el acompañamiento social (familiar y comunitario) a los hogares y comunidades beneficiarias del Programa de Vivienda Gratuita, sin perjuicio de las funciones de coordinación atribuidas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Artículo 5°. *Integración del SNAIS.* El Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita estará integrado por las siguientes entidades:

1. La Vicepresidencia de la República.
2. El Ministerio del Interior.
3. El Ministerio de Justicia y del Derecho.
4. El Ministerio de Defensa Nacional.
5. El Ministerio de Salud y Protección Social.
6. El Ministerio del Trabajo.
7. El Ministerio de Educación Nacional.
8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
9. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
10. El Ministerio de Cultura.
11. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
12. El Departamento Nacional de Planeación.
13. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
14. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.
15. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.
16. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
17. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.
18. La Policía Nacional.
19. Las gobernaciones y las alcaldías de las entidades territoriales en las cuales se ejecuten proyectos de vivienda en el marco del Programa de Vivienda Gratuita.

Artículo 6°. *Consejo Ejecutivo del SNAIS.* Créase un Consejo Ejecutivo, como máxima instancia de dirección del SNAIS, el cual estará integrado así:

1. El Vicepresidente de la República, o su delegado.
2. El Ministro del Interior, o su delegado.
3. El Ministro de Justicia y del Derecho, o su delegado.
4. El Ministro de Salud y Protección Social, o su delegado.
5. El Ministro de Trabajo, o su delegado.
6. El Ministro de Educación Nacional, o su delegado.
7. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, o su delegado.
8. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su delegado.
9. El Ministro de Cultura, o su delegado.
10. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su delegado, quien lo presidirá.
11. El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.
12. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, o su delegado.
13. El Director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, o su delegado.
14. El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, o su delegado.
15. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o su delegado.
16. El Director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, o su delegado.
17. El Director de la Policía Nacional, o su delegado.

Parágrafo 1°. El Consejo Ejecutivo podrá invitar a las sesiones a funcionarios y/o representantes de entidades públicas y privadas, para analizar temas relacionados con las funciones a su cargo. Estos invitados asistirán con voz pero sin voto.

Parágrafo 2°. Los funcionarios que deleguen los integrantes del Consejo Ejecutivo para asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del mismo deberán ejercer un cargo de nivel directivo o asesor dentro de la entidad respectiva.

Parágrafo 3°. La Secretaría Técnica será ejercida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la cual tendrá dentro de sus funciones organizar las sesiones del Consejo Ejecutivo; elaborar y custodiar las actas de cada sesión; consolidar los documentos que se presenten para estudio o aprobación, y las demás que le asigne el Consejo Ejecutivo o que se establezcan en el reglamento interno aprobado por este.

Artículo 7°. *Funciones del Consejo Ejecutivo.* El Consejo Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

1. Realizar las observaciones y recomendaciones al plan de acción de acompañamiento social a los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita que presente el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de sus funciones de coordinación.

2. Avalar la priorización de la infraestructura social que debe ejecutarse, en los eventos en que se formulen diferentes ofertas de infraestructura social para un mismo proyecto de vivienda gratuita, presentada al Comité Técnico del SNAIS.

3. Definir las estrategias integrales de corto y mediano plazo que viabilicen la sostenibilidad de los proyectos de vivienda gratuita, de acuerdo con los contextos y condiciones actuales de estos.

4. Evaluar los análisis y recomendaciones propuestos por las entidades competentes a la estrategia de acompañamiento social al Programa de Vivienda Gratuita.

5. Definir estrategias de coordinación entre las instituciones públicas y privadas, conforme a las competencias y responsabilidades de estas, en torno a los proyectos de vivienda que hacen parte del Programa de Vivienda Gratuita.

6. Darse su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto.

7. Las demás que le atribuya el reglamento.

Artículo 8°. *Reuniones del Consejo Ejecutivo.* El Consejo Ejecutivo se reunirá por convocatoria de su presidente, ordinariamente cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando el Presidente del Consejo lo convoque. Las convocatorias se realizarán de conformidad con lo establecido en el reglamento interno que apruebe el Consejo Ejecutivo.

Parágrafo. El Consejo Ejecutivo podrá deliberar válidamente con la presencia de la mitad más uno (1) de sus integrantes. Sus decisiones serán adoptadas por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes. De todas las reuniones y decisiones se dejará constancia en acta, que será suscrita por la Secretaría Técnica y el Presidente del Consejo Ejecutivo.

Artículo 9°. Comité Técnico del SNAIS. Como instancia de apoyo al Consejo Ejecutivo, créase el Comité Técnico del SNAIS que estará integrado por:

1. Un funcionario designado de la Vicepresidencia de la República.
2. Un funcionario designado del Ministerio del Interior.
3. Un funcionario designado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
4. Un funcionario designado del Ministerio de Cultura.
5. Un funcionario designado del Departamento Nacional de Planeación.
6. Un funcionario designado del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
7. Un funcionario designado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.
8. Un funcionario designado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y tendrá entre sus funciones la organización de las reuniones del Comité, elaborar las actas de cada reunión y las demás que se establezcan en el reglamento interno.

Parágrafo 2°. El Comité Técnico convocará a sus sesiones a los miembros del SNAIS para analizar temas relacionados con las funciones a su cargo. Igualmente, podrá invitar a estas sesiones a representantes de otras entidades públicas y privadas.

Artículo 10. *Funciones del Comité Técnico.* El Comité Técnico del SNAIS tendrá las siguientes funciones:

1. Previa concertación en el Comité, presentar ante el Consejo Ejecutivo las estrategias y el plan de acción de acompañamiento social a los beneficiarios del Programa de vivienda Gratuita, así como los proyectos de infraestructura social que benefician a esta población.
2. Analizar y monitorear el avance del acompañamiento social y la infraestructura social, para lo cual podrá solicitar la información necesaria a las entidades competentes.
3. Elaborar y presentar informes, análisis y recomendaciones al Consejo Ejecutivo, por iniciativa propia o por solicitud de este último, en relación con los avances y la integralidad en materia de acompañamiento social e infraestructura social.
4. Efectuar recomendaciones al Consejo Ejecutivo, respecto de la priorización de la infraestructura social que debe ejecutarse, en los eventos en que se presenten diferentes ofertas de infraestructura social para un mismo proyecto del Programa de Vivienda Gratuita.
5. Consolidar las iniciativas de las mesas o instancias territoriales para el acompañamiento social al Programa de Vivienda Gratuita, monitorear la respuesta a las mismas por parte de las entidades competentes, y efectuar las recomendaciones que estime pertinentes.
6. Aprobar su reglamento interno.
7. Las demás que le asigne el Consejo Ejecutivo, para el cumplimiento de los objetivos del SNAIS señalados en este decreto.

Artículo 11. *Comité de Infraestructura Social.* Como instancia de apoyo al Comité Técnico, créase el Comité de Infraestructura Social que estará integrado por:

1. Un delegado o funcionario designado de la Vicepresidencia de la República.
2. Un delegado o funcionario designado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
3. Un delegado o funcionario designado del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica del Comité de Infraestructura será ejercida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y tendrá dentro de sus funciones la convocatoria de las reuniones del Comité, elaborar las actas de cada reunión, y las demás que se establezcan en el reglamento interno.

Parágrafo 2°. El Comité de Infraestructura Social convocará a sus sesiones a los miembros del SNAIS, que considere pertinentes para analizar temas relacionados con la Infraestructura Social. Igualmente, podrá invitar a estas sesiones a representantes de otras entidades públicas y privadas.

Artículo 12. *Funciones del Comité de Infraestructura Social.* El Comité de Infraestructura Social tendrá las siguientes funciones:

1. Analizar y evaluar los requerimientos que se formulen desde las entidades territoriales, en relación con la infraestructura social de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita.
2. Servir como instancia de concertación, articulación interinstitucional y resolución de conflictos, frente a la priorización en la ejecución de proyectos de infraestructura y la disponibilidad de predios y recursos.
3. Impulsar acciones público-privadas para la ejecución de proyectos de infraestructura social en los Programas de Vivienda Gratuita que promueva el Gobierno nacional.
4. Gestionar recursos con destino a la promoción y construcción o adecuación de infraestructura social en los Programas de Vivienda Gratuita promovidos por el Gobierno nacional.
5. Aprobar su propio reglamento interno.

Artículo 13. *Instancias Territoriales para el Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita.* Las entidades del orden departamental, distrital y municipal podrán crear mesas de acompañamiento social o similares, con el fin de coordinar las acciones públicas y privadas para la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de la oferta social requerida por los hogares beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, y articular en sus respectivos ámbitos la oferta social de las diferentes entidades, de acuerdo con sus competencias.

Las referidas instancias tendrán, entre otras, las siguientes funciones, sin perjuicio de las establecidas en la ley para las entidades territoriales:

**1. Para las Mesas Territoriales del orden departamental:**

- 1.1. Realizar a nivel departamental la articulación de la oferta social de las diferentes entidades públicas y privadas para el acompañamiento social de los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.
- 1.2. Brindar asistencia técnica a los municipios en el marco del acompañamiento social a los hogares beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, lo que incluye la asistencia técnica para la construcción, dotación y operación de la infraestructura social necesaria, en los casos que corresponda.
- 1.3. Propender por la dotación y operación de la infraestructura social de los proyectos de vivienda del Programa de Vivienda Gratuita.

**2. Para las Mesas Territoriales del orden distrital o municipal:**

- 2.1. Elaborar un plan de acción para el acompañamiento social a los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, en coordinación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
- 2.2. Apoyar el proceso de caracterización de la población beneficiaria de los proyectos de vivienda del Programa de Vivienda Gratuita, y la identificación de sus necesidades prioritarias, para efectos del proceso de acompañamiento social.
- 2.3. Divulgar las necesidades de los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda del Programa de Vivienda Gratuita ante las instancias de coordinación existentes para la superación de la pobreza (Consejos de Política Social), la atención y reparación integral de las víctimas (Comité de Justicia Transicional), y en instancias del gobierno local como Consejos de Gobierno y Consejos de Seguridad.
- 2.4. Coordinar a nivel municipal o distrital la articulación de la oferta social nacional y local, pública y privada, y aunar esfuerzos para promover la superación de vulnerabilidades de los hogares beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita; esto incluirá la gestión para la construcción, dotación y operación de la infraestructura social necesaria para atender a dicha población.
- 2.5. Monitorear el avance del acompañamiento social a los proyectos del programa de vivienda gratuita que se encuentren en su municipio, así como el cumplimiento de las obligaciones que adquieren los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda otorgado en el marco del Programa.

Parágrafo 1°. Los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales definirán la entidad territorial que ejercerá la Secretaría Técnica de las mesas en sus respectivos ámbitos. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá ejercer la Secretaría Técnica de las mesas territoriales de los departamentos, distritos o municipios capital de departamento.

Parágrafo 2°. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 1537 de 2012, las labores de asistencia y acompañamiento ejercidas por parte de los departamentos deberán orientarse principalmente a los municipios de 4a, 5a y 6a categoría, y en todo caso con prioridad cuando sean los mismos municipios los que adelanten programas de subsidios familiares de vivienda en especie.

TÍTULO 2  
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 14. *Acompañamiento comunitario.* El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, o la entidad que haga sus veces, implementará y brindará acompañamiento social comunitario a los beneficiarios de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con los protocolos establecidos para el efecto, a partir de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa.

Parágrafo. Los hogares beneficiarios de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita serán incluidos en la Red para la Superación de Pobreza Extrema que coordina el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, o la entidad que haga sus veces.

Artículo 15. *Avances en la oferta social.* Las entidades con competencias para diseñar y ejecutar oferta social deberán tener en cuenta las recomendaciones que realicen los comités del SNAIS en el marco de sus funciones, y presentar oportunamente los informes y análisis solicitados por los mismos.

Artículo 16. *Seguimiento y monitoreo al acompañamiento social.* En el marco de sus funciones, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante el mecanismo o instancia que determine, hará seguimiento al impacto del acompañamiento social en la calidad de vida de la población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita, en

particular, en aspectos como el uso y cuidado de las unidades de vivienda, de las zonas comunes y de la infraestructura social, y las dinámicas económicas y sociales que se generen. Este seguimiento se realizará con base en la información disponible elaborada por las entidades públicas integrantes del SNAIS y aquellas privadas involucradas en los proyectos.

Artículo 17. *Educación para la convivencia a través de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).* En el marco de sus funciones, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Viceministerio de Promoción de la Justicia, en coordinación con las mesas territoriales para el acompañamiento social, cuando estas se implementen, o directamente con las entidades territoriales, realizará campañas educativas para promover la utilización de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos entre los beneficiarios de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita y las organizaciones comunitarias que se conformen en los proyectos.

Parágrafo. En los departamentos o municipios en los que no se hayan creado, mesas territoriales, el Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará estas acciones directamente con las dependencias o entidades competentes en los niveles departamental, municipal o distrital.

Artículo 18. *Asistencia Técnica para la Convivencia Pacífica, el respeto por la diversidad y el fortalecimiento de las organizaciones sociales.* En el marco de sus funciones, el Ministerio del Interior brindará asistencia técnica a las mesas territoriales de acompañamiento social o a las Entidades Territoriales, para promover la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad, y fortalecer la gestión de las organizaciones comunales en los proyectos de vivienda objeto del presente decreto donde estas se requieran.

Artículo 19. *Asesoría en asuntos de propiedad horizontal.* En el marco de sus funciones, el Ministerio del Interior brindará asesoría a las entidades territoriales para la constitución, buen funcionamiento, sostenibilidad y resolución de conflictos de los órganos de propiedad horizontal constituidos por parte de los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda del Programa de Vivienda Gratuita que así lo requieran.

Artículo 20. *Vigencia.* El presente Decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de abril de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

*Juan Fernando Cristo Bustos.*

El Ministro de Justicia y del Derecho,

*Yesid Reyes Alvarado.*

El Ministro de Defensa Nacional,

*Luis C. Villegas Echeverri.*

El Ministro de Salud y Protección Social,

*Alejandro Gaviria Uribe.*

El Ministro del Trabajo,

*Luis Eduardo Garzón.*

La Ministra de Educación Nacional,

*Gina María Parody D'Echeona.*

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

*Luis Felipe Henao Cardona.*

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

*David Luna Sánchez.*

La Ministra de Cultura,

*Mariana Garcés Córdoba.*

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

*María Lorena Gutiérrez Botero.*

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

*Simón Gaviria Muñoz.*

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

*Liliana Caballero Durán.*

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

*Tatiana Orozco de la Cruz.*

El Director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre,

*Andrés Botero Phillipsbourne.*

VARIOS

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 – 1005 DE 2016

(marzo 27)

*por medio de la cual se reglamenta el Centro Administrativo de Control y Monitoreo de los Sistemas Electrónicos de Seguridad “Cacym”.*

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 251 de la Constitución y el artículo 4° del Decreto 016 de enero 9 de 2014, y



CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución, corresponde a la Fiscalía General de la Nación, el ejercicio de la acción penal.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° numeral 19 del Decreto número 016 de 2014 “por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación”, es función del Fiscal General “expedir reglamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización y procedimiento conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de la Nación”.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto número 016 de 2014, a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia le corresponde “asesorar al Fiscal General de la Nación en la formulación y definición de políticas en materia de protección y asistencia social para servidores de la Fiscalía, víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal, cuando estos se encuentren en riesgo o amenaza de sufrir agresión a sus derechos, por causa de la intervención en un proceso penal”; asimismo, le corresponde “asesorar a las dependencias de la Entidad en el ámbito de su competencia”.

Que mediante Resolución número 0570 de 2014, se organizó internamente la Dirección Nacional de Protección y Asistencia. Para ello, se estableció “que de conformidad con lo señalado en el Decreto ley 016 de 2014, corresponde a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, en coordinación con las demás dependencias de la Fiscalía General de la Nación, organizar la protección y el desarrollo de programas de asistencia a víctimas, testigos, servidores e intervinientes, en las investigaciones y procesos que son de conocimiento de la Fiscalía, en el marco de sus competencias”.

Que mediante Resolución número 1704 de 2014, se establecieron las “Políticas Generales de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación”. Dicha resolución dispone en su artículo 2° que “las Políticas Generales de Seguridad constituyen el conjunto de directrices institucionales en materia de seguridad y prevención, que deben ser observadas y acatadas”. Además, en cuanto a sus fines, dispone que “están encaminados al desarrollo dinámico, unificado y armónico de medidas de seguridad, tendientes a prevenir, detectar y neutralizar riesgos actuales y futuros en la Fiscalía General de la Nación, en la implementación de esquemas de protección, por parte de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia”.

Que mediante Resolución número 022 de 2008 –de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI)–, se creó el “Centro Administrativo de Control y Monitoreo de los Sistemas Electrónicos de Seguridad (Cacym)”.

RESUELVE:

Artículo 1°. *Definiciones.* En la presente resolución deben considerarse las siguientes definiciones:

– *Elementos de seguridad electrónica:* Conjunto de instrumentos técnicos, electrónicos, eléctricos, alarmas mecánicas, circuitos cerrados de televisión (en adelante, CCTV) y sistemas integrados de telefonía conectados a un sistema informático, que se utilizan para la seguridad de personas y bienes con el fin de evitar hurtos, incendios, atentados terroristas y daños de toda naturaleza a la infraestructura de la Fiscalía General de la Nación.

*Seguridad electrónica:* Se refiere a la protección de personas, instalaciones físicas, parque automotor, bienes muebles e inmuebles de todo tipo y su entorno, mediante elementos como CCTV, cámaras para vigilancia de accesos, cerraduras de alta seguridad eléctricas o electrónicas, emisoras de radio comunicadas con el personal de seguridad, alarmas contra-incendio, alarmas eléctricas, electrónicas o manuales.

*Control y monitoreo de sistemas electrónicos de seguridad:* Se entenderá toda actividad desplegada por los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, orientada a administrar y supervisar los sistemas de seguridad electrónica al interior de la Entidad.

Artículo 2°. *Dependencia.* El “Centro Administrativo de Control y Monitoreo de los Sistemas Electrónicos de Seguridad – Cacym” dependerá de manera funcional y jerárquica del Departamento de Seguridad de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, dependencia que asumirá su administración, control y supervisión, tanto en el nivel central como en las diferentes seccionales.

Los encargados de Cacym en las seccionales serán el enlace con el Departamento de Seguridad y su unidad central de Cacym, teniendo la responsabilidad de implementar las políticas y directrices que sean emanadas del Nivel Central. Además, deberán responder por el servicio las 24 horas del día y reportar de forma permanente y obligatoria las novedades que se presenten.

Artículo 3°. *Funciones.* El grupo responsable de Cacym se encargará de implementar, administrar y operar los sistemas de seguridad electrónicos y eléctricos, CCTV, control de accesos biométricos, control de visitantes, sistemas de detección de incendios, sistemas de intrusión perimetral, sistemas de control de parqueaderos, sistemas de telefonía integrados al sistema de seguridad y otros que sean implementados por Cacym en la Fiscalía General de la Nación incluyendo las áreas que sean necesarias en cada uno de estos temas.

Artículo 4°. *Integración.* El grupo responsable de Cacym estará integrado por servidores adscritos a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, de acuerdo con las necesidades del Nivel Central y de las respectivas Seccionales. Estos funcionarios serán seleccionados según los perfiles definidos en el manual de funciones de la entidad. Además, serán capacitados y entrenados para la operación técnica, administrativa y conservación especializada de la información obtenida de los diferentes sistemas de seguridad electrónica que conformen el Cacym.

Artículo 5°. *Coordinación nacional.* La coordinación nacional de Cacym responderá por la gestión en el control y seguridad de la Fiscalía General de la Nación, sus servidores y otras personas que puedan verse afectadas, mediante la utilización de elementos y sistemas de seguridad electrónica y eléctrica, los cuales deberán organizar y administrar de acuerdo a lo entregado por la oficina de bienes de la Entidad. Además, la coordinación nacional de Cacym deberá planificar, diseñar, modernizar y asesorar en compañía de las diferentes áreas que intervengan en el tema a los centros de monitoreo del nivel central y de cada una de las

seccionales que cuenten con estos elementos y sistemas de seguridad. Cuando no cuenten con este sistema, deberá procurar su implementación.

Artículo 6°. *Operadores.* Los operadores y supervisores de equipos electrónicos, sistemas informáticos y en general de la tecnología utilizada en la seguridad, adscritos a Cacym, serán responsables del manejo, manipulación, revisión, y articulación de los diferentes equipos técnicos y tecnológicos al servicio de la seguridad de la Fiscalía General de la Nación. Los operadores coordinarán con las centrales de comunicaciones a cargo del CTI en el Nivel Central y en las Seccionales, para integrarlas a las alarmas y controles electrónicos que se desprendan del sistema Cacym.

Artículo 7°. *Programas de seguridad.* Conforme a las Normas Internacionales de Seguridad, Cacym deberá favorecer la gestión en control y seguridad electrónica en los programas de seguridad. Para ello, deberá adoptar medidas operacionales en la preparación de dichos programas, con atención a los siguientes parámetros:

- a) Requerimientos de seguridad electrónica de la institución en todo el territorio nacional.
- b) Potencial de la organización para cumplir los requisitos económicos y humanos.
- c) Vulnerabilidad de la organización a problemas de seguridad actuales y futuros.
- d) Alternativas disponibles, según tecnología y costos, para ser utilizadas por la institución para cubrir las necesidades de seguridad.
- e) Procedimientos y protocolos escritos para aplicación interna y externa.
- f) Capacitación del personal.
- g) Evaluación de los servicios y equipos contratados.
- h) Programas de integración en comunicaciones con otras entidades del Estado.

Artículo 8°. *Técnicos de soporte.* Los técnicos de soporte de Cacym deberán ser certificados para ello. Además, deberán ser entrenados técnicamente por las empresas que suministran los equipos a la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 9°. *Homologación y estandarización.* El grupo de Cacym solicitará a la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión, la Subdirección de Tecnologías y Comunicaciones, Subdirección de Gestión Contractual o cualquier otra área que necesite su apoyo para que el grupo Cacym realice la homologación y estandarización de las tecnologías de control de acceso, circuito cerrado de televisión, sistemas de detección de incendio, sistemas de extinción de incendios, sistemas de administración y control de electromecánicos, alarmas, centros de control y demás tecnologías que se empleen en la seguridad electrónica, para así favorecer la administración, tiempos de servicio y conocimiento de los productos y servicios en beneficio de la eficacia y eficiencia de la Fiscalía General de la Nación.

Parágrafo 1°. Los servidores, funcionarios que requieran equipos de seguridad electrónica, soluciones de tecnología de seguridad física deben coordinar todas sus decisiones con la Dirección Nacional de Protección y Asistencia a través del Departamento de Seguridad-Grupo Cacym, y este, a su vez, obtendrá aprobación de la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión y la Subdirección de las Tecnologías de las Comunicaciones para así mantener la estructura tecnológica de la Fiscalía General de la Nación.

Parágrafo 2°. El servidor o servidores que procedan a gestionar, adquirir, aprobar la compra o aceptar la donación de equipos sin cumplir los requisitos establecidos en este artículo se harán acreedores a las sanciones a que haya lugar.

Artículo 10. *Apoyo tecnológico para la seguridad del Fiscal y Vicefiscal General de la Nación.* El Grupo responsable del Centro Administrativo de Control y Monitoreo de los Sistemas Electrónicos de Seguridad (Cacym) será responsable de la supervisión e implementación de los sistemas electrónicos de seguridad y CCTV en las residencias de los señores(as) Fiscal y Vicefiscal General de la Nación, con el fin de reducir los riesgos sobre ellos o sus familias.

Artículo 11. *Apoyo técnico a salas de paso.* El grupo responsable de Cacym suministrará la información que obtenga en cámaras, teléfonos, registros filmicos o documentales del momento de ingreso y salida de retenidos, abogados, visitantes y servidores que transiten por sectores donde operan estos sistemas, cuando sea solicitado por escrito y debidamente motivado por un funcionario que lleve una indagación o investigación penal, un proceso administrativo o disciplinario.

La seguridad de las salas de paso es responsabilidad de los servidores de la Dirección Nacional del CTI; de las Subdirecciones Seccionales de Policía Judicial que prestan sus servicios en esas salas; o de la Policía Nacional, cuando custodia las salas de paso de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), según sea el caso, para lo cual la Dirección Nacional de Protección y Asistencia prestará toda su colaboración cuando le sea solicitada.

Artículo 12. *Vigencia.* La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 022 de noviembre de 2008.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de marzo de 2016.

El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.  
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 – 1006 DE 2016

(marzo 27)

por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 251 de la Constitución y el artículo 4° del Decreto 016 de enero 9 de 2014, y

## CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 2°, inciso 2°, de la Constitución Política, “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Que el artículo 250, numeral 7, Ibid., dispone que, en el marco del proceso penal y dentro de su campo de competencia, corresponde a la Fiscalía General de la Nación “velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal”.

Que por su parte, el Decreto-ley número 016 de 2014, “Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación”, establece en su artículo 28 numeral 2 que es competencia de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia “Dirigir y administrar el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía de que trata la Ley 418 de 1997 y las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten, para lo cual podrá requerir apoyo a la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación”.

Que además de lo anterior, en su numeral 4 este mismo artículo establece que le corresponde a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia “Desarrollar, implementar y controlar las medidas de protección, así como los programas de asistencia integral para las personas que hayan sido beneficiadas por parte del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación”.

Que el numeral 9 del artículo 28 del Decreto-ley número 016 de 2014 determina que la Dirección Nacional de Protección y Asistencia es la única que puede “Calificar el nivel de riesgo y evaluar, con autonomía, las medidas de protección o asistencia social, el nexo causal entre el riesgo y la participación del testigo o la víctima dentro de la indagación, investigación o proceso penal; así mismo, decidirá con autonomía, la vinculación, desvinculación o exclusión de los beneficiarios del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso”.

Que en concordancia con las anteriores disposiciones, la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal dentro del sistema penal acusatorio, en su artículo 114, numeral 6, prescribe que la Fiscalía General de la Nación debe “velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar”.

Que el artículo 67 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014, creo “con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de Protección a Testigos; Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual se les otorgará Protección Integral y Asistencia Integral, lo mismo que a sus familiares (...), cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos”.

Que el artículo 70 indica que las peticiones serán tramitadas conforme al procedimiento que establezca la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, mediante una resolución expedida por el Fiscal General de la Nación, quien delega las funciones en el Director Nacional de Protección y Asistencia, de acuerdo con lo estipulado en la presente resolución.

Por otro lado, a través de la Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en su artículo 15 señaló que “la Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio”.

El artículo 22, numeral 1, de la Ley 1719 de 2014 determina que “se presume [para las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado]... el riesgo de sufrir nuevas agresiones las cuales puedan afectar su seguridad personal e integridad física, y la existencia de riesgos desproporcionados de violencia sexual de las mujeres colombianas en el conflicto armado conforme a lo previsto en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. En consecuencia, la adopción de las medidas provisionales de protección a que haya lugar, no podrá condicionarse a estudios de riesgo por ninguna de las autoridades competentes.” Y el numeral 2 agrega: “En todos los casos, los programas de protección deberán incorporar un enfoque de Derechos Humanos hacia las mujeres, generacional y étnico, y armonizarse con los avances legislativos, y los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”.

Que la Resolución número 0-5101 de agosto 15 de 2008 reglamentó el Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, en la actualidad esta norma es insuficiente para regular todos los supuestos de hecho relacionados con el Programa, razón por la cual resulta imperativo desarrollar y actualizar la normatividad con la nueva realidad jurídica y constitucional.

En mérito de lo expuesto el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE:

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

CAPÍTULO 1

**Principios rectores**

Artículo 1°. *Dignidad humana.* Todas las actuaciones desarrolladas dentro de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia se harán con respeto por la dignidad inherente al ser humano racional, razonable, libre y autónomo.

Artículo 2°. *Igualdad.* Todas las personas recibirán la misma protección, respeto y trato de los funcionarios que integran la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Todos los protegidos gozarán de los mismos derechos, libertades, obligaciones, deberes y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, edad, género, etnia, salud, discapacidad u opción sexual.

En todo caso, existirán condiciones distintas, según cada situación concreta, con el propósito de otorgar protección y asistencia. En efecto, se tendrá en cuenta la situación particular de cada beneficiario, así como el factor diferencial y de género.

Parágrafo. Excepcionalmente el Director Nacional de Protección y Asistencia podrá ordenar la implementación de medidas diferentes a las dispuestas en esta normatividad, siempre que se encuentren justificadas y sean eficaces para garantizar la vida e integridad personal en el caso concreto.

En estos casos, se evaluará (i) la proporcionalidad de las medidas; (ii) la situación particular del protegido; (iii) y la eficacia de estas. Por tanto, las medidas de protección no se entenderán reducidas a las contempladas en la resolución. Sin embargo, serán rodeadas del principio de excepcionalidad, subsidiariedad y autonomía del Director Nacional de Protección y Asistencia.

**Libertad en el consentimiento:** Nadie será obligado a vincularse o a permanecer en el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. La decisión de incorporarse o retirarse del programa es voluntad del ciudadano o servidor, quien será informado de las condiciones y consecuencias de su determinación.

El ingreso al Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación implica una serie de limitaciones y deberes para el protegido, las cuales se justifican en el interés superior de proteger su vida e integridad personal.

El individuo que ingresa al Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación debe considerar que se encuentra en una situación de especial sujeción ante el organismo estatal encargado de su amparo. Justamente ello implica que el beneficiario puede verse sometido a restricciones en el ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales y libertades en general. Aun así de aclararse que dichas restricciones no afectan el núcleo esencial de los derechos y libertades, y se mantienen dentro de los cauces de lo razonable y lo proporcional.

Cualquier restricción o limitación tendrá la finalidad de proteger la vida e integridad personal.

Artículo 3°. *Celeridad.* Todos los procedimientos administrativos o de Policía Judicial realizados dentro de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia se ejecutarán dentro de los términos establecidos sin dar lugar a dilaciones injustificadas.

Artículo 4°. *Reserva de la información.* Los documentos, las actuaciones y la información sobre las actividades desarrolladas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia se mantendrán bajo estricta reserva. De este modo, se constituirán en una garantía en el respeto y protección de los derechos fundamentales de todos los que hacen parte del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

Las erogaciones que se ordenen o ejecuten para los fines del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación tendrán carácter reservado. En ningún caso se revelará la identidad del beneficiario.

La violación de la reserva por parte de cualquier persona acarreará las sanciones penales y disciplinarias del caso. Esta reserva tiene fundamento en lo dispuesto por el legislador.

Artículo 5°. *Compartimentación.* Toda decisión y ejecución de medidas que realice la Dirección Nacional de Protección y Asistencia estará sujeta a la compartimentación de la información.

La compartimentación se refiere a la división de la información, documentación y demás elementos o recursos de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia en unidades menores con el fin de reducir el riesgo de accesos no autorizados a la información completa relacionada con una protección en particular o una actuación específica de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

El Director Nacional de Protección y Asistencia tendrá acceso a la totalidad de la información y determinará qué unidades o funcionarios pueden acceder a la misma al momento de evaluar o tomar alguna decisión.

Artículo 6°. *Gratuidad.* Los procedimientos de protección y asistencia ejecutados por el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación no causarán erogación alguna a los beneficiarios.

La ejecución de las medidas de protección y asistencia integral estarán condicionadas a la disponibilidad presupuestal de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 7°. *Eficacia.* Los funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia buscarán que los procedimientos y medidas logren su finalidad. Para el efecto, removerán de oficio los obstáculos meramente formales, evitarán dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación.

Igualmente, se procurará la utilización racional y razonable de los recursos establecidos para el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 8°. *Necesidad.* Las medidas de Protección y Asistencia se otorgarán a los beneficiarios, de acuerdo con las verificaciones, inspecciones y evaluaciones técnicas de amenaza y riesgo que se realicen por parte de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia con el fin de proteger los derechos a la vida e integridad personal. Estas medidas



estarán condicionadas al presupuesto de la Fiscalía General de la nación, así como a la necesidad de su implementación.

Las medidas de Protección y Asistencia pueden ser modificadas si las condiciones varían y si la evaluación técnica de amenaza y riesgo así lo determina.

En la incorporación inmediata se valorará la naturaleza de los hechos y se tomarán las medidas que se consideren idóneas y conducentes para preservar la vida de quien se encuentra en riesgo extremo.

Los candidatos a protección, o sus beneficiarios, no podrán imponer condiciones o medidas, dado que estas se tomarán de acuerdo con las verificaciones que realice el respectivo programa.

Artículo 9°. *Proporcionalidad*. Cualquier ejecución de medidas de protección y asistencia que implique una limitación en los derechos a la libre locomoción -de domicilio y demás derechos o libertades fundamentales a los beneficiarios- serán consecuencia de un examen previo de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.

Parágrafo. Los derechos y beneficios a los protegidos también generan deberes, entre los cuales estará su autoprotección o la imposibilidad de la auto puesta en peligro de sus derechos fundamentales.

Así mismo, los protegidos tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de los demás, ya sean otros protegidos o servidores del programa.

Artículo 10. *Transparencia*. La actuación de los servidores de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia estará sujeta a los valores del sistema democrático. De modo que le brinden información al beneficiario sobre todos sus derechos, obligaciones y deberes al momento de su incorporación al programa, así como de las razones o motivos de su desvinculación o exclusión.

Artículo 11. *Temporalidad*. Las medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia hacia los beneficiarios tienen el carácter de temporales. Además, no constituyen derechos adquiridos y están sujetas a revisión periódica.

Las medidas de protección y asistencia finalizarán cuando se acredite la ocurrencia de alguna causal de desvinculación o exclusión de las establecidas en este ordenamiento, de acuerdo con el control periódico que se realice a la situación personal y procesal de cada beneficiario por parte del Programa.

En caso de exclusión, cesarán de manera inmediata los compromisos adquiridos por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia con el beneficiario y también finalizarán las medidas de asistencia integral que se desarrollen y que aún no se hayan entregado al protegido.

No habrá lugar a reclamación de medidas asistenciales que no se hayan entregado si opera la exclusión unilateral, dado que estas medidas no se tratan de derechos adquiridos.

Artículo 12. *Protección integral*. Se entiende por protección integral de los beneficiarios todas las medidas de protección y asistencia encaminadas a la protección real, material, eficaz y efectiva del derecho a la vida, a la tranquilidad y a la integridad personal del beneficiario para que este pueda colaborar con la administración de justicia sin ningún riesgo.

La seguridad personal es un derecho fundamental autónomo que permite exigir medidas específicas de protección con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal -que no tienen el deber jurídico de soportar- y que la Dirección Nacional de Protección y Asistencia puede conjurar o mitigar.

Artículo 13. *Validez probatoria*. Los documentos que se expidan durante el procedimiento para proteger a una persona vinculada al Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación tendrán valor probatorio.

Los elementos materiales de prueba o evidencia física obtenida durante la revisión periódica de las medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia -que acrediten la realización de alguna conducta típica penal o disciplinaria por parte de algún beneficiario- tendrán eficacia y validez probatoria en un eventual proceso judicial o administrativo.

Artículo 14. *Concertación*. Existirá coordinación entre las autoridades judiciales o fiscales y la Dirección Nacional de Protección y Asistencia cuando el beneficiario deba comparecer ante cualquier autoridad, con el fin de garantizar su presencia en cualquier actuación, diligencia o audiencia, de manera que se aseguren sus condiciones de seguridad, sin perjuicio de la reserva de su identidad.

Las normas que se refieran a investigaciones o procesos penales, de manera general deberán interpretarse en la medida que hacen referencia a todas aquellas diligencias, fases procesales o audiencias que consagran los Códigos de Procedimiento Penal vigentes en Colombia, es decir, la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, con sus respectivas modificaciones legislativas o jurisprudenciales.

Existirá concertación entre los servidores vinculados a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia para la ejecución de medidas de protección y asistencia integral.

Parágrafo. De manera progresiva se dispondrá lo necesario para la realización de teleconferencias donde los beneficiarios puedan intervenir en las respectivas diligencias o audiencias judiciales, sin que se requiera de un desplazamiento a la zona de riesgo. Así se asegurará la celeridad de las actuaciones judiciales y la racionalización de los recursos de la

Fiscalía General de la Nación.

Artículo 15. *Jerarquía institucional*. En las decisiones para la ejecución de medidas de protección y asistencia se respetará la estructura funcional y de autoridad establecida en la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 16. *Objetividad*. Los funcionarios que hacen parte de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia actuarán teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna.

No se tendrán en cuenta factores de afecto o de interés individual y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva que pueda afectar la decisión de vincular, desvincular o excluir a cualquier persona del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 17. *Prevalencia del interés general*. El interés general prevalecerá sobre el particular. Toda decisión al interior de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia buscará proteger la vida e integridad de todos los beneficiarios, funcionarios de la Dirección Nacional y de la comunidad o grupo al que pertenece.

Artículo 18. *Factor diferencial y de género*. En el marco del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se ejercerán acciones para contrarrestar o minimizar la forma distinta -a veces desproporcionada- en que la violencia y las amenazas afectan a determinados grupos sociales en relación con sus características particulares de edad, género, etnia, salud, discapacidad, opción u orientación sexual.

Estas diferencias, determinadas de manera cultural, social e histórica, resultan decisivas en la aplicación de todos los dispositivos de prevención y protección establecidos al interior de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, y en la forma en que las entidades deben establecer su trato con los sectores mencionados, a fin de no perpetuar la discriminación y el daño causado.

Parágrafo. Cuando se tomen medidas complementarias de carácter asistencial orientadas a la atención de necesidades primarias, tales como salud, educación, recreación, se tendrá en cuenta el factor diferencial y de género. Se hará lo mismo con el apoyo psicosocial y orientación jurídica.

Artículo 19. *Autonomía*. La Dirección Nacional de Protección y Asistencia goza de autonomía para tomar las respectivas decisiones relacionadas con el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de lo establecido en la Constitución, en la ley, en las políticas y directrices establecidas por el Fiscal General de la Nación.

La autonomía se predica en la calificación del nivel del riesgo, la decisión sobre medidas de protección o asistencia integral, así como de la incorporación, desvinculación y exclusión de los beneficiarios.

## CAPÍTULO II

### Programa de protección y asistencia

Artículo 20. *Naturaleza*. El “Programa de Protección a Testigos, Víctima, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación” fue creado a cargo del Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

El “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación” está a cargo de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia. En adelante, en esta resolución puede denominarse “*Programa de Protección y Asistencia*”.

Artículo 21. *Deberes del programa de protección y asistencia*. Son deberes del programa los siguientes:

a) Otorgar protección y asistencia integral a los beneficiarios -así como a sus familiares cuando las circunstancias debidamente acreditadas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia así lo determinen.

b) Proteger la identidad de los beneficiarios.

Artículo 22. *Gastos del programa de protección y asistencia*. Las erogaciones que se ordenen o ejecuten para el cumplimiento de los deberes legales de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia tendrán carácter reservado. Estarán sujetos al control de los entes que por ley lo puedan requerir además de la Contraloría General de la Nación.

Artículo 23. *Clases de programas de protección y asistencia*. La Dirección Nacional de Protección y Asistencia ejecuta los siguientes programas:

a) “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía”, creado por la Ley 418 de 1997, junto con sus prórrogas y modificaciones.

b) “Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005 Justicia y Paz”, junto con sus prórrogas y modificaciones.

## CAPÍTULO III

### Fiscales de conocimiento

Artículo 24. *Fiscales de conocimiento*. Delegado del Fiscal General de la Nación, que se encuentra a cargo de la indagación preliminar, investigación o juicio en los procesos penales regidos por la Ley 906 de 2004, o la investigación previa, instrucción o juzgamiento en procesos penales regulados por la Ley 600 de 2000, en los cuales deba comparecer como testigo(s) alguna(s) persona(s) beneficiaria(s) del programa.

Artículo 25. *Funciones del fiscal de conocimiento*. El delegado del Fiscal General de la Nación podrá realizar la solicitud de incorporación al Programa de Protección y Asistencia de cualquier persona en los términos y condiciones que se señalan en este cuerpo normativo y los formatos establecidos por la Entidad para ese fin específico.

Artículo 26. *Deberes del fiscal de conocimiento*. El fiscal de conocimiento tiene los siguientes deberes:

a) Emitir un concepto escrito respecto al estado del proceso penal y las particularidades de este, la importancia del testigo y su testimonio. Así podrán exponerse las razones que justificarían la posibilidad de incluir o no a un ciudadano al Programa de Protección y Asistencia.

Igualmente deberá incluir en el concepto datos o elementos que considere relevantes para decidir la incorporación o no al programa de la persona postulada.

b) Informar trimestralmente a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia sobre el estado del proceso y la práctica probatoria del mismo en lo correspondiente a la declaración, entrevista o testimonio, rendido por el beneficiario, a fin de controlar la duración de la incorporación del protegido al programa.

c) Informar a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia sobre el cambio de asignación, radicación, reparto y autoridad judicial correspondiente, conflictos de competencia y demás circunstancias procesales que incidan en la ubicación o el lugar de comparecencia del protegido para su respectivo testimonio.

d) Informar a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia sobre el comportamiento fraudulento o falsario del beneficiario, en perjuicio de la administración de justicia en caso de llegar a ocurrir.

e) Mantener la reserva de la información que este posea respecto del programa, medidas de protección, funcionarios y demás datos que pongan en peligro la vida e integridad del beneficiario, así como de los integrantes de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

f) Manejar en cuaderno separado, y a cargo exclusivo del Fiscal de Conocimiento, toda la documentación relacionada con la solicitud de incorporación del beneficiario y demás actuaciones relacionadas con la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

g) Responder los requerimientos o solicitudes de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, con la información necesaria y suficiente en el día hábil siguiente, por el medio más expedito, con el propósito de no entorpecer, retardar o interrumpir las actuaciones ejecutadas por la Dirección Nacional.

h) Impulsar y darle prioridad a las indagaciones, investigaciones, instrucciones, y en general, a los procesos judiciales ya sean de Ley 600 de 2000 o de Ley 906 de 2004, donde existan personas vinculadas al Programa de Protección y Asistencia como consecuencia de dicha actuación judicial. Este impulso y prioridad procesal también deberá ser solicitado por el fiscal a los jueces que conozcan el caso en las etapas procesales correspondientes.

i) Informar cuando la participación del beneficiario finalice en el proceso penal.

j) Informar cuando no requiera al testigo para que siga actuando en el proceso respectivo, a fin de tramitar la desvinculación.

k) Permitir la inspección al expediente en cualquier fase procesal cuando el Director Nacional de Protección y Asistencia lo requiera y designe a uno de los funcionarios para ello, en las evaluaciones periódicas de seguimiento al caso.

l) Dejar constancia de qué tipo de labores realizó para evitar que se cometa el delito de Fraude a Subvenciones, consagrado en el artículo 403 A del Código Penal.

Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes acarreará investigaciones disciplinarias en la Dirección de Control Disciplinario y en el Consejo Superior de la Judicatura u órgano competente.

Artículo 27. *Comunicación con el testigo por el fiscal de conocimiento.* El fiscal de conocimiento se podrá comunicar exclusivamente con el beneficiario del Programa de Protección y Asistencia, a través de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia por escrito. Las comunicaciones entre el fiscal de conocimiento y el beneficiario que no sean autorizadas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia constituirán una violación a las normas de seguridad.

Artículo 28. *Práctica de diligencias.* El fiscal de conocimiento o la autoridad que requiera al beneficiario para alguna audiencia o diligencia judicial deberá informar a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia con cinco (5) días hábiles de antelación, de manera que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad del beneficiario en su desplazamiento, estadía en la zona y presencia en el despacho o estrado judicial.

Parágrafo 1°. Durante la permanencia del beneficiario en la zona de riesgo, será responsabilidad del fiscal y de los agentes investigadores asegurar que se haga el mejor uso posible del tiempo del testigo en la práctica de diligencias o audiencias.

El beneficiario durará en la zona de riesgo únicamente el tiempo destinado para su intervención en la diligencia o audiencia, y retornará a su área de ubicación de forma inmediata cuando su participación en la audiencia o diligencia respectiva haya terminado.

Parágrafo 2°. En caso de que la diligencia sea la recepción de entrevista por parte del investigador o declaración jurada por parte del fiscal, esta actuación deberá realizarse en un lugar neutral que reduzca de forma significativa los requisitos de personal en el esquema de seguridad ofrecido por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia al beneficiario.

Parágrafo 3°. Progresivamente, se implementará la realización de teleconferencias que permitan efectuar diligencias o audiencias judiciales sin el traslado del beneficiario a la zona de riesgo.

Artículo 29. *Diligencias de campo u operativos.* En todo momento, el beneficiario estará bajo las medidas y esquemas de seguridad adoptadas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia para el caso concreto, sin que haya menoscabo en su obligación de comparecer o apoyar diferentes diligencias u operativos en campo abierto.

Parágrafo 1°. Para el caso de diligencias en campo, donde el protegido debe ingresar a zonas rurales para participar en diferentes diligencias, el mismo debe ser entregado mediante acta al fiscal de conocimiento que demande su presencia. Es responsabilidad del servidor solicitante gestionar la custodia, alimentación, hospedaje y protección del vinculado. Una vez finalizada la diligencia mediante acta, se deberá entregar al beneficiario nuevamente bajo la custodia de los funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo 2°. En caso de ser necesario, podrá solicitarse el apoyo a la Fuerza Pública (Policía Nacional) o Militar (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea), con el propósito de que se garantice la seguridad del protegido y del personal de la Dirección Nacional de Protección y Asistencial.

## CAPÍTULO IV

### Condiciones de protección

Artículo 30. *Condiciones procesales de protección.* Dentro de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia para el ingreso de cualquier persona como beneficiaria se tendrá en cuenta su condición procesal y material, de tal forma que se pueda establecer la viabilidad de la petición de protección:

a) **Víctima:** La Dirección Nacional de Protección y Asistencia considera víctima a la persona natural que ha sufrido una lesión en sus bienes jurídicos, o de su familiar en el primer grado de consanguinidad como consecuencia de la conducta punible que se investiga o juzga en los procesos penales regidos por las Leyes 600 de 2000 o 906 de 2004, y que a su vez, va a ser testigo de cargo por parte de la Fiscalía.

Esta definición no limita las nociones de víctima de delito que se encuentran en los diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las leyes colombianas, las cuales también son aplicables al momento de la evaluación técnica de amenaza y riesgo, siempre que vayan a fungir como testigos en el curso del proceso penal.

b) **Víctima en procesos de justicia transicional:** Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos, tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. Lo anterior obedece a que lo establecido aquí no excluye como víctimas a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal, cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

c) **Testigo presencial.** Persona que percibió con sus sentidos la comisión de una conducta punible o parte de ella y de su testimonio se pueda identificar o individualizar a los responsables.

d) **Testigo con información útil.** Testigo de cargo que no es presencial dentro de proceso penal pero aporta información útil para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

e) **Testigo colaborador.** Autor o partícipe de la conducta punible que asume la calidad de testigo de cargo dentro del proceso penal al aportar información útil para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los demás responsables. El testigo colaborador también será aquel a quien se le tramite un principio de oportunidad en procesos regidos por la Ley 906 de 2004 o esté en el trámite de beneficios por colaboración eficaz regulado por la Ley 600 de 2000.

Se tendrá como testigo colaborador a la persona que se encuentre en cualquier otro instituto jurídico creado por el legislador con la finalidad del presente literal. En otras palabras, colaborar con la administración de justicia.

Este testigo será vinculado al Programa de Protección y Asistencia, siempre y cuando el fiscal de conocimiento pretenda utilizarlo como testigo de cargo, y la evaluación técnica de amenaza y riesgo así lo recomiende.

f) **Perito.** Persona que aporta al proceso un dictamen con información científica, técnica, artística o especializada, y de cuya intervención se puede lograr la identificación de los responsables o esclarecimiento de los hechos.

Esta noción no limita las definiciones que establezca el legislador o la jurisprudencia de las altas Cortes en relación con la noción o concepto de perito.

g) **Interviniente.** Se consideran intervinientes todos aquellos que actúan objetiva y activamente en el curso del proceso penal, en etapas incluso preprocesales.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Protección y Asistencia no es competente para proteger a todas las personas o partes procesales que intervienen fácticamente en el proceso penal. Para ello existe una norma expresa que delimita cuáles intervinientes pueden ser beneficiarios del Programa de Protección y Asistencia.

h) **Informante:** Persona que, aún sin poseer pruebas, aporta aspectos que pueden llegar a ser útiles dentro de un proceso penal en curso o para iniciar una investigación. En general, el informante será protegido por la entidad que se beneficie con la información aportada.

El informante no será protegido por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, salvo que se convierta en testigo dentro del proceso penal en el que intervenga. En caso tal, deberá cumplir con los requisitos y obligaciones que dispone este cuerpo normativo. Además, su vinculación no se hará bajo la calidad de informante, sino de testigo o víctima, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

i) **Servidor de la Fiscalía General de la Nación:** Persona de la Fiscalía General de la Nación vinculada en carrera, provisionalidad o a través de contrato de prestación de servicios. Y quien con ocasión, y en ejercicio de sus funciones, dentro de una investigación o proceso penal, se encuentre en una situación de riesgo que ponga en peligro su vida e integridad personal.

Parágrafo 1°. El presente artículo se refiere a la calidad procesal bajo el entendido de que se necesita la existencia de un proceso penal, o al menos, una investigación previa o indagación preliminar.

Parágrafo 2°. La sola calidad procesal no implica el deber de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de vincularlos como beneficiarios, sino que además de ello deben cumplir con los requisitos que exige este cuerpo normativo. En todo caso, la incorporación al Programa de Protección y Asistencia se extenderá hasta que se acredite una causal de desvinculación o exclusión.

Parágrafo 3°. En todas las actuaciones de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, relativos a la evaluación técnica de amenaza y riesgo, medidas de protección y



programas de asistencia, se tendrá en cuenta el Factor Diferencial y de Género. Por tanto, se clasificará la población cuando se trate de menores de edad sin representante legal, personas afrocolombianas, raizales, palenqueros, indígenas, población LGTBI, personas discapacitadas, habitantes del campo, población Rrom, Madres o Padres cabeza de hogar y adultos mayores.

Artículo 31. *Testigo reubicado con éxito del programa de protección y asistencia y que sea requerido como testigo en un nuevo proceso penal.* En caso que el testigo que hubiese sido beneficiario del Programa de Protección y Asistencia, y que después de desvinculado sea requerido nuevamente por una autoridad fiscal o judicial, para que obre como testigo dentro de otro proceso, además de lo regulado en este cuerpo normativo; deberá tenerse en cuenta las siguientes reglas especiales para su nueva incorporación:

- a) La desvinculación del Programa de Protección y Asistencia debe obedecer a las causales
  - b) y c) reguladas en el artículo 128.
  - b) La solicitud de vinculación no puede referirse a los mismos hechos e indagación penal por el que fue protegido y reubicado con éxito.
  - c) Antes de ser contactado el ciudadano deberá obtenerse la aprobación del Director Nacional de Protección y Asistencia, para que se utilice al individuo como testigo.
  - d) Se analizará el significado y alcance de la actividad criminal investigada y de los indiciados.
  - e) Se deberá informar si el testigo reubicado está viviendo en la zona dispuesta por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.
  - f) Se deberá informar si el individuo ha estado involucrado en actividades delictuales después de ser desvinculado del Programa de Protección y Asistencia. En caso negativo, se brindará información sobre cómo está enterado el testigo de esta nueva actividad criminal.
  - g) Si otras autoridades han utilizado al individuo como testigo o informante después de su desvinculación del Programa de Protección y Asistencia.
  - h) Si se han tenido en cuenta alternativas para no utilizarlo como testigo.
  - i) Informar por qué el individuo sería efectivo en su papel de testigo.
  - j) Lapso requerido por la autoridad para la actividad como testigo del individuo.
- Estos aspectos deberán ser informados por la autoridad que requiera a la persona como testigo y serán verificados por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Además de lo anterior, la persona candidata a protección deberá reunir los requisitos que contempla este cuerpo normativo para su incorporación.

Artículo 32. *Momentos procesales para la protección.* Los siguientes son momentos relevantes del proceso, que deben considerarse cuando se evalúe la incorporación de un candidato a protección por parte de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

a) **Procesos de Ley 906 de 2004:** La protección bajo cualquier modalidad se dará siempre y cuando haya una indagación preliminar, y esté próxima la etapa de investigación y juicio hasta el momento en que se haya rendido el testimonio en la audiencia de juicio oral o cumplido la finalidad de la protección.

En caso de que se haya negado el decreto de la prueba testimonial del beneficiario en la Audiencia Preparatoria, ejecutoriada dicha decisión se procederá con la desvinculación del programa de conformidad con la normatividad pertinente en esta resolución.

b) **Procesos de Ley 600 de 2000:** La protección bajo cualquier modalidad se dará siempre que haya, al menos, una investigación previa, de manera que con el testimonio del beneficiario se proceda a darle apertura a una instrucción formal y a emitir órdenes de captura.

El fiscal de conocimiento deberá impulsar prevalentemente la instrucción donde se encuentra el beneficiario como testigo, así como realizar las actividades necesarias para que en etapa de juzgamiento no haya dilación injustificada del proceso. La protección finalizará al concluirse la audiencia pública, o antes, si se ha cumplido con la finalidad de la protección y se prevé que el beneficiario no va a ser requerido nuevamente en dicho procedimiento.

Artículo 33. *Control del caso.* El Director Nacional de Protección y Asistencia delegará a un servidor para que realice una inspección trimestral a la investigación o proceso penal donde intervenga el beneficiario y verifique si se ha cumplido alguna causal de desvinculación o exclusión del programa.

La inspección también podrá ser ordenada en cualquier momento por el Director Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo 1°. De acuerdo con los resultados de la inspección, el Director Nacional de Protección y Asistencia puede exhortar al fiscal de conocimiento para que impulse y otorgue prioridad a las diligencias en las que interviene el beneficiario. Concomitantemente, oficiará a la Dirección Nacional correspondiente informando el estado del proceso.

Parágrafo 2°. El funcionario que realice la inspección debe acreditar sus conocimientos en derecho penal y procedimiento penal con el propósito de que se garantice la finalidad de la inspección.

Artículo 34. *Testigo privado de la libertad.* Testigo que, independientemente de su condición de víctima, testigo presencial o de referencia, perito o cualquier otra característica, se encuentra privado de la libertad por orden judicial. En los mismos términos se entenderá aquella persona que está en libertad condicional y aún cumple con una sanción penal.

Esta clase de testigos no serán beneficiarios del programa, ya que su custodia y protección está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), o podrán ser requeridos en cualquier momento por la autoridad judicial competente.

Parágrafo 1°. El beneficiario o individuo vinculado al Programa de Protección y Asistencia que durante su incorporación sea cobijado con una orden de captura en su contra se pondrá a disposición de la autoridad competente para que esta se haga efectiva y su custodia se trasladará al Inpec. De esta circunstancia, se advertirá al candidato a protección cuando se celebre el respectivo acuerdo.

Parágrafo 2°. La solicitud de protección o de incorporación de cualquier persona privada de la libertad se entenderá realizada en favor de la familia por extensión. Esta podrá ser vinculada en caso de que las verificaciones, evaluaciones técnicas de amenaza y riesgo, y demás elementos de valoración así lo determinen. En estos casos, se determinará a uno de los familiares vinculados por extensión como titular del caso.

Artículo 35. *Testigos en casos de violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario.* Se dará especial protección a la seguridad de los beneficiarios que sean testigos o víctimas en procesos penales donde se investiguen violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cuando la evaluación técnica de amenaza y riesgo así lo aconseje.

Artículo 36. *Testigo niño, niña o adolescente.* Cuando el beneficiario sea un niño, niña o adolescente, se ejecutarán medidas de protección y asistencia atendiendo las políticas señaladas por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en procura de su protección integral y de lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia, así como la jurisprudencia constitucional relacionada.

Todas las decisiones tendrán en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente y la prevalencia de sus derechos.

## CAPÍTULO V

### Medidas de protección y programas de asistencia integral

Artículo 37. *Programas de asistencia integral.* Son las medidas de atención a los diferentes conflictos o necesidades personales o familiares que sobrelleven los beneficiarios durante su incorporación al programa y aquellas dirigidas a facilitar la reincorporación a la vida social cuando se acredite una causal de desvinculación.

Todos los programas de Asistencia Integral serán realizados si el Director Nacional de Protección y Asistencia los considera procedentes.

Artículo 38. *Clasificación de los programas de asistencia integral.* Los programas de Asistencia Integral se clasifican en los siguientes:

- a) **Económicos:** Aquellas medidas en las cuales el programa le entrega una suma de dinero determinada al beneficiario con un fin específico. Estos se reflejan al momento de generar proyectos productivos para la reinserción del beneficiario y su familia a la vida social.
- b) **No económicos:** Corresponden a aquellas medidas de asistencia que no proporcionan ningún recurso económico directo al beneficiario, pero le generan bienestar. Entre estos están los desplazamientos del protegido dentro de los esquemas de seguridad del programa, el apoyo psicológico, de rehabilitación, médico, educativo, alojamiento, manutención y vestuario.

Artículo 39. *Beneficiario autosostenible.* En caso de que la persona vinculada o el estudio socioeconómico señale que el beneficiario puede sostenerse a sí mismo y a su familia, no recibirá ayuda económica para su arriendo, manutención, vestuario, educación o atención médica y psicológica durante su incorporación al Programa, en la zona que sea reubicado temporalmente.

En este tipo de casos, el Programa solamente brindará las medidas de protección referidas al desplazamiento, esquemas de seguridad y demás medidas contempladas en este cuerpo normativo, si se considerare procedentes.

La Dirección Nacional de Protección y Asistencia hará todo lo necesario para garantizar mediante títulos valores o cualquier otro mecanismo jurídico válido, que el beneficiario autosostenible pague efectivamente todas sus obligaciones derivadas del arriendo, manutención, vestuario, educación y atención médica durante su incorporación.

El Programa podrá hacer uso de retención de dinero dirigido al beneficiario para su reubicación definitiva, con el fin de garantizar el pago total de las obligaciones que se encuentren sin saldar al término de su incorporación.

Parágrafo. A pesar de que el beneficiario sea autosostenible, deberá cumplir con las reglas y condiciones fijadas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, de acuerdo con las medidas de protección implementadas.

Artículo 40. *Medidas de protección.* Actuaciones ejecutadas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia encaminadas a proteger la vida, tranquilidad e integridad personal de las personas beneficiarias.

Artículo 41. *Clasificación de las medidas de protección.* Las medidas de protección se clasifican:

- a) **Según su duración:** Existen medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar de forma adecuada y necesaria la preservación de la integridad física y moral del beneficiario y la de su núcleo familiar.
- b) **Según su naturaleza:** Las medidas pueden ser de protección física, esquemas de seguridad, cambio de identidad, cambio de domicilio o traslado temporal al exterior.

Parágrafo. Todas las medidas están sujetas a la valoración de procedencia del Director Nacional de Protección y Asistencia, quien velará por el uso adecuado de los recursos y será guiado por los principios que rigen este cuerpo normativo.

La permanencia en las medidas no significa la incorporación indefinida al Programa de Protección y Asistencia, sino a su teleología. Tales como las medidas de autoprotección, las referidas a su comportamiento que impidan el surgimiento de nuevos riesgos, deberes que deben respetar todos los protegidos durante y después de su vinculación al Programa.

Artículo 42. *Protección física.* Consiste en la incorporación integral al programa de un ciudadano donde se ubicará al beneficiario en un lugar alejado a la zona de riesgo, a cargo de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia. Por consiguiente quedará sometido a todas las medidas protectivas encaminadas para proteger la vida e integridad personal del mismo y de sus familiares, de acuerdo con las pautas de la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo.

El lugar de ubicación será definido por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia y asumirá la protección integral del beneficiario hasta que se cumpla con cualquier causal de desvinculación o exclusión.

Parágrafo. Excepcionalmente, el Director Nacional de Protección y Asistencia podrá establecer otros modelos de protección física, como la implementación de esquemas de seguridad. Todo ello, teniendo en cuenta la calidad del protegido, la naturaleza y relevancia del proceso penal donde interviene y las demás circunstancias específicas del caso.

Estas medidas estarán sometidas a la autonomía de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, y condicionadas a la disponibilidad presupuestal.

Artículo 43. *Cambio de identidad.* De acuerdo con la normatividad vigente, el cambio de identidad se entiende como la expedición de documentos públicos y privados en reemplazo de los que ya posee el beneficiario. Además, cuando sea necesario, puede ordenarse la modificación de los rasgos físicos de la persona que pudieran permitir su identificación.

Para el cambio de identidad se requerirá la manifestación de voluntad libre y espontánea, de forma expresa por la persona beneficiaria de la medida.

Los documentos que se expidan para proteger a una persona vinculada al programa tendrán pleno valor probatorio.

La persona amparada por el cambio de su identidad civil solo podrá hacer valer en adelante su nueva identidad.

Parágrafo 1°. Para la implementación de esta medida se tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestal, autorización expresa del Fiscal General de la Nación, y dependerá de la aprobación que para el efecto disponga la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Parágrafo 2°. Esta medida será excepcional o *ultima ratio* después de valorar los hechos. A su turno, resultará necesaria para el Director Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo 3°. Ningún protegido será beneficiario de esta medida si no resulta adecuada, necesaria, eficaz y proporcional en sentido estricto, debido a las consecuencias que el cambio de identidad genera.

Parágrafo 4°. En ningún momento esta medida permitirá que el protegido evada sus responsabilidades penales o civiles derivadas de su identidad anterior, razón por la que se tomarán todas las precauciones del caso para evitar perjuicios terceros exentos de culpa.

Artículo 44. *Cambio de domicilio.* El cambio de domicilio se entiende como el cambio de vivienda permanente y fija de una persona en otro lugar del país, alejado de la zona de riesgo.,

Además de los lugares de habitación, se entiende como el cambio de todos aquellos espacios cerrados, donde las personas vivencian su cotidianidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad.

El cambio de domicilio es temporal cuando el beneficiario se encuentra vinculado al Programa de Protección y Asistencia, mientras que es definitivo cuando se acredita una causal de desvinculación y se considera procedente la entrega de ayudas para un proyecto productivo.

Parágrafo 1°. Para la definición de zonas de riesgo, la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo deberá informar de forma concreta los lugares que generan un peligro para el beneficiario y las razones de su concepto, de conformidad con lo regulado en este cuerpo normativo.

Parágrafo 2°. Excepcionalmente, se podrá ordenar una reubicación definitiva al exterior, siempre que el caso concreto lo requiera. Es decir, se torne como una medida adecuada, necesaria, eficaz y proporcional en sentido estricto. Esta medida estará condicionada a la autonomía de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, así como a la disponibilidad presupuestal.

En estos casos, se requiere que el beneficiario acredite la autorización de ingreso al país del destino, dado que el Programa de Protección y Asistencia no tramita visas, permisos especiales, ni algún otro mecanismo de ingreso a otro país.

Artículo 45. *Traslado al exterior.* Se entiende como el cambio de domicilio en otro país alejado de la zona de riesgo y de manera temporal, sin que haya reubicación definitiva y donde sigue vinculado al Programa de Protección y Asistencia, donde a su vez el protegido asume sus gastos de manutención, vivienda, transporte, etc., en su nuevo lugar de domicilio.

En este tipo de eventos, de considerarse procedente por el Director Nacional de Protección y Asistencia, solamente ordenará una ayuda consistente en los tiquetes aéreos de ida y regreso. Aun así, el beneficiario estará sometido al control y a las obligaciones que genera la medida de cambio de domicilio.

Parágrafo 1°. La persona que solicite esta medida de protección deberá acreditar la existencia real de su nuevo domicilio en el exterior, los mecanismos para contactarlo, los medios económicos para sustentarse en su nuevo domicilio y la posibilidad de viajar junto con su familia al país de destino.

Parágrafo 2°. La Dirección Nacional de Protección y Asistencia no tramita visas, pasaportes u otro mecanismo similar, circunstancias que deben estar debidamente cumplidas antes de realizar un estudio sobre esta medida.

Parágrafo 3°. Ningún protegido será beneficiario de esta medida si no se torna adecuada, necesaria, eficaz y proporcional en sentido estricto, debido a las consecuencias que genera el cambio de domicilio con los procesos judiciales en curso en los que intervenga el beneficiario.

Artículo 46. *Asilo político o refugio.* La Dirección Nacional de Protección y Asistencia no tramita asilos políticos o refugio para ningún protegido o servidor de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 47. *Obtención de residencia en el exterior.* La Dirección Nacional de Protección y Asistencia no tramita la obtención de residencia en el exterior, solamente, y sólo cuando la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo lo aconseje, se harán traslados temporales del beneficiario al exterior.

Esta medida estará supeditada a la existencia de convenios con programas de protección extranjeros y a la autonomía de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo. Para los efectos se aplicarán analógicamente las limitaciones o condiciones del traslado al exterior o al cambio de domicilio, como mecanismo de integración normativa, solo en aquellos aspectos que sean coherentes con la medida.

## CAPÍTULO VI

### Protección

Artículo 48. *Clasificación de la protección.* La protección que ofrece el programa se puede clasificar en incorporación al programa, protección inmediata y protección condicionada.

Artículo 49. *Incorporación al programa de protección y asistencia.* Es la incorporación ordinaria con el trámite señalado en este cuerpo normativo.

Artículo 50. *Protección inmediata.* Excepcionalmente, por solicitud del Fiscal de Conocimiento a cargo del proceso penal, el Director Nacional de Protección y Asistencia dispondrá de medidas inmediatas de protección a la persona postulada.

En el caso de víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, se presume el riesgo de sufrir nuevas agresiones que afecten su seguridad personal y su integridad física al momento de decidir la protección inmediata.

Artículo 51. *Protección condicionada.* Es la protección física que otorga la Dirección Nacional de Protección y Asistencia al candidato a protección durante un término máximo de tres meses sin que exista incorporación al Programa, de acuerdo con lo normado en este articulado.

## CAPÍTULO VII

### Análisis y calificación del riesgo

Artículo 52. *Análisis del riesgo.* Las siguientes condiciones deben estar acreditadas al momento de decidir la incorporación de una persona determinada como beneficiaria del Programa de Protección y Asistencia:

a) **Conexidad:** El principio de conexidad exige la presencia de una relación material entre las causas de riesgo, amenazas o peligro y las declaraciones rendidas por el beneficiario dentro de la investigación o proceso penal.

Asimismo, dicha conexidad debe perdurar durante el desarrollo del proceso penal, en la medida en que sus intervenciones sigan teniendo un nexo causal con el riesgo en su contra.

b) **Motivación:** Que el motivo del daño o agresión sobreviniente de los potenciales victimarios hacia el candidato a protección esté dirigido a lograr que esa persona calle total o parcialmente la verdad en sus participaciones procesales, falte a la verdad o no comparezca ante las autoridades investigativas o judiciales, todo con la finalidad de impedir el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación o juzgamiento en el proceso penal.

Por otro lado, es necesario que el candidato a protección no esté motivado por un interés diferente al de colaborar oportuna, veraz y espontáneamente con la Administración de Justicia.

c) **Correspondencia:** Se verificará que las medidas de protección y asistencia que requiere el candidato a protección sean aquellas que pueda ofrecerle el programa de protección. Debe existir total claridad para el candidato a protección sobre qué medidas podría otorgarle el Programa de Protección y Asistencia.

d) **Subsidiariedad:** Antes de implementar o recomendar cualquier medida, se verificará que dicha protección pueda ofrecerla —o sea de competencia— de otro programa de protección. En caso afirmativo, se remitirá toda la información y documentación a la entidad correspondiente.

Igualmente, se buscará dirigir a las personas hacia el programa de protección competente para protegerlas. Así, se vincula exclusivamente a las personas que cumplen con este marco normativo, cuya protección no corresponde a otro programa.

e) **Última ratio:** La incorporación al programa debe ser entendida como la última opción. En otras palabras, la mínima intervención del Programa de Protección y Asistencia en el curso de las investigaciones o procesos penales.

La protección ofrecida por el programa, así como sus medidas de asistencia, son excepcionales y temporales.

f) **Zona de riesgo:** Se determinará si existe una zona, región, o área debidamente delimitada, en la que el candidato a protección se encuentre en mayor peligro o vulnerabilidad para sus derechos a la vida e integridad personal.

Una vez determinada esa zona, región o área, se tomarán las medidas correspondientes, en consideración de su necesidad y eficacia.

g) **Importancia del testimonio:** Se tendrá en cuenta la pertinencia, conducencia e idoneidad del testimonio del candidato a protección, de acuerdo con el concepto emitido por el fiscal de conocimiento para determinar la importancia de su comparecencia ante las autoridades judiciales, dentro del proceso penal y la necesidad de su protección por el Programa.

Igualmente, se verificará si con su testimonio o declaración se decretarán, o se han decretado, medidas procesales de fondo que reflejen o demuestren su trascendencia en la indagación proceso.

Artículo 53. *Concepto del fiscal de conocimiento.* El concepto debe reunir la siguiente información:

a) Indicar el estado del proceso penal y las particularidades de este al describir en forma completa la naturaleza y gravedad del caso.

b) Explicar la importancia y necesidad del testigo y su testimonio en relación con el peligro que implica su práctica para su vida.

c) Exponer las razones que permiten pensar que el candidato a protección y su testimonio son confiables, significativos y que con seguridad van a proporcionar su relato en la audiencia de juicio oral o audiencia pública, según la ley procesal aplicable.



d) Señalar los motivos que justificarían la posibilidad de incluir o no al candidato a protección al Programa de Protección y Asistencia.

e) En el concepto se incluirá un resumen del testimonio que la persona postulada va a brindar y otra información que demuestre la cooperación que ofrece el testigo.

f) Indicar si existen alternativas diferentes para obtener la información obtenida con el testimonio de otras fuentes de prueba.

g) En caso de que el candidato a protección participe en varios casos, resulta necesario enlistar los procesos en los que se espera que el testigo rinda su testimonio.

h) Hacer un cálculo realista de la fecha del juicio y la terminación del proceso, o procesos penales, en los cuales se espera que el candidato a protección intervenga con su testimonio.

i) Informar si existen otros individuos que ya estén vinculados al Programa de Protección y Asistencia, con relación al mismo caso. En caso afirmativo, indicar los nombres e identificaciones de aquellos.

j) El concepto puede aportar datos, información, documentos o elementos que considere relevantes para decidir la incorporación o no al programa de la persona postulada.

k) Informar si la persona candidata a protección hace parte de algún grupo incluido en el factor diferencial y de género.

l) Señalar si con su testimonio (el de la persona candidata a protección) pueden ponerse en riesgo otras personas que pertenezcan al grupo de factor diferencial y de género.

Parágrafo. En caso de que la Dirección Nacional de Protección y Asistencia requiera la complementación del concepto podrá requerir al fiscal de conocimiento, quien deberá aportar la información solicitada al día siguiente hábil en que fue recibida la comunicación.

Artículo 54. *Niveles de riesgo y amenaza.* Estará supeditado a los factores analizados en la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo que determinarán el grado de peligro en que se encuentra el candidato a protección, la capacidad de agresión de los probables victimarios y el área de influencia del potencial agresor:

a) **Nivel mínimo.** Categoría hipotética que reúne los riesgos a los que se enfrenta una persona en su existencia por factores individuales y biológicos, tales como la muerte y la enfermedad.

b) **Nivel ordinario.** En el cual se encuadra el riesgo soportado por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad (dado el hecho de su convivencia en sociedad), y que debe ser cubierto por el Estado a través del cumplimiento eficaz de todas sus funciones.

c) **Nivel extraordinario.** Hace referencia a riesgos que las personas no están jurídicamente obligadas a soportar y que tienen tal intensidad que exige del Estado la adopción de medidas especiales de protección.

d) **Nivel de riesgo extremo.** Comparte todas las características de un riesgo extraordinario, pero tiene una intensidad mucho mayor. Este riesgo es grave e inminente, y afecta directamente la vida y la integridad de la persona.

Parágrafo. *Daño consumado.* En esta categoría se ubican las situaciones en las que ya se han concretado y materializado las violaciones a los derechos a la vida y a la integridad, por hechos como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o el fallecimiento del candidato a protección, o familiares del candidato a protección, entre otros.

Artículo 55. *Diferencia entre riesgo y amenaza.* No debe hablarse únicamente de escala de riesgos, sino de escala de riesgos y amenazas. Los dos primeros niveles de la escala se refieren al concepto de riesgo, toda vez que en estos niveles existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca.

En contraste, los dos últimos niveles de la escala ya no tienen un único riesgo, sino que presentan una amenaza en la que existen hechos reales que, por su mera existencia, implican la alteración del uso pacífico del derecho atacado y hacen suponer que la integridad de la persona corre peligro. Estas circunstancias deben acreditarse en la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo.

Artículo 56. *Amenaza.* En caso de que se informe la existencia de una o varias amenazas para atentar contra la vida del candidato a protección, o sus allegados, la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo debe indagar si esta reúne las siguientes características sustanciales:

a) **Conexidad:** Que la amenaza sea en razón del conocimiento, directo o indirecto, que posea el candidato a protección de las circunstancias de tiempo, modo, lugar o responsables de la conducta punible investigada o juzgada dentro de un proceso penal.

b) **Realidad:** Que la amenaza haya sido comunicada al destinatario por cualquier medio que se pueda constatar objetivamente.

c) **Actualidad:** Que la amenaza sea reciente y seria, de modo que sea posible inferir su cumplimiento en tiempo breve. El lapso entre la(s) amenaza(s) y la solicitud de incorporación al programa debe ser razonablemente corto.

El paso del tiempo será un indicador para determinar si la amenaza tiene la entidad o la vocación de convertirse en hechos materiales atentatorios contra la vida e integridad de quien se postula, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.

d) **Individualidad:** Que la amenaza haya sido dirigida contra un sujeto determinado —el candidato a protección—, de manera que se pueda establecer sin lugar a equívocos que esas manifestaciones tienen la finalidad de intimidarlo a él y no son simplemente amenazas indeterminadas o dirigidas a la población en general.

Las amenazas indeterminadas deben ser asumidas por toda la población y no constituyen causa para la incorporación de una persona al programa.

e) **Especificidad:** Deben establecerse las circunstancias específicas de riesgo que generan esa amenaza y acreditarse las situaciones concretas de vulnerabilidad en relación con el resto de la población, o los demás testigos o intervinientes dentro del proceso penal.

f) **Escenario de la amenaza:** Son las características fácticas que aumentan la probabilidad del cumplimiento de la amenaza.

g) **Inminencia:** Que el peligro objetivo y concreto que implica la amenaza sea altamente probable y no solamente esté entre el margen abstracto de la posibilidad.

Artículo 57. *Riesgo.* Es la probabilidad objetiva y demostrable de materialización de un daño o agresión sobre una persona determinada, como consecuencia de su participación dentro de una investigación o proceso penal en los términos de este cuerpo normativo. Este riesgo se entiende limitado a un tiempo y espacio determinados.

El riesgo será extraordinario si cumple con las siguientes características:

a) **Probabilidad:** Constituye un importante parámetro para determinar que diversas casualidades o factores, que rodean el riesgo tras una serie de eventos esperados, aumentan porcentualmente la posibilidad de una agresión o daño concreto sobre la persona postulada.

Sin embargo, el riesgo no será probable cuando la materialización del daño o agresión sobre la persona determinada sea relativa o esté sometida al albur.

b) **Especificidad:** Que se trate de un daño o agresión determinado o determinable objetivamente en contra de la persona postulada, con base en las circunstancias concretas que rodean cada situación y en las características propias del proceso o investigación penal en curso.

c) **Concreción:** Que el riesgo se derive de hechos o acciones concretas y manifiestas que permitan deducir la futura agresión o causación de un daño. Por tanto, no serán admisibles las suposiciones o presunciones abstractas de agresión.

d) **Actualidad:** Que el riesgo esté presente al momento de la solicitud de incorporación al programa no significará que los riesgos remotos o eventuales sean admisibles.

e) **Importancia:** Que el riesgo apremie de forma sustancial los derechos de la vida e integridad personal de la(s) persona(s) postulada(s).

f) **Seriedad:** Que existan motivos concordantes, consonantes, unívocos y plausibles de que la realización del daño o agresión va a ocasionarse.

g) **Claridad:** Que se trate de un riesgo sobre un daño o agresión discernible y fácilmente identificable.

h) **Excepcionalidad:** Que se trate de un riesgo o una carga que la persona postulada no tenga el deber de soportar en el transcurso normal o habitual de una investigación o proceso penal. En consecuencia, no serán admisibles los riesgos o cargas que debe soportar la generalidad de la población por el hecho de vivir en sociedad.

i) **Proporcionalidad:** Que las condiciones personales, económicas, sociales o laborales de la persona postulada la ponen en una situación de vulnerabilidad con los eventuales responsables de la agresión o el daño.

El riesgo será extremo cuando además de ser extraordinario es grave e inminente.

j) **Gravedad:** Que las condiciones en las que se encuentra el candidato a protección y la complejidad de la investigación o proceso penal comprometan una situación delicada y mortal para el candidato a protección.

k) **Inminencia:** Que el riesgo de sufrir un daño o agresión sea próximo, apremiante y requiera de actuaciones urgentes y excepcionales para conservar la vida e integridad de la persona postulada.

Artículo 58. *Sistematicidad.* Deberán tenerse en cuenta, de forma individual y conjunta, todas las circunstancias debidamente acreditadas y descritas en los artículos anteriores, a fin de llegar a la conclusión de si se vincula o no a una persona como titular y a sus familiares por extensión al Programa de Protección y Asistencia.

Artículo 59. *Nivel de seguridad.* Los niveles de seguridad se clasifican en máxima, mediana y mínima:

a) **Máxima:** Cuando el protegido deba estar bajo la custodia, resguardo o guarda permanente del Programa de Protección y Asistencia, así como someterse a las distintas medidas de protección en las sedes destinadas por la dependencia.

b) **Mediana:** Cuando el protegido deba estar bajo un control periódico del programa sin que se afecten intensamente los derechos de locomoción de este en un sitio determinado. No obstante, deberá establecer su domicilio en una sede definida por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

c) **Mínima:** Cuando el protegido deba informar periódicamente al Programa sobre su estado y ubicación sin que deba vivir en una sede destinada por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 60. *Evaluación técnica de amenaza y riesgo.* Está compuesta de todas las labores necesarias de policía judicial encaminadas a obtener información y documentación que permitan establecer si las condiciones descritas en los artículos anteriores se encuentran acreditadas o no, todo lo cual reposará en un informe de policía judicial.

Estas labores investigativas indagarán sobre los siguientes aspectos —sin que esta relación sea taxativa—:

a) Los antecedentes penales del candidato a protección y de cada uno de sus familiares, así como de investigaciones o procesos penales que se sigan en su contra.

b) Se identificará e individualizará plenamente al candidato a protección y a sus familiares, por lo cual se acreditará su parentesco de conformidad con la ley.

c) Se investigará si, al momento de la evaluación, el candidato a protección o sus familiares se encuentran en prisión domiciliaria, libertad condicional, libertad provisional o cobijados bajo la suspensión condicional de la ejecución de una pena de prisión.

d) Se profundizará sobre la indagación, investigación o proceso penal donde interviene el candidato a proteger, de conformidad con este cuerpo normativo y se verificará que se cumpla con todos los requisitos de la amenaza y el riesgo.

e) Se indagará si el candidato a proteger en anteriores oportunidades ha solicitado su incorporación y las razones de su negativa. Asimismo, debe comprobarse si ha estado vinculado al Programa de Protección y Asistencia y las razones por las cuales fue retirado del mismo.

f) Se establecerá si el candidato a proteger se encuentra dentro de los grupos que se mencionan en el factor diferencial y de género.

g) Establecer con claridad todos los aspectos regulados en este cuerpo normativo.

En todos los casos, el Director Nacional de Protección y Asistencia debe designar directamente al funcionario de policía judicial y por escrito. Ello con el fin de mantener un control sobre quien hace las correspondientes verificaciones.

Parágrafo. El concepto rendido por el funcionario de policía judicial constituirá un elemento de valoración que servirá de criterio orientador, sin que el concepto del evaluador obligue o condicione la decisión de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 61. *Gravedad de juramento*. El informe de policía judicial de evaluación técnica de amenaza y riesgo, presentado por el servidor designado, se entenderá rendido bajo la gravedad de juramento.

Artículo 62. *Requisito de validez*. Para que el informe de policía judicial de evaluación técnica de amenaza y riesgo sea válido deberá tener el visto bueno del responsable de la unidad que supervisa al funcionario, quien verificará que dicho documento contenga un análisis completo, de conformidad con lo ordenado en este cuerpo normativo.

Una vez suscrito el informe de policía judicial de evaluación técnica de amenaza y riesgo por el servidor y el responsable de la unidad, deberá entregarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la unidad jurídica encargada de proyectar la decisión.

Parágrafo. En caso de que la unidad jurídica considere que la evaluación técnica de amenaza y riesgo se encuentre incompleta o no cumpla con los requisitos del presente cuerpo normativo, procederá a proyectar el requerimiento a quienes suscriben el informe de policía judicial, para la firma del Director Nacional de Protección y Asistencia. Lo anterior con el propósito de complementar, adicionar y aclarar la evaluación técnica y especificar lo omitido.

La respuesta a este requerimiento se cumplirá dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción por parte del responsable de la unidad correspondiente.

Artículo 63. *Análisis socioeconómico*. Constituye el estudio que debe obtener, de forma ordenada, el conocimiento sobre las características económicas, habilidades intelectuales, laborales, físicas, y las condiciones sociales del beneficiario en su domicilio, así como la de los familiares con quienes conviva, como requisito para prever los conflictos que generará la ejecución de medidas de protección. De ese modo, podrá recomendar programas de Asistencia Integral que minimicen los impactos traumáticos ocasionados, en procura del bienestar del (los) beneficiario(s).

Artículo 64. *Factores del análisis socioeconómico*. Al momento de decidir si una persona determinada será beneficiaria de un programa de asistencia que requiera una evaluación socioeconómica, donde las siguientes condiciones deberán estar acreditadas:

- a) Área de influencia directa de la actividad económica del beneficiario o candidato a protección.
- b) Principal(es) actividad(es) económica(s) del beneficiario o candidato a protección.
- c) Rasgos socioculturales más sobresalientes del beneficiario o candidato a protección, junto con su familia.
- d) Infraestructura física existente en la actividad económica del beneficiario o candidato a protección.
- e) Si la persona pertenece a algún grupo para establecer recomendaciones relacionadas con el Factor Diferencial y de Género.
- f) Capacidad presupuestal del beneficiario o candidato a protección.
- g) Conflictos básicos que genera la medida de protección dentro del núcleo familiar del beneficiario o candidato a protección.
- h) Programas de Asistencia Integral a recomendar.

Artículo 65. *Entrevista socioeconómica*. En la entrevista socioeconómica como mínimo se deberá indagar sobre los siguientes hechos:

- a) Composición familiar del entrevistado: nombres completos del entrevistado y de quienes conviven con él, parentesco, edad y sexo.
- b) Escolaridad del entrevistado y de su núcleo familiar.
- c) Ocupación del entrevistado. Asimismo la información laboral de quienes conviven con él.
- d) Grupo al que pertenece, en caso de aplicación del Factor Diferencial y de Género.
- e) Ingresos mensuales del entrevistado y de quienes conviven con él.
- f) Descripción total de la vivienda.
- g) Descripción del patrimonio; esto es, propiedades, posesiones, créditos y obligaciones civiles y comerciales.
- h) Régimen de salud.
- i) Si el candidato es beneficiario de algún subsidio o programa de vivienda.

Parágrafo. Para que la entrevista sea válida, debe estar suscrita por el funcionario que la realiza y por el entrevistado.

Artículo 66. *Evaluación socioeconómica*. Está constituida por todas las labores necesarias de policía judicial encaminadas a obtener información y documentación que permitan realizar el análisis socioeconómico del beneficiario, todo lo cual reposará en un informe de policía judicial.

En todos los casos, el Director Nacional de Protección y Asistencia debe designar directamente y por escrito al funcionario de policía judicial, con el fin de mantener un control sobre quien hace las verificaciones.

Artículo 67. *Gravedad de juramento*. El informe de policía judicial de evaluación socioeconómica, presentado por el servidor designado, se entenderá rendido bajo la gravedad de juramento.

Artículo 68. *Requisito de validez*. Para que el informe de policía judicial de evaluación socioeconómica sea válido deberá tener el visto bueno del responsable de la unidad de reubicaciones de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, quien verificará que dicho documento contenga un análisis completo, de conformidad con lo explicado en este cuerpo normativo.

Una vez suscrito el informe de policía judicial de evaluación socioeconómica por el servidor y el responsable de la unidad, deberá entregarse al funcionario encargado de proyectar la decisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

Artículo 69. *Evaluación periódica*. El Director Nacional de Protección y Asistencia designará un funcionario con conocimiento en derecho penal y procesal penal, para que realice un control periódico de la situación procesal del testigo beneficiario de cualquier medida de protección a fin de determinar cuándo se acredita una causal de desvinculación o exclusión.

## CAPÍTULO VIII

### Beneficiarios del programa de protección y asistencia

Artículo 70. *Beneficiarios*. La Dirección Nacional de Protección y Asistencia tendrá como beneficiarios de sus programas de protección a los siguientes:

- a) Las víctimas de delitos que, a su vez, la Fiscalía pretenda tener como testigos en procesos penales tramitados bajo las normas procesales de la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004.
- b) Los testigos que la Fiscalía pretenda usar en procesos penales tramitados bajo las normas procesales de la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004.
- c) Los peritos que la Fiscalía pretenda usar en procesos penales tramitados bajo las normas procesales de la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004, a su turno, pertenezcan a la Fiscalía General de la Nación.
- d) Los peritos que la Fiscalía pretenda usar en procesos penales tramitados bajo las normas procesales de la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004, y que no pertenecieran a la Fiscalía General de la Nación sino a otra entidad de derecho público.
- e) Los Fiscales que lleven a su cargo procesos penales tramitados bajo las normas procesales de la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004.
- f) Los demás servidores de la Fiscalía General de la Nación, que en ejercicio de sus funciones, se encuentren en riesgo, bajo este marco jurídico.
- g) Los familiares de las personas señaladas en los literales anteriores hasta el cuarto grado de consanguinidad o civil, segundo de afinidad y al cónyuge, compañera o compañero permanente, siempre que se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro. Por tanto, se hará un análisis individual de cada persona dentro de la evaluación técnica de amenaza y riesgo que se realice al candidato a protección.

Parágrafo 1°. Para ser beneficiarios las personas señaladas en este artículo deben tener un análisis individual del riesgo y un estudio de la necesidad de su incorporación al programa, de acuerdo con la normativa de este cuerpo normativo. Este estudio se condensa en la evaluación técnica de amenaza y riesgo.

Los familiares de los beneficiarios en los literales a), b), c), d), e), f) en las condiciones del literal g), no necesariamente deben ser vinculados al Programa de Protección y Asistencia. Por el contrario, esta incorporación será analizada en cada caso concreto a través de una evaluación técnica de amenaza y riesgo.

Igualmente, se deberá establecer la existencia o no de un(a) compañero(a) permanente, por lo cual se deben acreditar los requisitos de la Ley 54 de 1990. Por ello, se prohibirá la vinculación de compañeras o compañeros sentimentales temporales o que no reúnan los requisitos legales mencionados en este inciso.

Parágrafo 2°. En caso de que el beneficiario no tenga ciudadanía colombiana, se verificará la legalidad de su estadía en el país de acuerdo con las normas de migración vigentes. Posteriormente, se informará al evaluado o protegido sobre las consecuencias jurídicas de su situación legal o ilegal.

En caso de que el evaluado tenga una estadía ilegal en territorio colombiano deberá saberlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para el trámite establecido en el ordenamiento jurídico para esos casos específicos.

En caso de requerirse un traductor, se solicitará el apoyo respectivo a las entidades públicas o dependencias del ente investigador que puedan ayudar eficazmente con dicha labor.

Artículo 71. *No beneficiarios*. Las personas que no pueden ser beneficiarias del Programa de Protección y Asistencia son las siguientes:

- a) Los jueces y magistrados, ya que ellos están cobijados por el Programa de Protección Intervinientes en el Proceso Penal, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, creado por el artículo 77 de la Ley 418 de 1997.
- b) Los testigos, víctimas e intervinientes de los procesos disciplinarios que cursan en la Procuraduría General de la Nación, ya que ellos están cobijados por el Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en los Procesos Disciplinarios y a Funcionarios de la Procuraduría a cargo de la Procuraduría General de la Nación, creado por el artículo 80 de la Ley 418 de 1997.
- c) Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, toda vez que están cobijados por el Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en los Procesos Disciplinarios y a Funcionarios de la Procuraduría, a cargo de la Procuraduría General de la Nación, creado por el artículo 80 de la Ley 418 de 1997.
- d) Dirigentes o activistas de grupos políticos y, especialmente, de grupos de oposición, si no se encuentran dentro de las causales del artículo anterior. Ellos están cobijados por el Programa de Protección a Personas, a cargo del Ministerio del Interior, creado por el artículo 81 de la Ley 418 de 1997.
- e) Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos, si no se encuentran dentro de las causales del



artículo anterior. Ellos están cobijados por el Programa de Protección a Personas, a cargo del Ministerio del Interior, creado por el artículo 81 de la Ley 418 de 1997.

f) Dirigentes o activistas de las organizaciones de derechos humanos y los miembros de la Misión Médica, si no se encuentran dentro de las causales del artículo anterior. Ellos están cobijados por el Programa de Protección a Personas, a cargo del Ministerio del Interior, creado por el artículo 81 de la Ley 418 de 1997.

g) Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario, si en la Fiscalía General de la Nación no existe, cuando menos, una indagación preliminar (Ley 906 de 2004) o investigación previa (Ley 600 de 2000) por los hechos referidos a esa violación. Ellos están cobijados por el Programa de Protección a Personas, a cargo del Ministerio del Interior, creado por el artículo 81 de la Ley 418 de 1997.

h) Las víctimas de delitos que, a su vez, la Fiscalía pretenda tenerlos como testigos en procesos penales tramitados bajo las normas procesales de la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004, en caso de que se encuentren privados de la libertad, en virtud de mandato judicial o con orden de captura vigente.

i) Los testigos que la Fiscalía pretenda usar en procesos penales tramitados bajo las normas procesales de la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004, en caso de que se encuentren privados de la libertad, en virtud de mandato judicial o con orden de captura vigente.

j) Los servidores públicos de elección popular y sus familias, si no se encuentran dentro de las causales del artículo anterior, ya que ellos están cobijados por el Programa de Protección a Personas, a cargo del Ministerio del Interior, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 782 de 2002.

k) Los testigos y peritos que tenga la intención de presentar la defensa dentro del proceso penal estarán a cargo de la Defensoría del Pueblo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley 906 de 2004.

l) Los informantes, por cuanto estos deben ser protegidos por la entidad que se beneficie de la actividad de aquel.

m) Las demás personas que no se encuentren expresamente señaladas como beneficiarias en el artículo anterior, tales como los representantes de las víctimas en procesos de Ley 906 de 2004, apoderados de la parte civil en procesos de Ley 600 de 2000, terceros civilmente responsables y abogados defensores, quienes deberán acudir al servicio de protección ofrecida por la Policía Nacional.

Parágrafo. En caso de que se establezca que el solicitante se encuentra en las condiciones descritas en este artículo, se le dará traslado en el término de dos (2) días hábiles siguientes al día de dicha verificación, y la entidad que le corresponde evaluar la solicitud. De la anterior actuación se le informará al solicitante.

Artículo 72. *Obligaciones para los beneficiarios.* Los beneficiarios tienen las siguientes obligaciones:

a) Las personas que se acojan al Programa de Protección y Asistencia se sujetarán a las condiciones que establezca la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

b) Cumplir con las normas de autoprotección.

c) Suministrar de manera veraz toda la información y documentación solicitada por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

d) Someterse a las actuaciones necesarias para la adecuada ejecución de las medidas de protección adoptadas por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia en favor del beneficiario.

e) Cumplir con los compromisos derivados de cada medida de protección que se ejecuten en su favor.

f) Impedir comportamientos irresponsables o temerarios que pongan en peligro su vida o integridad y la de los demás integrantes del programa, lo cual incluye a sus familiares, otros beneficiarios o personal de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia asignada a su seguridad y control.

g) Impedir comportamientos irresponsables o temerarios que pongan en peligro la vida o integridad de los vecinos del lugar donde residan y la comunidad en general.

h) En caso de ser cobijado con una orden de captura en su contra, el beneficiario estará obligado a ponerse a disposición de la autoridad competente y a no impedir que el Programa de Protección y Asistencia realice los actos necesarios para que la orden judicial se haga efectiva.

i) Colaborar con la Administración de Justicia en atención a todas las declaraciones, audiencias o diligencias en general, cuando sea requerido por las autoridades judiciales o de Fiscalía.

j) No declarar o testificar sobre hechos, personas o circunstancias contrarias a la verdad, callar parcial o totalmente la verdad.

k) Utilizar correcta y diligentemente los recursos, instalaciones y demás elementos o bienes muebles que el Programa coloque a su disposición para la ejecución de las diferentes medidas de protección.

l) No enajenar, dañar o apropiarse de ningún bien de propiedad de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

m) No consumir bebidas embriagantes o alcohólicas.

n) No consumir sustancias prohibidas por la norma penal, tales como sustancias alucinógenas, estimulantes, drogas sintéticas, psicoactivas, depresivas, y demás, que generen dependencia.

o) Someterse a los tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación que se dispongan por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, mientras se encuentre vinculado al programa.

p) Mantener comunicación con la Dirección del Programa por escrito. En casos de extrema gravedad o urgencia, la comunicación se hará a través del agente que haya sido asignado.

q) Tener un comportamiento ético, moral, personal y social ejemplar.

r) Debe reportar toda salida e ingreso a la sede informando a la central comunicaciones del lugar de permanencia o al agente a cargo.

s) Cumplir con el horario o permisos definidos o establecidos para la sede por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia sin excepción.

t) No portar o utilizar equipos de comunicación celular.

u) Destinar o invertir los recursos obtenidos del Programa en la finalidad para la cual estén destinados.

Parágrafo. El tipo penal de fraude a subvenciones, consagrado en el artículo 403 A del Código Penal colombiano, será considerado en la evaluación técnica de amenaza y riesgo, durante la protección y al momento de la reubicación social definitiva, en procura de evitar comportamientos engañosos de los candidatos o protegidos, con el objeto de garantizar el uso de los recursos del Programa en su finalidad constitucional y legal.

De esta norma penal, o la que se encuentre vigente, se hará expresa constancia en todas las actas mediante las cuales se tomen medidas o se asignen recursos para un protegido.

Artículo 73. *Flagrancia.* En caso de que el beneficiario o cualquiera de sus familiares sean sorprendido en flagrancia en la comisión de cualquier conducta punible por el agente, o cualquier funcionario de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, será capturado y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, o del fiscal de turno para su respectiva judicialización.

En estos casos, se entenderá por flagrancia lo regulado en el Código de Procedimiento Penal vigente, y por conducta punible, aquellos comportamientos tipificados en el Código Penal vigente para el momento de la captura.

## LIBRO SEGUNDO

### PROGRAMAS EN ESPECIAL

#### PRIMERA PARTE

### PROGRAMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS Y VÍCTIMAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO Y FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

#### CAPÍTULO I

##### **Incorporación del beneficiario al programa de protección y asistencia**

Artículo 74. *Solicitud de incorporación.* Pueden elevar la petición de incorporación de una persona determinada al Programa de Protección y Asistencia las siguientes personas:

a) El fiscal que adelante la indagación preliminar, investigación o que represente al ente investigador en el juicio, en procesos regulados por la Ley 906 de 2004.

b) El fiscal que adelante la investigación previa, instrucción o que represente al ente investigador en la fase de juzgamiento en procesos regulados por la Ley 600 de 2000.

c) El funcionario judicial de conocimiento que adelante el juicio en procesos regulados por la Ley 906 de 2004 con sus modificaciones.

d) El funcionario judicial de conocimiento que adelante el juzgamiento en procesos regulados por la Ley 600 de 2000.

e) El propio interesado.

f) Cualquier autoridad pública que remita una solicitud de protección por considerarla de competencia del programa.

Artículo 75. *Contenido de la solicitud.* La solicitud de incorporación al Programa de Protección y Asistencia debe contener la siguiente información, con base en el formato establecido para este trámite:

a) Nombre completo e identificación de la persona a proteger.

b) Datos de ubicación inmediata de la persona a proteger.

c) Identificación de la investigación penal o proceso en el cual interviene la persona postulada o candidata a protección.

d) Calidad de la persona postulada dentro de la investigación o proceso penal.

e) Fiscalía que conoce la investigación o proceso penal.

f) Etapa actual del proceso.

g) Hechos que motivan la solicitud.

h) Finalidad de la solicitud.

i) Posible duración de la incorporación.

j) Datos de ubicación del despacho judicial que lleva la investigación o proceso penal.

k) Nombre completo, identificación y datos de ubicación de la persona que realiza la solicitud.

Parágrafo. Para asegurarse de que cada solicitud de incorporación se haga de manera apropiada y oportuna, el candidato a protección debe rendir testimonio o declaración jurada ante la autoridad fiscal correspondiente antes de ser admitido en el programa. Lo anterior tiene el propósito de que exista el compromiso de dar esta información en la fase de juzgamiento o audiencia de juicio oral bajo la ley procedimental que regule el caso.

Parágrafo 2°. En caso de que la solicitud carezca de uno o más requisitos, la Dirección Nacional de Protección y Asistencia debe requerir al solicitante para que suministre la información faltante, en el término de los tres (3) días hábiles siguientes.

Artículo 76. *Análisis preliminar.* Recibida la solicitud en debida forma de conformidad con el artículo anterior, el Director Nacional de Protección y Asistencia designará un funcionario para que realice un análisis preliminar para verificar si la persona puede o no ser beneficiaria del programa.

Parágrafo 1°. En caso de que la persona postulada se encuentre entre aquellas que pueden ser beneficiarias, el evaluador requerirá a la Policía Nacional, para que brinde la seguridad necesaria e inmediata encaminada a preservar la vida e integridad del candidato a protección mientras se decide su incorporación al programa.

Asimismo, informará al fiscal de conocimiento de sus deberes, entre los que se destacan el de permitir la inspección al expediente por los funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, y el de otorgar la protección necesaria e inmediata al testigo o víctima, de conformidad con lo regulado en el Código de Procedimiento Penal.

Parágrafo 2°. En caso de que la persona postulada no se encuentre entre aquellas que pueden ser beneficiarias, se dejará a cargo de la entidad que le corresponde su protección y se remitirá a la misma toda la documentación. De ello se debe dejar copia y se procederá al archivo de la solicitud en la dependencia.

De la misma manera, se informará al interesado de esta remisión.

Artículo 77. *Verificación probatoria.* En caso de que el análisis preliminar indique que el candidato a protección se encuentra dentro de la hipótesis del parágrafo 1° del artículo anterior, el Director Nacional de Protección y Asistencia librára misión de trabajo para realizar la evaluación técnica de amenaza y riesgo que deberá efectuarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la orden o misión referida.

Igualmente, se requerirá al fiscal de conocimiento para que rinda un concepto de la solicitud y del testigo en los términos de este cuerpo normativo.

Artículo 78. *Término para el análisis de la solicitud.* La incorporación se decidirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del “Informe de Policía Judicial de Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo” en la unidad jurídica o área correspondiente en la Dirección Nacional.

En este término, se valorarán los elementos recaudados y se tomará una decisión con base en todos ellos.

Parágrafo. En caso de que el Director Nacional de Protección y Asistencia considere necesaria la inspección al proceso penal en el que se funda la solicitud antes de decidir de fondo, librára una misión de trabajo que será cumplida por uno de los abogados de la Unidad Jurídica, o área correspondiente, dentro del término establecido para decidir, quien deberá tener conocimientos en derecho penal y derecho procedimental penal, con el objeto de que rinda un informe.

Adicionalmente, en caso de ser necesario, se librára misión de trabajo para que se realice un perfil psicológico del candidato a protección para recaudar elementos sobre la credibilidad de su testimonio. Este perfil será valorado en conjunto con los demás elementos al momento de tomar la decisión de fondo.

Artículo 79. *Autoridad competente para decidir.* La autoridad facultada para tomar la decisión relacionada con la incorporación de cualquier candidato a protección es el Director Nacional de Protección y Asistencia o el Fiscal General de la Nación.

Artículo 80. *Decisión de fondo.* La decisión del Director Nacional de Protección y Asistencia se proferirá mediante un acta que se comunicará personalmente al beneficiario y al fiscal de conocimiento. El acta no solo se referirá a la incorporación del candidato a protección y su familia, sino también a la(s) medida(s) de protección considerada(s) procedente(s).

Las medidas de protección y asistencia integral se tomarán con base en las reglas particulares para cada caso.

Parágrafo. En caso de decidirse de forma positiva la incorporación de un individuo al Programa de Protección y Asistencia, se enviará un oficio al fiscal de conocimiento en el cual se le informarán de sus deberes u obligaciones con la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de acuerdo con lo normado en esta resolución.

Artículo 81. *Archivo.* En caso de que la decisión sea la no incorporación del candidato a protección al programa, se archivará el expediente. El candidato a protección recibirá aviso de la decisión, así como quien realizó la solicitud y el fiscal de conocimiento.

Si existen hechos nuevos y una nueva petición que justifique la incorporación al programa, se hará un nuevo trámite. No obstante, se tendrá en cuenta lo tramitado con fundamento en la petición anterior.

No se tramitarán solicitudes de protección que no brinden información sobre hechos o circunstancias sobrevenientes, en virtud del principio de economía en la administración pública.

## CAPÍTULO II

### Trámites durante la permanencia del beneficiario en el programa de protección y asistencia

#### SECCIÓN I

#### TRÁMITES GENERALES

Artículo 82. *Celebración del acuerdo.* La Dirección Nacional de Protección y Asistencia y el beneficiario celebrarán un acuerdo en el cual, por un lado, el programa tiene la obligación de cumplir con todas las medidas de protección y asistencia declaradas procedentes en favor del beneficiario. Por otro lado, el beneficiario se compromete a cumplir con todos los preceptos contenidos en este cuerpo normativo y con las demás obligaciones que sean impuestas por el programa.

Se informará al candidato a protección lo que puede esperar del Programa de Protección y Asistencia.

Las condiciones y obligaciones son establecidas por el programa unilateralmente, en consideración a las observaciones e información recaudadas en la evaluación técnica de amenaza y riesgo.

Artículo 83. *Cumplimiento de las obligaciones del beneficiario.* En los acuerdos que celebre el beneficiario con la Fiscalía General de la Nación - Dirección Nacional de Protección y Asistencia, la persona vinculada al Programa debe adoptar todos los mecanismos y

medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales y administrativas contraídas con anterioridad a la celebración del acuerdo.

En este caso, se hará una relación completa de la posición económica de cada uno de los beneficiarios que incluya el valor real de sus propiedades personales, deudas, pagos de sostenimiento, hipotecas, cuentas bancarias, pensiones, títulos, ingresos, derechos litigiosos e información referente a dineros que reciba el testigo o espere recibir, de particulares u otras entidades del Estado. Esta relación hará parte del expediente.

Artículo 84. *Promesas u ofertas.* La Fiscalía General de la Nación solo tendrá las obligaciones y responsabilidades frente a las personas vinculadas al programa, en los términos en que este, o los acuerdos suscritos lo indiquen, y no responderá por promesas u ofertas efectuadas por personas no autorizadas.

En ese orden de ideas, cabe señalar que el Programa de Protección y Asistencia no paga recompensas.

En todo caso se suscribirá un acta donde se establezcan claramente las obligaciones del Programa de Protección y Asistencia, así como las Obligaciones y deberes del beneficiario.

Parágrafo. Los abogados, los investigadores o los fiscales de conocimiento no están autorizados para representar al Programa de Protección y Asistencia ante los testigos, candidatos a protección o beneficiarios, en lo referente a promesas de financiación, protección y otros servicios del programa.

Artículo 85. *Condiciones del acuerdo.* Las condiciones que se estipulen en la celebración del acuerdo entre la Dirección Nacional de Protección y Asistencia y el beneficiario deben constar por escrito a través de un acta de compromiso, que hará parte del expediente que tendrá la dependencia.

Se suscribirá un acta de compromiso con cada vinculado al Programa de Protección y Asistencia; en caso de que sea menor de edad, el acta será firmada por su representante legal o persona a cargo, siempre y cuando también esté vinculado al programa.

Artículo 86. *Contenido del acta de compromiso.* El acta de compromiso deberá contener como mínimo:

- Título: Acta de Compromiso.
- Definición de las medidas que adoptará el programa a favor del beneficiario.
- Zonas de riesgo para el beneficiario.
- Obligaciones y deberes del beneficiario.
- Causales de desvinculación.
- Causales de exclusión.
- Manifestación expresa por parte del beneficiario de su conocimiento sobre las consecuencias y deberes que acarrea su incorporación al Programa de Protección y Asistencia.
- Manifestación expresa de su voluntad libre y espontánea de acceder al Programa de Protección y Asistencia.
- Nombre completo e identificación del beneficiario y de las personas que por extensión sean beneficiadas.
- Firma y huella del beneficiario.
- Firma del Director Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo. En caso de que el acta no esté suscrita por el Director Nacional de Protección y Asistencia, se entenderá que dicho documento es inexistente y que lo contenido allí no es de obligatorio cumplimiento al Programa.

Artículo 87. *Temporalidad.* Las medidas de protección y los programas de asistencia durarán hasta que se verifique la ocurrencia de una causal de desvinculación o exclusión.

Artículo 88. *Inducción al ingreso del programa de protección y asistencia.* La persona vinculada como beneficiario del programa deberá recibir una inducción sobre de las medidas de autoprotección, sus deberes, causales de desvinculación y exclusión del programa.

De esta inducción se dejará constancia en el expediente o carpeta del caso.

Artículo 89. *Valoración médica y psicológica.* Al vincular una persona como beneficiaria del Programa de Protección y Asistencia debe someterse a una valoración médica y psicológica la cual hará parte del expediente.

**Valoración psicológica:** Cada uno de los beneficiarios y miembros de su familia vinculados por extensión también deberán someterse a la misma valoración a fin de determinar si los individuos pueden presentar algún peligro para los integrantes del programa, las comunidades donde serán reubicados y adicionalmente podrán obtener alguna información que permita establecer la confiabilidad, personalidad y rasgos importantes que puedan incidir en la valoración de su testimonio dentro del proceso penal que motivó su incorporación.

**Valoración médica:** Se indagará sobre todos los problemas médicos que el beneficiario y los miembros de su familia hayan experimentado, lo cual incluye cualquier historia de abuso de alcohol o sustancias estupefacientes. Del mismo modo, el médico podrá establecer medidas adicionales a las medidas de protección a fin de garantizar las condiciones de salud de los vinculados. Estas medidas adicionales se ejecutarán si se consideran procedentes por el Director Nacional de Protección y Asistencia, en consideración de la disponibilidad presupuestal.

Parágrafo. Después de que cada beneficiario sea valorado médica y psicológicamente, el respectivo profesional elaborará un informe con los resultados y las medidas recomendadas con destino al Director Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 90. *Servicio de salud.* En caso de que la medida de protección implique la protección física y el sometimiento a los esquemas de seguridad para el beneficiario, la Dirección Nacional de Protección y Asistencia procederá a vincularlo al Servicio de Salud, Régimen Subsidiado del lugar donde se disponga su estadía.

En caso de que el beneficiario decida continuar en el Sistema General de Seguridad Social, Régimen Contributivo, deberá sufragar de su dinero las correspondientes cotizaciones



y el Programa de Protección y Asistencia no será responsable de la negativa de servicios de salud por el no pago o mora del beneficiario.

Artículo 91. *Peticiones.* Todas las peticiones que realice el beneficiario durante su incorporación al Programa de Protección y Asistencia, y que no se encuentren expresamente regulados en este cuerpo normativo, serán resueltas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.

En caso de requerirse más tiempo para responder la solicitud, la Dirección Nacional de Protección y Asistencia informará de este hecho al beneficiario y explicará las razones que justifican la ampliación del plazo. A su turno, recibirá indicaciones sobre los días hábiles adicionales que tomará la resolución de su solicitud.

Artículo 92. *Revisión periódica de la incorporación del beneficiario.* El Director Nacional de Protección y Asistencia librará misión de trabajo para revisar trimestralmente, o en cualquier momento, la situación procesal del beneficiario con el propósito de acreditar el cumplimiento de una causal de desvinculación o exclusión del programa.

De la misma forma, se requerirá al fiscal de conocimiento para que informe periódicamente sobre el estado del proceso y la práctica probatoria del mismo en lo correspondiente a la declaración, entrevista o testimonio rendida por el beneficiario. Igualmente, sobre el comportamiento fraudulento o falsario del beneficiario, en perjuicio de la administración de justicia en caso de llegar a ocurrir, y demás informaciones útiles para la dependencia.

Artículo 93. *Evaluación y asistencia psicológica.* En todo momento el programa brindará evaluación y asistencia psicológica a los beneficiarios, en caso de necesitarse o requerirse por los mismos al Director Nacional de Protección y Asistencia.

SECCIÓN II

TRÁMITES ESPECÍFICOS PROTECCIÓN FÍSICA

Artículo 94. *Solicitud.* Esta medida de protección se analizará si la evaluación técnica de amenaza y riesgo así lo recomienda.

El informe de evaluación técnica de amenaza y riesgo debe determinar si se requiere vincular al beneficiario a las medidas de protección física, cambiarlo de domicilio a un lugar determinado por el programa y procurar su protección integral.

Respecto a los familiares del candidato a protección su incorporación o no será analizada con base en el informe de evaluación técnica de amenaza y riesgo que se haga sobre ellos, de conformidad con lo prescrito anteriormente. Las medidas de protección pueden ser iguales o diferentes a las señaladas para el candidato a protección.

Artículo 95. *Consentimiento del beneficiario.* Antes de vincular al beneficiario en las medidas de protección física, este debe ser informado de la naturaleza, consecuencias y deberes que conlleva la medida de protección.

Después de recibir la información debidamente, el beneficiario que apruebe la incorporación a las medidas de protección física deberá suscribir un acta donde deje constancia expresa de su manifestación de voluntad libre y espontánea, la cual hará parte del expediente que tiene a cargo la dependencia.

Artículo 96. *Contenido del acta.* El acta de consentimiento de sometimiento a las medidas de protección física deberá contener como mínimo:

- a) Título: Acta de consentimiento de sometimiento a las medidas de protección física.
- b) Definición de la medida.
- c) Manifestación expresa por parte del beneficiario de su conocimiento sobre las consecuencias y deberes que acarrea la medida de sometimiento a las medidas de protección física.
- d) Manifestación expresa por parte del beneficiario de la necesidad del sometimiento a las medidas de protección física.
- e) Manifestación expresa de su voluntad libre y espontánea en acceder al sometimiento a las medidas de protección física.
- f) Firma y huella del beneficiario y del servidor a cargo.

Artículo 97. *Entrevista socioeconómica.* El funcionario encargado deberá realizar una entrevista al beneficiario en los términos señalados en este cuerpo normativo.

Esta entrevista se tendrá en cuenta cuando se decida la reubicación definitiva.

Artículo 98. *Estudio socioeconómico.* El funcionario asignado hará un estudio socioeconómico en los términos de este cuerpo normativo, con el propósito de determinar el monto del apoyo económico para el beneficiario cuando se decida sobre su reubicación definitiva.

Artículo 99. *Autoridad competente para decidir.* La autoridad facultada para tomar la decisión relacionada con la protección física, los esquemas de seguridad y la reubicación definitiva de cualquier beneficiario es el Director Nacional de Protección y Asistencia o el Fiscal General de la Nación.

Artículo 100. *Término para decidir.* La medida de protección se decidirá dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo del acta de consentimiento de sometimiento a las medidas de protección física, debidamente suscrita por el beneficiario, y al informe de evaluación técnica de amenaza y riesgo.

La medida de reubicación definitiva y apoyo para la reincorporación en la sociedad se decidirá cuando se acredite la ocurrencia de una causal de desvinculación del beneficiario, así como de sus familiares.

Parágrafo. No habrá medida de reubicación definitiva o apoyo para la reincorporación cuando se acredite una causal de exclusión.

Artículo 101. *Decisión.* El Director Nacional de Protección y Asistencia podrá determinar la procedencia o improcedencia de la medida de protección cuando el expediente del caso sea evaluado mediante un acta, la cual no es susceptible de recursos. De igual manera, en dicha acta se indicará la forma en que se desarrollará la medida.

Artículo 102. *Improcedencia.* En caso de que la decisión sea la improcedencia de la medida de protección, se mantendrá el expediente activo por dos años, en caso de que

surja la necesidad de ejecutar alguna medida de protección. Si no es así, se desvinculará al beneficiario del programa y se archivará el expediente.

En caso de que existan hechos nuevos que justifiquen las medidas de protección física, se hará un nuevo trámite con base en el último informe de evaluación técnica de amenaza y riesgo que reitere la recomendación de esta medida de protección.

Artículo 103. *Procedencia.* En caso de que la decisión fuese la procedencia de la medida de protección, se ejecutarán las siguientes acciones:

- a) Reubicar al beneficiario en un lugar definido por el Programa de Protección y Asistencia.
- b) Determinar las medidas de protección necesarias para la protección integral del beneficiario.
- c) Destinar los recursos necesarios para manutención y desplazamiento del protegido durante su incorporación al Programa de Protección y Asistencia durante la ejecución de la medida de protección.

Parágrafo. Estas medidas pueden ser complementadas o modificadas por otras teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso y la autonomía del Director Nacional de Protección y Asistencia, siempre que se respeten los principios orientadores de este marco normativo.

Artículo 104. *Desplazamientos a diligencias judiciales.* Cuando la persona beneficiaria del programa deba comparecer ante cualquier autoridad, el Director Nacional de Protección y Asistencia o a quien designe o delegue para ese fin establecerá los mecanismos adecuados para garantizar la vida e integridad del beneficiario y logrará que se presente o sea representada en la correspondiente actuación, sin perjuicio de la reserva de su identidad.

Parágrafo 1°. Los desplazamientos del beneficiario estarán sometidos a los mecanismos establecidos por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, mientras perdura el proceso penal y la incorporación de este al Programa.

Parágrafo 2°. Se procurará de manera progresiva la implementación de los medios técnicos necesarios para la realización de teleconferencias o videoconferencias que permitan la validez de las diligencias o audiencias, la seguridad del beneficiario y el ahorro en costos de desplazamiento del protegido.

Artículo 105. *Traslados temporales al exterior.* Cuando las circunstancias así lo justifiquen, la protección física podrá comprender el traslado al exterior, en los términos y condiciones de este cuerpo normativo.

A pesar de que la Fiscalía General de la Nación no se hará cargo de los gastos y seguridad del beneficiario mientras resida en el exterior, este deberá cumplir con todas las obligaciones y condiciones del Programa, con el propósito de recibir los beneficios de las medidas protectivas cuando deba regresar al país para cumplir con las citaciones judiciales.

Aunque esta medida está contemplada, estará sujeta a la disponibilidad de recursos y a la existencia de convenios con programas de protección extranjeros de la misma naturaleza.

Parágrafo. En caso de que el traslado al exterior no garantice la seguridad de la vida e integridad del beneficiario así como la de su familia, esta medida será improcedente.

Cambio de identidad

Artículo 106. *Solicitud.* Esta medida de protección se analizará si la evaluación técnica de amenaza y riesgo así lo recomienda, de acuerdo con las restricciones propias establecidas en el artículo 44 y sus párrafos.

El informe de evaluación técnica de amenaza y riesgo debe determinar si se requiere únicamente la expedición de nuevos documentos públicos y privados, o si es necesaria la modificación de rasgos físicos.

La evaluación técnica de amenaza y riesgo no condiciona la decisión del Director Nacional de Protección y Asistencia, quien valorará las circunstancias y demás elementos de prueba dentro del caso.

Esta medida estará sujeta a las posibilidades jurídicas, científicas, médicas y económicas para su ejecución. También dependerá de la autonomía del Director Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 107. *Consentimiento del beneficiario.* Antes de decidir el cambio de identidad, el beneficiario debe ser informado de la naturaleza, consecuencias y deberes que conlleva la medida de protección.

Después de ser debidamente informado, el beneficiario que apruebe el cambio de identidad deberá suscribir un acta donde deje constancia expresa de su manifestación de voluntad libre y espontánea. Está hará parte del expediente que tiene a cargo la dependencia.

Artículo 108. *Contenido del acta.* El Acta de consentimiento de cambio de identidad deberá contener como mínimo:

- a) Título: Acta de consentimiento de cambio de identidad;
- b) Definición de la medida;
- c) Manifestación expresa por parte del beneficiario de su conocimiento sobre las consecuencias y deberes que acarrea el cambio de identidad;
- d) Manifestación expresa por parte del beneficiario de la necesidad de su cambio de identidad;
- e) Manifestación expresa de su voluntad libre y espontánea de acceder al cambio de su identidad;
- f) Obligaciones y deberes derivadas del cambio de identidad, de acuerdo con este marco normativo y con el ordenamiento jurídico en general;
- g) Firma y huella del beneficiario y del servidor a cargo.

Artículo 109. *Autoridad competente para decidir.* La autoridad facultada para tomar la decisión relacionada con el cambio de identidad de cualquier beneficiario es el Director Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 110. *Término para decidir.* La medida de protección se decidirá dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo del Acta de consentimiento de cambio de identidad, debidamente suscrita por el beneficiario.

El término se empezará a contar una vez se cumplan todas las condiciones establecidas en los artículos 44 y 107.

Artículo 111. *Decisión.* El Director Nacional de Protección y Asistencia podrá determinar la procedencia o improcedencia de la medida de protección cuando el expediente del caso sea evaluado, mediante Acta la cual no es susceptible de recursos.

Al tratarse de testigos, el cambio de identidad se ordenará siempre y cuando no se afecte el debido proceso.

Artículo 112. *Improcedencia.* En caso de que la decisión sea la improcedencia de la medida de protección, se ejecutarán las demás medidas de protección que se consideren procedentes.

Si existen hechos nuevos que justifiquen el cambio de identidad se hará un nuevo trámite con base en el último informe de evaluación técnica de amenaza y riesgo que reitere la recomendación de esta medida de protección.

Artículo 113. *Procedencia.* En caso de que la decisión sea la procedencia de la medida de protección, se ejecutarán las siguientes acciones:

a) Ordenar a las autoridades públicas la expedición de documentos que reemplacen los que el beneficiario ya posee, tales como registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, certificado de antecedentes, licencia de conducción y otros, sin que para su tramitación deban cumplirse los procedimientos ordinarios;

b) Ordenar la expedición de títulos académicos por parte de entidades públicas o privadas para reemplazar a los originalmente otorgados;

c) Disponer la modificación de los rasgos físicos de la persona que permitan su identificación en caso de que el beneficiario lo requiera y lo haya autorizado;

d) Informar a las autoridades fiscales o judiciales que adelanten procesos judiciales o administrativos contra el beneficiario sobre su cambio de identidad, y advertirles acerca de su calidad de beneficiario del Programa de Protección y Asistencia y la reserva de esta comunicación a terceros.

Parágrafo. Esta medida está condicionada al presupuesto de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, y a la viabilidad que otorgue el ordenamiento jurídico colombiano, así como a las competencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 114. *Responsabilidad penal del beneficiario.* El cambio de identidad del beneficiario no podrá implicar exoneración de la responsabilidad penal por los delitos cometidos antes, durante y después de la incorporación al Programa de Protección y Asistencia.

Artículo 115. *Responsabilidades del beneficiario.* El cambio de identidad no genera exoneración en el cumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales y administrativas contraídas por el beneficiario con anterioridad a la ejecución de esta medida de protección.

#### Trámite para el cambio de domicilio

Artículo 116. *Solicitud.* Esta medida de protección se analizará si la evaluación técnica de amenaza y riesgo así lo recomienda.

El informe de evaluación técnica de amenaza y riesgo debe determinar si se requiere únicamente del cambio de domicilio sin necesidad de vincular al beneficiario a las medidas de protección física.

Parágrafo 1°. El cambio de domicilio es temporal mientras el beneficiario se encuentra vinculado al programa de protección, y es definitivo cuando se configura una causal de desvinculación.

No hay lugar a reubicación definitiva cuando se aplica una causal de exclusión, razón por la cual el beneficiario pierde la posibilidad de hacerse acreedor a cualquier ayuda de asistencia integral.

Parágrafo 2°. A pesar de no tener una protección física, el beneficiario del cambio de domicilio sigue vinculado al Programa de Protección y Asistencia durante todo el proceso penal, siempre que no se genere una causal de desvinculación o exclusión unilateral. Además, debe cumplir con las normas y recomendaciones de seguridad que le sean indicadas.

Parágrafo 3°. Las víctimas de violencia sexual con ocasión al conflicto armado, que sean beneficiarias de esta medida tendrán derecho, de manera complementaria a gozar de las medidas que establece la Ley 1257 de 2008 y 1719 de 2014, de acuerdo con las situaciones particulares de cada caso.

Artículo 117. *Consentimiento del beneficiario.* Antes de decidir el cambio de domicilio, el beneficiario debe ser informado de la naturaleza, consecuencias y deberes que conlleva la medida de protección.

Después de ser debidamente informado, el beneficiario que apruebe el cambio de domicilio deberá suscribir un acta donde deje constancia expresa de su manifestación de voluntad libre y espontánea, la cual hará parte del expediente que tiene a cargo la dependencia.

Artículo 118. *Contenido del acta.* El acta de consentimiento de cambio de domicilio, deberá contener como mínimo:

a) Título: Acta de consentimiento de cambio de domicilio;

b) Definición de la medida;

c) Manifestación expresa por parte del beneficiario de su conocimiento sobre las consecuencias y deberes que acarrea el cambio de domicilio;

d) Manifestación expresa por parte del beneficiario de la necesidad del cambio de su domicilio;

e) Manifestación expresa de su voluntad libre y espontánea de acceder al cambio de domicilio;

f) Compromiso por parte del beneficiario de acudir ante las autoridades judiciales que lo requieran, especialmente, a las autoridades que llevan el proceso penal que generó el cambio de domicilio;

g) Compromiso por parte del beneficiario de informar periódicamente si cambia el lugar de su residencia, su número fijo o celular actual a fin de lograr un contacto permanente con la Dirección Nacional de Protección y Asistencia;

h) Firma y huella del beneficiario y del servidor a cargo.

Artículo 119. *Entrevista socioeconómica.* El funcionario de policía judicial encargado deberá realizar una entrevista al beneficiario del cambio de domicilio, en los términos señalados en este cuerpo normativo.

Artículo 120. *Estudio socioeconómico.* El servidor hará un estudio socio económico en los términos de este cuerpo normativo, con el propósito de determinar el monto del apoyo económico para el beneficiario.

Artículo 121. *Autoridad competente para decidir.* La autoridad facultada para tomar la decisión relacionada con el cambio de domicilio de cualquier beneficiario es el Director Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 122. *Término para decidir.* La medida de protección se decidirá dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo del acta de consentimiento de cambio de domicilio, debidamente suscrita por el beneficiario.

Artículo 123. *Decisión.* El Director Nacional de Protección y Asistencia podrá determinar la procedencia o improcedencia de la medida de protección una vez evaluado el expediente del caso mediante acta, la cual no es susceptible de recursos.

Al tratarse de testigos, el cambio de domicilio se ordenará siempre y cuando no se afecte el debido proceso.

Artículo 124. *Procedencia.* En caso de que la decisión fuese la procedencia de la medida de protección, se ejecutarán las siguientes acciones:

a) Ordenar la entrega de los recursos al beneficiario que se consideren necesarios, de conformidad con la entrevista socioeconómica y el estudio socioeconómico, para ello se firmará un acta con la destinación específica de los recursos y las obligaciones del beneficiario de la medida;

b) Instruir al beneficiario de la manera en que debe mantener en secreto el lugar de su reubicación y todos los asuntos relacionados con esta;

c) Informar a las Autoridades Fiscales o Judiciales que adelanten procesos judiciales o administrativos contra el beneficiario sobre su cambio de domicilio advirtiéndoles de su calidad de beneficiario del Programa de Protección y Asistencia y la reserva de esta comunicación a terceros.

Parágrafo. Los recursos que contempla esta medida se entregarán por una sola vez, donde el beneficiario debe cumplir con las obligaciones impuestas por el Programa hasta su desvinculación.

Artículo 125. *Responsabilidad del beneficiario.* El beneficiario será responsable de la atención de sus necesidades básicas en el lugar de reubicación con los recursos asignados por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Además deberá reportar periódicamente sobre el cambio de residencia y enviar la documentación que soporte la adecuada o correcta utilización de los recursos entregados por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo. En caso de no reportar adecuada y correctamente la debida utilización de los recursos entregados por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, deberá el beneficiario reintegrarlos a las arcas del Programa, circunstancia que se pondrá en conocimiento al momento de recibir los recursos y se plasmará en el Acta de Devolución y Entrega.

En caso de no reintegrarlos, se procederá a denunciar penalmente al beneficiario y a tramitar su exclusión.

#### CAPÍTULO III

##### Desvinculación del beneficiario del programa de protección y asistencia

Artículo 126. *Desvinculación.* La desvinculación ocurre cuando se encuentre acreditada alguna de las causales señaladas en el artículo siguiente.

Esta comprende la terminación normal de las obligaciones del Programa de Protección y Asistencia, y hará acreedor al protegido a una reubicación definitiva, en caso de considerarse precedente.

Artículo 127. *Causales.* Son causales de desvinculación las siguientes:

a) Cuando el beneficiario es cobijado con una orden de captura en su contra, en ese caso se tramitará la desvinculación y se procederá a poner al beneficiario a disposición de la autoridad competente para que se haga efectiva la orden;

b) Cuando el beneficiario no sea requerido nuevamente por la autoridad judicial que se encuentra a cargo del proceso penal, ya sea porque su testimonio se practicó, y no se requiere su ampliación, o porque no fue decretado en la respectiva audiencia preparatoria;

c) Porque se cumplió con la finalidad de su protección o desaparecieron los motivos que justificaron su incorporación al Programa de Protección y Asistencia.

Artículo 128. *Trámite de la desvinculación.* La desvinculación se tramitará a solicitud de cualquiera de las siguientes personas:

a) Del funcionario que realice el respectivo control del proceso judicial donde interviene el beneficiario y encuentre cumplida alguna causal de desvinculación;

b) Del servidor que tenga conocimiento del cumplimiento de alguna causal de desvinculación;

c) Cuando el fiscal de conocimiento informe que se ha cumplido con la finalidad de protección o encuentre cumplida cualquier causal de desvinculación.



Parágrafo. Cuando se realice la solicitud de desvinculación se deberá presentar una relación sucinta de los hechos, actuaciones judiciales y demás elementos relevantes a tener en cuenta para acreditar la causal.

Artículo 129. *Informe de evaluación periódica.* Cada beneficiario que se encuentre al interior del programa será revisado trimestralmente y extraordinariamente, según lo determine el Director Nacional de Protección y Asistencia, al verificar los siguientes aspectos:

- a) La situación del beneficiario y su familia dentro del programa y el cumplimiento de sus obligaciones;
- b) La evolución procesal de la actuación judicial donde interviene el beneficiario.

Artículo 130. *Autoridad competente para decidir sobre la desvinculación.* La autoridad facultada para tomar la decisión relacionada con la desvinculación de cualquier persona es el Director Nacional de Protección y Asistencia o el Fiscal General de la Nación.

Artículo 131. *Término.* La desvinculación del beneficiario y su familia se tomará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de desvinculación.

Artículo 132. *Decisión.* El Director Nacional de Protección y Asistencia podrá determinar la procedencia o improcedencia de la desvinculación una vez evaluado el expediente del caso mediante Acta, la cual no es susceptible de recursos.

Artículo 133. *Procedencia.* La desvinculación puede darse en las siguientes hipótesis:

- a) Si se tramita la desvinculación del beneficiario que interviene en el respectivo proceso penal que justificó su incorporación al programa, la desvinculación cobija a dicho beneficiario y a su núcleo familiar vinculado por extensión;

- b) Si se tramita la desvinculación de algún familiar vinculado por extensión, esta decisión no necesariamente afecta al beneficiario que interviene en el respectivo proceso penal.

Parágrafo. En caso de procedencia se comunicará personalmente al desvinculado y se suscribirá un acta con las personas capaces civilmente para suscribir documentos que sean cobijadas con la decisión de desvinculación.

Artículo 134. *Valoración médica y psicológica.* Cuando un beneficiario sea desvinculado del Programa de Protección y Asistencia deberá someterse a una valoración médica y psicológica que hará parte del expediente.

Artículo 135. *Reubicación definitiva al momento de su desvinculación.* En los casos en que sea procedente la reubicación definitiva, el Programa de Protección y Asistencia iniciará y desarrollará una Evaluación Socioeconómica a fin de ejecutar un plan de acción, dirigido a facilitar la reinserción social y educativa del beneficiario, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del programa.

Con la reubicación definitiva del beneficiario, no podrá regresar a la zona de riesgo sin previa autorización del Director Nacional de Protección y Asistencia, el incumplimiento de esta obligación implicará que no pueda ser incorporado de nuevo al Programa de Protección y Asistencia en el futuro debido a que se colocó nuevamente en peligro, en forma injustificada. De esta circunstancia se dejará constancia en el acta que disponga su reubicación definitiva, donde se indicarán las zonas específicas de riesgo.

#### CAPÍTULO IV

##### Renuncia y exclusión del beneficiario del programa de protección y asistencia

Artículo 136. *Renuncia.* Corresponde a la manifestación expresa y escrita de la persona que está dirigida a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia. Allí, expresa que se retira de los beneficios del Programa y de las medidas que se están ejecutando en su favor.

Una vez recibida la renuncia, se procederá a decidir de fondo su escrito.

Artículo 137. *Exclusión.* Corresponde a una sanción producto de la infracción de los deberes de los protegidos contenidos en este cuerpo normativo y en el acta suscrita por él.

La exclusión se diferencia de la desvinculación porque esta se refiere a una terminación anormal de las medidas protectivas debido a la violación e incumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en esta resolución y el acta de compromisos por parte del beneficiario.

Artículo 138. *Causales de exclusión.* Son causales de exclusión las siguientes:

- a) Cuando el beneficiario suministre o haya suministrado información y/o documentación falsa con destino a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

En esta circunstancia se procederá a interponer la respectiva denuncia penal.

- b) Cuando el beneficiario tenga comportamientos irresponsables o temerarios que pongan en peligro su vida o integridad, así como la de los demás integrantes del programa.

En ese sentido, cuando el beneficiario irrespete, amenace o agrede a los funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia;

- c) Cuando el beneficiario se rehúse a colaborar con la Administración de Justicia al negarse a declarar en las audiencias o diligencias donde sea requerido por las autoridades judiciales o de Fiscalía;

- d) Cuando declare o testifique sobre hechos, personas o circunstancias contrarias a la verdad, calle parcial o totalmente la verdad.

Para acreditar esta causal no se requiere que exista providencia judicial de fondo que declare la responsabilidad penal por el eventual delito de falso testimonio. Basta con la simple constatación de tipicidad objetiva, de acuerdo con la información obrante en el expediente. Lo anterior no afecta la presunción de inocencia dentro de un eventual proceso penal seguido en contra del beneficiario;

- e) Cuando no utilice correcta y diligentemente los recursos, instalaciones y demás elementos que el Programa coloque a su disposición para la ejecución de las diferentes medidas de protección.

Además de lo anterior, se requerirá al beneficiario para que cancele de su patrimonio todos los gastos de reparación de los elementos o instalaciones que haya afectado como consecuencia de sus actos;

- f) Cuando el beneficiario consuma bebidas embriagantes o alcohólicas;

- g) Cuando el beneficiario abandone la sede dispuesta para su protección, ya sea de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia o algún Centro de Rehabilitación destinado por el Programa para su atención;

- h) Cuando el beneficiario consuma sustancias prohibidas por la norma penal, tales como sustancias alucinógenas, estimulantes, drogas sintéticas, psicoactivas, depresivas y demás que generen dependencia;

- i) Cuando el beneficiario no tenga un comportamiento ético, moral, personal y social ejemplar que constituya un factor de riesgo para los integrantes del programa;

- j) Cuando el beneficiario cometa cualquier clase de conducta punible durante su incorporación;

- k) En general, cuando el beneficiario infrinja alguno de sus deberes con el programa, establecidos en el acta de compromisos de su vinculación, que no estén expresamente descritos en los literales anteriores.

Parágrafo 1°. En cualquier caso de comisión de conducta punible se elevará la denuncia penal respectiva. En este proceso la Dirección Nacional de Protección y Asistencia es víctima en su patrimonio, sus funcionarios o terceros vinculados o no al Programa de Protección y Asistencia.

En caso de flagrancia, se procederá con la captura del protegido y se pondrá a disposición de la autoridad correspondiente. Así mismo, se procederá inmediatamente con el trámite de la exclusión.

Parágrafo 2°. La exclusión genera la cancelación unilateral de los compromisos, deberes y derechos por parte de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia. Por este motivo, el beneficiario no podrá ser acreedor a cualquier suma de dinero o programa de asistencia, en particular que se esté tramitando o estuviera próxima a tramitarse.

La exclusión podrá tramitarse en cualquier momento, incluso durante el trámite de la reubicación definitiva, en caso de ocurrir alguna de las causales señaladas en este artículo.

Parágrafo 3°. La persona que haya sido excluida del Programa de Protección y Asistencia no podrá ser incorporada nuevamente si no existen hechos distintos a los que sirvieron de fundamento para su anterior vinculación. Además, su nueva vinculación no debe poner en riesgo al Programa de Protección y Asistencia en general.

De esta circunstancia quedará expresa constancia en el acta de incorporación, para que el protegido tenga conocimiento de las consecuencias futuras de una exclusión.

Artículo 139. *Trámite de la renuncia.* En caso que el beneficiario radique su renuncia, comenzarán a correr los términos para decidir desde esa fecha.

Se surtirán los mismos plazos desde el momento en que se reciba el informe que dé cuenta del abandono de la sede.

Artículo 140. *Trámite de la exclusión:* En caso de que se realice la solicitud de exclusión por ocurrencia de una o varias causales se deberá presentar un Informe que detalle todos los hechos, circunstancias y elementos relevantes para tomar la decisión.

Artículo 141. *Autoridad competente para decidir sobre la exclusión.* La autoridad facultada para tomar la decisión relacionada con la exclusión de cualquier beneficiario es el Director Nacional de Protección y Asistencia o el Fiscal General de la Nación.

Artículo 142. *Término.* La exclusión del beneficiario y su familia se tomará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del informe que detalle la acreditación de una causal.

Artículo 143. *Decisión.* El Director Nacional de Protección y Asistencia podrá determinar la procedencia o improcedencia de la exclusión una vez evaluado el expediente del caso, mediante acta, la cual no es susceptible de recursos.

Artículo 144. *Procedencia.* La exclusión o renuncia puede darse en las siguientes hipótesis:

- a) Si se tramita la exclusión o renuncia del beneficiario que interviene en el respectivo proceso penal que justificó su incorporación al programa, el retiro del Programa cobija a dicho beneficiario titular y a su núcleo familiar vinculado por extensión;

- b) Si se tramita la exclusión o renuncia de algún familiar vinculado por extensión, esta decisión no necesariamente afecta al beneficiario que interviene en el respectivo proceso penal.

Parágrafo 1°. En caso de la procedencia del retiro anormal del Programa de Protección y Asistencia, se comunicará personalmente al afectado y se suscribirá un acta.

Parágrafo 2°. En caso de que el motivo de la exclusión sea el cumplimiento de cualquier causal o causales del artículo 139, se dejará constancia del texto y del parágrafo 3° de esa norma, relacionada con las consecuencias futuras de esa exclusión.

Artículo 145. *Valoración médica.* Al retirar a un beneficiario del Programa de Protección y Asistencia ya sea por exclusión o renuncia, deberá someterse a una valoración médica que hará parte del expediente.

Si la persona que se retira del Programa de Protección y Asistencia no acepte la valoración médica, se dejará constancia de esta situación. Además, la omisión de esta valoración no genera impedimento en la ejecución de la decisión de exclusión o de aceptación de renuncia.

Finalmente, en caso de abandono de sede o de imposibilidad fáctica de realizar la valoración, se dejará constancia de esta circunstancia.

Artículo 146. *Contenido del acta de renuncia.* El acta de renuncia deberá contener como mínimo:

- a) Título: Acta de Renuncia;

- b) Motivos expuestos por el beneficiario en la renuncia;

- c) Zonas de riesgo para el beneficiario que renuncia, de conformidad con el Acta de Incorporación y la información contenida en el expediente;

- d) Constancia expresa del deber de quien renuncia de no regresar a la zona de riesgo;

e) Manifestación expresa por parte del beneficiario de su conocimiento sobre las consecuencias y deberes que acarrea su renuncia del Programa de Protección y Asistencia;

f) Manifestación expresa de su voluntad libre y espontánea de renunciar al Programa de Protección y Asistencia;

g) Nombre completo e identificación del beneficiario que renuncia;

h) Firma y huella del beneficiario que renuncia;

i) Firma del Director Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo. En caso que la persona que renuncia abandone la sede antes de ser informada del acta, se dejará constancia de lo ocurrido sin que ello afecte la terminación de compromisos por parte del Programa de Protección y Asistencia.

Artículo 147. *Contenido del acta de exclusión.* El acta de exclusión deberá contener como mínimo:

a) Título: Acta de exclusión;

b) Causal acreditada de exclusión;

c) Zonas de riesgo para el excluido de acuerdo con el Acta de Incorporación y la información contenida en el expediente;

d) Constancia expresa del deber de quien es excluido de no regresar a la zona de riesgo;

e) Manifestación expresa por parte del beneficiario de su conocimiento sobre las consecuencias que acarrea su comportamiento dentro del Programa de Protección y Asistencia;

f) Manifestación expresa libre y espontánea que certifique el respeto a su derecho de defensa y debido proceso dentro del trámite de exclusión seguido en su contra;

g) Manifestación expresa por parte del excluido de conocer y comprender las razones de su exclusión;

h) Manifestación expresa por parte del excluido de comprender que no podrá ser incorporado o incorporada nuevamente si no existen hechos distintos a los que sirvieron de fundamento para su anterior vinculación;

i) Nombre completo e identificación del excluido;

j) Firma y huella del excluido;

k) Firma del Director Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo 1°. En caso que la persona excluida abandone la sede antes de ser informada del acta, se dejará constancia de lo ocurrido sin que ello afecte la terminación de compromisos por parte del Programa de Protección y Asistencia.

Parágrafo 2°. Adicional al contenido expuesto para el Acta de Exclusión, deberá analizarse o motivarse lo siguiente:

1. Resaltar que, al tratarse de medidas encaminadas a dar protección, las autoridades gozan de autonomía para tomar las decisiones necesarias, siempre y cuando constituyan soluciones reales y efectivas. En este caso, es necesario explicar por qué la medida de protección tomada era eficaz, pero que en virtud del principio de autonomía también la consecuencia jurídica (exclusión) se torna procedente.

2. Señalar las obligaciones del excluido en la parte motiva de las alternativas. Estas dependerán de la situación del riesgo, que tiene su autoprotección. Por consiguiente, estas resultan obligatorias para el excluido, de modo que con su comportamiento se elimine o, al menos, se minimice la exposición a riesgos.

3. Explicar por qué no existe una violación potencial al derecho a la vida e integridad que se presente como inminente y próxima si el excluido cumple con prudencia las recomendaciones de autoprotección. Así las cosas, también deben resaltarse las consecuencias de las medidas de protección del programa, puesto que se alejó al ciudadano de la zona de riesgo, así como demás circunstancias que hayan minimizado el peligro de ser objeto de algún atentado o agresión para el momento de su exclusión.

4. Dado que el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades por el Constituyente, se deberá motivar como en el caso concreto, no se distorsionan las cargas públicas, a pesar de la exclusión, pues se minimizó el riesgo del excluido quien, a su vez, podrá seguir gozando de su seguridad si atiende las recomendaciones de autoprotección específicas para su caso.

En tal caso, no solo se comunicará al Comandante de Policía del lugar de residencia del excluido por si regresa a su zona de riesgo, sino que se le exhortará a seguir en un lugar apartado a su zona de riesgo con el propósito de comunicar al Comandante de Policía del lugar de su nueva residencia para que tenga las garantías de seguridad necesarias para su protección general.

En este caso, en la comunicación del acta de exclusión unilateral el ciudadano deberá indicar dónde será su nueva ubicación para realizar el correspondiente oficio.

5. Se deberá realizar una exposición detallada de todas las faltas cometidas por el excluido y demás circunstancias que motivan la decisión.

En este caso, se deben ponderar racionalmente los factores objetivos y subjetivos, con el fin de determinar las circunstancias y establecer si hay lugar a la protección especial (continuar con la protección) o si, por el contrario, es procedente resolver por excluir unilateralmente al protegido, en el caso concreto.

En este ejercicio de ponderación debe identificarse el principio de proporcionalidad y los desarrollos jurisprudenciales referidos al derecho a la seguridad personal para justificar constitucionalmente la validez y legitimidad de la exclusión unilateral.

6. Evaluar el estado actual del proceso penal con el propósito de indicar la importancia o no que aún tiene el excluido dentro del mismo e indicar la posibilidad jurídica de excluirlo sin afectar su participación dentro del trámite penal correspondiente.

En este contexto, también se deben evaluar los antecedentes de amenaza contra la vida e integridad del protegido que justificaron su vinculación. Lo anterior para valorar si estos aún pueden afectar a su núcleo familiar, o por el contrario, verificar qué alternativas existen para minimizar los riesgos que pueda traer consigo la exclusión del Programa de Protección. De manera que se evite una eventual consumación fatal de las amenazas contra el protegido o su familia.

En síntesis, se debe explicar por qué, a pesar de afrontar un posible riesgo excepcional por su colaboración con la administración de justicia, este puede ser contrarrestado por el propio interesado sin que sea necesaria la intervención del Programa de Protección y Asistencia en el futuro.

7. Explicar por qué no existe vulneración del derecho al debido proceso, pues primero se constató el obrar irregular del titular o excluido, y con fundamento en el injustificado incumplimiento de las obligaciones que le eran propias, se probó objetiva y subjetivamente una causal para su exclusión.

8. Para que exista una revaluación de su riesgo en el futuro, el funcionario deberá informar al Programa sobre hechos nuevos. En caso de que lleguen a ser beneficiados con dicha protección nuevamente, deberán acatar todas y cada una de las normas, obligaciones y recomendaciones de seguridad impuestas por el Programa de Protección y Asistencia, así como de abstenerse de asumir conductas que pongan en peligro su vida o la de su núcleo familiar.

9. Resaltar que, al ingresar al programa, las personas protegidas deben ser instruidas en sus derechos, obligaciones y en las consecuencias que acarrea el incumplimiento de los compromisos pactados. Ello toda vez que el Programa de Protección no es un sistema asistencial que entrega una serie de beneficios sin pedir a cambio comportamientos que en el futuro puedan afectar la seguridad, no solo de los interesados sino de otros protegidos o los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación encargados de su cuidado.

10. Explicar que, si bien el protegido pudo haber intervenido en algún proceso penal o lo está haciendo en el momento de su exclusión, ello no indica que deba violar conscientemente los compromisos adquiridos con el Programa de Protección y Asistencia. No solo porque es una persona madura intelectualmente, capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, sino porque sus actuaciones son libres y voluntarias. Por ello, debe ser coherente al afrontar las consecuencias de sus actos.

11. Explicar:

a) Que la falta del protegido afecta gravemente las medidas protectivas implementadas en su caso particular;

b) Estudiar la gravedad de la falta;

c) Ponderar las implicaciones que tiene en el programa y en el proceso penal;

d) Señalar las razones por las que se debe excluir y no encauzar la conducta del protegido.

## CAPÍTULO V

### Protección a servidores de la Fiscalía General de la Nación

Artículo 148. *Solicitud de protección.* Pueden elevar la petición de protección de un servidor de la Fiscalía General de la Nación las siguientes personas:

a) El interesado;

b) El jefe inmediato.

Parágrafo. El servidor de la Fiscalía General de la Nación no se vinculará al Programa de Protección y Asistencia de la manera en que lo hacen las víctimas o testigos. No obstante, el Director Nacional de Protección y Asistencia o el Fiscal General de la Nación, en coordinación con las demás dependencias de la Fiscalía General de la Nación, podrá tomar medidas para garantizar la vida e integridad personal del servidor.

Artículo 149. *Contenido de la solicitud.* La solicitud de protección al Programa de Protección y Asistencia debe contener:

a) Nombre del servidor candidato a protección;

b) Identificación de la investigación penal o proceso en el cual interviene el servidor candidato a protección;

c) Etapa actual del proceso;

d) Hechos que motivan la solicitud;

e) Finalidad de la solicitud;

f) Datos de ubicación de la persona postulada, en caso que sea el jefe inmediato quien realiza la solicitud;

g) Nombre completo, identificación y datos de ubicación de la persona que realiza la solicitud;

h) Copia de la denuncia penal realizada por el servidor, por los hechos que motivan la solicitud de protección.

Parágrafo. En caso que la solicitud carezca de uno o más requisitos la Dirección Nacional de Protección y Asistencia debe requerir al solicitante para que en el término de los tres (3) días hábiles siguientes suministre la información faltante.

Artículo 150. *Verificación probatoria.* Recibida la petición en debida forma dentro de los dos (2) días siguientes, el Director Nacional de Protección y Asistencia designará un servidor de la dependencia librando misión de trabajo para realizar la evaluación técnica de amenaza y riesgo.

La evaluación técnica de amenaza y riesgo deberá realizarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la misión por el responsable de la unidad o área correspondiente o el líder regional respectivo.

Artículo 151. *Término para análisis de riesgo.* Las medidas se determinarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del Informe de policía judicial de evaluación técnica de amenaza y riesgo, debidamente suscrita por el servidor, el responsable de la unidad o área correspondiente y el líder regional respectivo.



Artículo 152. *Autoridad competente para decidir.* La autoridad facultada para tomar la decisión relacionada con las medidas protectivas de los servidores de la Fiscalía General de la Nación es el Director Nacional de Protección y Asistencia o el Fiscal General de la Nación.

Artículo 153. *Decisión de fondo.* La decisión del Director Nacional de Protección y Asistencia se comunicará personalmente al beneficiario, la cual(s) referirá a la(s) medida(s) de protección considerada(s) precedente(s).

En el acta se determinará la medida y las obligaciones que debe cumplir el servidor beneficiario de la protección.

Artículo 154. *Protección física.* En caso que el riesgo o amenaza sea extremo se implementará un esquema de seguridad, a fin de proteger la vida e integridad personal del mismo y de sus familiares de acuerdo a las pautas de la evaluación técnica de amenaza y riesgo.

En este caso, el esquema de protección será definido por el Director Nacional de Protección y Asistencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y conforme a lo establecido en la Resolución número 1704 del 1 de octubre de 2014.

Artículo 155. *Cambio de lugar de trabajo.* En caso de que el riesgo sea extraordinario, se hará un cambio de domicilio, el cual se entiende como el cambio de lugar de trabajo del servidor ubicado en el interior de la Fiscalía General de la Nación, hacia otro lugar del país, alejado de la zona de riesgo. Este trámite se hará a través de la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión y demás dependencias que corresponda.

Parágrafo 1°. En caso de ser necesario, la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión apoyará económicamente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, al servidor respecto a los gastos de su traslado junto con su núcleo familiar.

Artículo 156. *Reasignación del proceso.* En caso de que el riesgo sea extraordinario y la evaluación técnica de amenaza y riesgo lo aconseje, se reasignará la investigación o proceso penal, ya sea de Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004, en cabeza de otro funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Este trámite se hará a través de la dependencia competente.

Artículo 157. *Actuación mínima en todos los casos.* En cualquier evento, y cuando la evaluación técnica de amenaza y riesgo lo determine, se asesorará al funcionario candidato a protección en la toma de medidas de autoprotección y se comunicará a la Policía Nacional para que brinde la protección necesaria para el funcionario y su núcleo familiar, al tenor del artículo 218 de la Constitución Nacional.

Artículo 158. *Protección al Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación y altos directivos de la entidad.* La Dirección Nacional de Protección y Asistencia, además de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, deberá establecer, los esquemas al Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal General de la Nación y sus familias, los Directores Nacionales y Seccionales.

Estos esquemas se sustentarán en el cargo o función del servidor público evaluado, con base en lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la normatividad vigente.

Artículo 159. *Autonomía en la protección del Fiscal General de la Nación y Vicefiscal General de la Nación.* El Director Nacional de Protección y Asistencia deberá tener en cuenta la normatividad que regula los esquemas de seguridad del Fiscal General de la Nación y Vicefiscal General de la Nación cuando estos se separen de sus cargos.

Parágrafo. La normatividad vigente no será obstáculo para ampliar la seguridad establecida para el servidor o su núcleo familiar, separado de sus funciones como Fiscal General de la Nación o Vicefiscal General de la Nación, si se desprende esa necesidad de la Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo, en atención a los deberes constitucionales y legales del Director Nacional.

Se procurará minimizar los riesgos derivados de sus condiciones como ex Fiscales Generales o ex Vicefiscales, de acuerdo con lo regulado en las resoluciones correspondientes y en este marco normativo.

#### CAPÍTULO VI Protección inmediata

Artículo 160. *Solicitud.* El fiscal de conocimiento es el único que puede postular a una persona para que reciba protección inmediata mientras se realiza el trámite ordinario de incorporación al Programa de Protección y Asistencia.

En caso que se trate de víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, no se requerirá de la solicitud del fiscal ni tampoco de una denuncia penal.

El trámite de Protección Inmediata no suprime el trámite ordinario de incorporación al Programa de Protección y Asistencia el cual se hará paralelamente en la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo. En caso que se reciba una solicitud de protección antes de la denuncia del hecho de violencia sexual, se brindará una medida de protección idónea que garantice unas condiciones de seguridad y confianza para formular la denuncia. Esta actuación se hará una vez los funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia tengan contacto con la víctima, así se agilizará la presentación de la denuncia.

Artículo 161. *Contenido de la solicitud.* El fiscal de conocimiento deberá suscribir el Formato de Solicitud de Protección el cual debe contener:

- a) Nombre de la persona postulada;
- b) Identificación de la investigación penal o proceso en el cual interviene la persona postulada;
- c) Calidad de la persona postulada dentro de la investigación o proceso penal;
- d) Fiscalía o despacho judicial que conoce de la investigación o proceso penal;
- e) Etapa actual del proceso;
- f) Hechos que motivan la solicitud de protección inmediata;

g) Datos que identifiquen la relevancia de la intervención del candidato a protección dentro de la investigación o proceso penal;

h) Medidas procesales de fondo que se tomarán o se han tomado con base en las declaraciones o testimonios del candidato a protección;

i) Datos de ubicación de la persona postulada a la protección inmediata;

j) Nombre y cargo del fiscal de conocimiento que realiza la solicitud;

k) Determinación de si el candidato o candidata a protección es víctima de violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

Parágrafo 1°. En caso que la solicitud carezca de uno o más requisitos la Dirección Nacional de Protección y Asistencia debe requerir al solicitante para que en el término de tres (3) horas hábiles siguientes suministre la información faltante.

Parágrafo 2°. Si la solicitud es diligenciada por una víctima de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, será opcional aportar la información requerida por los literales b), c), d), e), g), h), j).

En caso de requerirse más información, esta se solicitará después de decidir la protección inmediata, así se adoptará la medida de protección más idónea, en atención a un enfoque diferencial y con las medidas previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008 y Ley 1719 de 2014, respectivamente.

Artículo 162. *Trámite.* Una vez recibido en debida forma el Formato de Solicitud de Protección, se valorará la naturaleza de los hechos investigados y se considerará, preliminarmente, si la situación del candidato a protección reúne la característica que configuran el riesgo extremo.

Para la víctima de violencia sexual con ocasión del conflicto armado el riesgo se presume para decidir la protección inmediata, así como para su núcleo familiar por extensión.

Artículo 163. *Autoridad competente para decidir sobre la protección inmediata.* La autoridad facultada para tomar la decisión relacionada con la protección inmediata de cualquier persona postulada en los términos de esta normatividad es el Director Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 164. *Término.* La Protección Inmediata se decidirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del Formato de Solicitud de Protección debidamente suscrito por el fiscal de conocimiento, juez o magistrado.

Artículo 165. *Decisión.* Una vez se considere precedente la Protección Inmediata se requerirá al fiscal de conocimiento y a la policía judicial asignada al proceso a tomar las medidas necesarias de protección en favor del candidato a protección, mientras el Programa realiza los trámites de incorporación ordinaria.

En caso que se considere improcedente la protección inmediata se informará de ello al solicitante. No obstante, se seguirá el trámite normal de incorporación del candidato a protección al Programa de Protección y Asistencia.

Parágrafo. Al momento de decidir la protección inmediata para víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, se tendrán en cuenta las dispuestas en la Ley 1257 de 2008 y 1719 de 2014. De modo que se garantice la atención psicosocial permanente, si ellas deciden aceptar la atención.

#### CAPÍTULO VII Protección condicionada

Artículo 166. *Solicitud.* El único que puede postular a una persona para que reciba protección condicionada es el fiscal de conocimiento, quien a su vez se compromete a impulsar la investigación o proceso penal en el término que dure la protección condicionada.

Artículo 167. *Contenido de la solicitud:* El fiscal deberá suscribir el Formato de Solicitud de Protección, el cual debe contener:

a) Nombre de la persona postulada;

b) Identificación de la investigación penal o proceso en el cual interviene la persona postulada;

c) Calidad de la persona postulada dentro de la investigación o proceso penal;

d) Fiscalía que conoce la investigación o proceso penal;

e) Etapa actual del proceso;

f) Hechos que motivan la solicitud de protección condicionada;

g) Datos que identifiquen la relevancia de la intervención del candidato a protección dentro de la investigación o proceso penal;

h) Medidas procesales de fondo que se tomarán con base en las declaraciones o testimonios del candidato a protección en contra de los presuntos implicados. Estas medidas deben efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la solicitud;

i) Definición de la Protección Condicionada;

j) Compromiso de informar a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia cuando se tomen las medidas procesales de fondo señaladas;

k) Datos de ubicación de la persona postulada a la protección condicionada;

l) Compromiso del fiscal de impulsar la investigación o proceso penal en las medidas procesales de fondo dentro del término de la protección condicionada;

m) Nombre y cargo del fiscal que realiza la solicitud.

Parágrafo. En caso que la solicitud carezca de uno o más requisitos la Dirección Nacional de Protección y Asistencia debe requerir al solicitante para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes suministre la información faltante.

Artículo 168. *Trámite:* Cuando se reciba el Formato de Solicitud de Protección debidamente, se valorará la naturaleza de los hechos investigados y se considerará preliminarmente,

si la situación del candidato a protección reúne las características que configuran el riesgo extremo o extraordinario.

Artículo 169. *Autoridad competente para decidir sobre la protección condicionada.* El Director Nacional de Protección y Asistencia es la autoridad facultada para tomar la decisión sobre la protección condicionada de cualquier persona postulada, en los términos de esta normatividad.

Parágrafo. Lo que no se regule expresamente en lo establecido para la incorporación, se aplicará en lo que se regule expresamente.

Artículo 170. *Temporalidad.* La Protección Condicionada tendrá una duración de máximo tres (3) meses calendario, prorrogable hasta por un término similar.

En caso de que se cumpla el tiempo y el Fiscal de Conocimiento no obtenga los resultados esperados o no haya tomado todas las medidas procesales de fondo que indicó en su solicitud, el funcionario podrá solicitar la incorporación de la persona postulada al Programa de Protección y Asistencia, caso en el cual se cumplirá con el trámite correspondiente en este cuerpo normativo.

Parágrafo. El hecho de otorgar protección condicionada a una persona no necesariamente obliga a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia a vincularla ordinariamente al Programa, ya que esta medida es temporal y sujeta a condición.

La incorporación regular al Programa de Protección y Asistencia se dará si se cumple con los requisitos establecidos en esta resolución. Todos deben cumplirse sin excepción.

Artículo 171. *Control periódico.* El Director Nacional de Protección y Asistencia designará un funcionario, con conocimientos en derecho penal y derecho procesal penal, para que verifique mensualmente si las medidas procesales de fondo señaladas por el fiscal, se tomaron, de modo que se pueda terminar con la protección condicionada.

Artículo 172. *Obligaciones especiales del fiscal de conocimiento.* El fiscal de conocimiento deberá priorizar el caso en el cual se ejecuta la protección condicionada y tomará las medidas procesales de fondo en el término establecido, so pena de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar por el incumplimiento de este deber constitucional y legal, y la causación onerosa de gastos a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

## CAPÍTULO VIII

### Policia Judicial

Artículo 173. *Destino de la misión de trabajo.* Las misiones de trabajo tendrán como destino al responsable de la unidad respectiva o quien haga sus veces, así como al responsable de la unidad en cada una de las regionales.

A su vez, el responsable distribuirá de manera equitativa las misiones entre los funcionarios a su cargo. El funcionario firmará el respectivo recibido con fecha y hora.

Parágrafo. El responsable de la unidad, así como los líderes en los distintos grupos de trabajo, será nombrado por el Director Nacional de Protección y Asistencia con base en su conocimiento, entrenamiento o capacitación y experiencia, a fin de que garantice la objetividad, imparcialidad y transparencia dentro de todas las áreas de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 174. *Término para cumplir con la misión de trabajo.* El término para cumplir la misión de trabajo comenzará a contar a partir del día siguiente a la fecha de recepción por parte del responsable nacional o regional de conformidad con el artículo anterior.

Parágrafo. Los términos establecidos en este cuerpo normativo que tengan relación con la actividad regulada en este capítulo son perentorios e improrrogables, y su violación por el funcionario será causal de mala conducta.

Artículo 175. *Cumplimiento de la misión de trabajo.* El cumplimiento de las misiones de trabajo se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Es deber del funcionario a cargo de la Misión de Trabajo identificar la fecha máxima de entrega del informe para establecer las actividades prioritarias y solicitar los apoyos correspondientes;

b) El funcionario a cargo de la Misión de Trabajo deberá identificar al solicitante con el propósito de localizar procesal, territorial y socialmente al candidato a protección;

c) Las misiones de trabajo serán ejecutadas por funcionarios asignados a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, quienes basarán su estudio en la normatividad vigente;

d) Cuando se ordene la evaluación o reevaluación de un caso, en cualquier evento el servidor asignado no será el encargado de realizar el correspondiente seguimiento a las medidas implementadas con el beneficiario y al proceso judicial en el que interviene.

El servidor encargado del seguimiento puede ser cambiado periódicamente para garantizar la imparcialidad, objetividad y distancia con el protegido.

Parágrafo. Cualquier comportamiento que viole los anteriores deberes será causal de mala conducta;

e) Todos los funcionarios deberán guardar reserva de los casos a cargo. Así mismo, tienen la obligación de comunicar las novedades al Director Nacional de Protección y Asistencia únicamente;

f) Si en el desarrollo de la misión de trabajo deben efectuarse actividades esenciales en otra zona, el evaluador podrá solicitar el apoyo necesario a la unidad regional correspondiente. Esta circunstancia no afecta el deber de cumplir con el término otorgado en la misión de trabajo.

Artículo 176. *Información base para la evaluación técnica de amenaza y riesgo.* El evaluador deberá indagar sobre los siguientes aspectos iniciales para realizar la evaluación técnica de amenaza y riesgo:

a) Solicitudes anteriores de protección del candidato a protección. En caso de que existan, es necesario hacer una relación detallada de aquellos trámites y sus correspondientes evaluaciones técnicas de amenaza y riesgo y medidas implementadas, en caso de existir;

b) Consulta en base de datos sobre antecedentes penales e investigaciones penales que cursen contra cada uno de los que serían vinculados al programa: candidato a protección y familiares;

c) Realizar una entrevista al Fiscal de Conocimiento y realizar una inspección al proceso o procesos donde interviene la persona postulada para verificar si su colaboración con la justicia es relevante y eficaz.

Esta entrevista se realiza sin perjuicio del concepto emitido por el Fiscal de Conocimiento dirigido al Director Nacional de Protección y Asistencia;

d) Realizar una entrevista al funcionario de policía judicial que apoya la investigación o proceso penal donde interviene el candidato a protección;

e) Realizar una entrevista al candidato a protección y a su núcleo familiar con el propósito de obtener la mayor cantidad de información posible relacionada con lo dispuesto en este cuerpo normativo.

En esta entrevista, se deberá brindar información al candidato de la naturaleza del Programa y de sus obligaciones, en caso de ser vinculado al Programa de Protección y Asistencia.

Artículo 177. *Verificación de la información.* Una vez obtenida la información base, el evaluador desplegará todas las actividades necesarias para verificar la información reunida con el fin de confirmarla o desvirtuarla. De esa manera, se podrá realizar un análisis sobre circunstancias o hechos concretos, claros, reales y objetivos.

Artículo 178. *Seguimiento a los casos.* Existen las siguientes clases de seguimiento a casos:

a) **Seguimiento en casos de protección condicionada:** El seguimiento al proceso o investigación penal se hará mensualmente con el objeto de verificar que las medidas procesales de fondo se tomen de acuerdo con la solicitud, y así, verificar el cumplimiento de los fines de la protección;

b) **Seguimiento en casos de incorporación al programa:** El seguimiento al proceso o investigación penal se hará trimestralmente o cuando lo considere el Director Nacional de Protección y Asistencia con el propósito de verificar el cumplimiento de alguna causal de desvinculación o exclusión.

Parágrafo 1°. El deber de seguimiento por parte del servidor se mantendrá sin perjuicio de que el Director Nacional de Protección y Asistencia nombre otro funcionario para que realice una inspección de la investigación o proceso penal que motivó la incorporación del beneficiario con una finalidad específica.

Parágrafo 2°. Sobre este seguimiento, se deberá realizar el respectivo informe para que haga parte del expediente y se tomen las medidas necesarias y procedentes.

Artículo 179. *Evaluación técnica de amenaza y riesgo a servidores de la Fiscalía General de la Nación.* Se utilizará la misma metodología. Sin embargo, tendrán en cuenta las prescripciones especiales para los funcionarios del ente investigador y acusador.

Artículo 180. *Registros electrónicos.* Todas las actuaciones realizadas por los funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia donde se deba tener contacto con los protegidos deberá consignarse en audio y video digital para su posterior valoración del Director Nacional de Protección y Asistencia del Programa.

Estos videos y audios harán parte integral de la carpeta y su finalidad es la protección del funcionario de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia así como la complementación probatoria de los informes dirigidos al Director Nacional de Protección y Asistencia.

Parágrafo. El cumplimiento de este deber estará sometido a la disponibilidad presupuestal y técnica de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 181. *Depósito de bienes.* Todos los bienes entregados por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia a los protegidos para su uso deberán relacionarse en un inventario y ser fijados fotográficamente a fin de garantizar su posterior identificación.

Este inventario será suscrito por el agente a cargo y el beneficiario impondrá en él su firma y huella. Este último recibirá los bienes en calidad de depósito gratuito.

El inventario será el documento que guíe la entrega de bienes al beneficiario y su posterior devolución al Programa de Protección y Asistencia. Por ello, es necesario y obligatorio transcribir la presente norma en aquél documento.

Parágrafo. El mal uso, la enajenación o la destrucción de los bienes por acción o por omisión del depositario acarrearán la respectiva investigación penal por abuso de confianza y el deber de pagar dichos bienes a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Artículo 182. *Prohibición.* Cualquier relación sentimental, civil o comercial de un funcionario de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia con una persona protegida será causal de mala conducta y será motivo para una investigación disciplinaria en contra del funcionario así como el relevo de sus funciones con esa persona protegida y su núcleo familiar, así como lo establecido en el Decreto-ley 20 de 2014.

Parágrafo. Para verificar lo anterior, en cualquier momento el Director Nacional de Protección y Asistencia puede designar un servidor para que verifique estas circunstancias. A su vez, deberá obrar con objetividad e informar por escrito el resultado de su actividad.

La persona designada estará sujeta a las sanciones disciplinarias y penales que haya lugar en caso de que falte a la verdad u omita total o parcialmente la verdad cuando realice el informe respectivo.

## SEGUNDA PARTE

### PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY 975 DE 2005 JUSTICIA Y PAZ

Artículo 183. *Complementariedad.* Además de las normas que regulan al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005 Justicia y Paz al interior de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia, podrán aplicarse las disposiciones de esta resolución que le sean complementarias y no generen ninguna incompatibilidad normativa.



LIBRO TERCERO  
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 184. *Vigencia.* La presente resolución deroga la Resolución número 0-5101 de agosto 15 de 2008, expedida por el Fiscal General de la Nación y comienza a regir a partir de la fecha de su publicación.

Esta normatividad es de inmediato cumplimiento para los casos nuevos de protección que estén en evaluación de riesgo o sobre los que no se haya decidido de manera definitiva su protección. Así mismo, para hechos no consolidados en los casos vigentes.

Parágrafo 1°. Los casos de protección que actualmente se encuentren vigentes en la Dirección Nacional de Protección y Asistencia deberán actualizarse o ajustarse en todo sentido a la presente normatividad para que las condiciones, obligaciones, causales de desvinculación y exclusión, etc., de los protegidos queden cobijadas con esta regulación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.  
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de marzo de 2016.  
El Fiscal General de la Nación,

*Eduardo Montealegre Lynett.*  
(C. F.).

**RESOLUCIÓN NÚMERO 0-1026 DE 2016**

(marzo 28)

*por medio de la cual se regula el procedimiento para la declaratoria de abandono de los bienes puestos a disposición del Fondo Especial de Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.*

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 4°, 5°, 6° y 13 de la Ley 1615 de 2013, artículo 4° numeral 19 del Decreto-ley 016 de 2014, y artículo 12 del Decreto número 696 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, a la propiedad privada le es inherente una función social y ecológica que implica obligaciones;

Que la Corte Constitucional ha manifestado en forma reiterada que el derecho de propiedad como función social, se halla vinculado a los principios de solidaridad y prevalencia del interés general (artículo 1° superior) e implica de su titular una contribución para la realización de los deberes sociales del Estado (artículo 2° ib.), trascendiendo de esta manera la esfera meramente individual<sup>1</sup>;

Que la Corte Constitucional ha reconocido la propiedad privada como un derecho relativo que encuentra sus límites en el interés general, por ejemplo, en Sentencia C-306 de 2013 consideró: *“En el derecho moderno, se reconoce la propiedad como un derecho relativo y no absoluto, como resultado de la evolución de principios de orden filosófico y político que han influido en el proceso de su consolidación jurídica, los cuales han contribuido a limitar en buena medida los atributos o poderes exorbitantes reconocidos a los propietarios. El carácter relativo y no absoluto del derecho de propiedad que ha sido reconocido por esta Corte en diferentes sentencias (C-428 de 1994 y T-431 de 1994), habilita al legislador y excepcionalmente a las autoridades administrativas para establecer restricciones a dicho derecho cuando medien razones de interés general que razonablemente las justifiquen. (Sentencia T-245 de 1997. M. P. Fabio Morón Díaz). El régimen de la propiedad privada en el nuevo orden constitucional se aleja decididamente de las tendencias individualistas del derecho, que únicamente lo tienen como fuente de prerrogativas jurídicas subjetivas, para inclinarse por la visión del derecho-deber, en la que su ejercicio solo se legitima cuando persigue la promoción del bienestar social”*;

Que conforme al artículo 82 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, una vez se decreta el comiso de bienes, estos pasan en forma definitiva a la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente;

Que de acuerdo al parágrafo del artículo 82 de la Ley 906 de 2004, para efectos del comiso se entiende por bienes todos los que sean susceptibles de valoración económica o sobre los cuales pueda recaer derecho de dominio, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los mismos;

Que el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal establece que todos los bienes y recursos que sean objeto de medidas con fines de comiso quedarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación para su administración de acuerdo con los sistemas que para tal efecto desarrolle el Fiscal General de la Nación;

Que no son susceptibles de administración por parte del Fondo Especial para la Administración de Bienes aquellos bienes que tienen carácter de elemento material probatorio y evidencia física, según lo establece el parágrafo del artículo 86 del Código de Procedimiento Penal;

Que el parágrafo 2° del artículo 86 de la Ley 906 de 2004 establece que los bienes y recursos afectados en procesos penales tramitados en vigencia de leyes anteriores a la Ley 906 de 2004, que se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier organismo que ejerza funciones de policía judicial al momento de entrar en vigencia la presente ley, deberán incorporarse al Fondo de que trata este artículo e inscribirse en el Registro Público Nacional de Bienes;

Que mediante la Ley 1615 de 2013 se creó el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, organizándolo como un fondo-cuenta sin personería jurídica, de conformidad con las disposiciones presupuestales para los fondos especiales establecidas en el artículo 27 de la Ley 225 de 1995, artículos 11 y 30 del Decreto número 111 de 1996, las normas que las modifiquen o adicionen, y las disposiciones contenidas en la Ley 1615 de 2013;

Que la Ley 1615 de 2013 señala, como funciones generales del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, entre otras, las de administrar los bienes de acuerdo con las normas generales y los distintos sistemas de administración, ejercer el seguimiento, evaluación y control de la administración de bienes y tomar las medidas correctivas a que haya lugar para estos efectos;

Que el artículo 6° de la Ley 1615 de 2013 establece la clasificación de los bienes que administra el Fondo Especial para la Administración de Bienes;

Que los bienes, dineros y recursos que ingresen de manera provisional o definitiva a la administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación deben ser administrados, conforme a los sistemas de administración que desarrolle el Fiscal General de la Nación de acuerdo con la normativa civil y comercial, tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 1615 de 2013, norma que además hace un listado enunciativo de los diferentes sistemas de administración que puede aplicar el mencionado Fondo;

Que los recursos y bienes del Fondo Especial para la Administración de Bienes pueden destinarse a la financiación de los gastos y costos que genera la administración y mantenimiento de los bienes, y para apoyar a la Fiscalía General de la Nación en proyectos de inversión, tales como infraestructura, tecnología y mobiliario, entre otros, conforme a lo preceptuado en el artículo 10 de la mencionada ley;

Que mediante la Resolución número 01296 del 22 de julio de 2015, se reglamentó el funcionamiento del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación y se establecieron lineamientos para su gestión contractual;

Que conforme al literal “e” del ordinal 1° del artículo 6° de la Ley 1615 de 2013, los bienes que sean declarados administrativamente abandonados por el Fondo Especial para la Administración de Bienes, previo agotamiento del procedimiento, ingresan a su patrimonio;

Que conforme al artículo 89 de la Ley 906 de 2004, una vez se ordene la devolución del bien o recurso, se comunicará a quien tenga derecho a recibirlos para que los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión que así lo determine y, transcurrido el término anterior sin que los bienes sean reclamados, se dejarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación;

Que el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 establece que los bienes y recursos sobre los cuales se ordenó su restitución o devolución por autoridad competente, que no fueron reclamados y aquellos respecto de los que se desconoce su titular, poseedor o tenedor legítimo, deberán seguir cumpliendo la función social que emana de la propiedad;

Que igualmente, el artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 establece que los 15 días previstos en el artículo 89 de la Ley 906 de 2004, sin que los bienes y recursos hubiesen sido reclamados, el Fondo certificará tal circunstancia y dará inicio a la actuación administrativa con miras a declarar el abandono del mismo en favor de la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación;

Que el acto administrativo que da inicio al procedimiento de abandono deberá ser publicado en diario de amplia circulación, de conformidad con el inciso 3° del artículo 13 de la Ley 1615 de 2013 y, en caso de que el titular no reclame el bien dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación, el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación declarará mediante acto administrativo motivado el abandono del bien, conforme el reglamento que se expida para el efecto;

Que mediante el Decreto número 696 del 8 de abril de 2014 se reglamentaron aspectos de la Ley 1615 de 2013, entre ellos, la declaratoria de abandono de bienes puestos a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Decreto número 696 de 2014, en los eventos en que se conozca el titular del bien, además de la publicación del acto administrativo que ordena el inicio del procedimiento de abandono en un diario de amplia circulación, este deberá ser notificado al titular del bien conforme al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;

Que conforme a lo preceptuado en el artículo 13 del Decreto número 696 de 2014, en caso de que se evidencie que con la decisión que se adopte respecto al abandono de los bienes, se puedan afectar directamente terceras personas, se les debe comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma, con el fin de que puedan intervenir en la actuación y hacer valer sus derechos;

Que el artículo 14 del Decreto número 696 de 2014 dispone que durante la actuación administrativa se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado;

Que a voces del artículo 15 del mencionado decreto, si el titular del bien no reclama el mismo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del acto de inicio del procedimiento se decretará mediante acto administrativo motivado, el abandono del bien a favor de la Fiscalía a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB);

Que conforme a los artículos 4° y 11 de la Ley 1615 de 2013 corresponde al Fiscal General de la Nación desarrollar los sistemas de administración, la organización y funcionamiento del Fondo Especial para la Administración de Bienes, así como delegar las competencias que sean pertinentes;

Que se hace necesario reglamentar el proceso administrativo de declaratoria de abandono de bienes puestos a disposición del Fondo de Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, en aquellos aspectos no regulados en la Ley 1615 de 2013 y el Decreto número 696 de 2014, con el fin de definir las actividades, procedimientos, responsables, competencias y términos correspondientes;

<sup>1</sup> Sentencia C 306 de 2013.

Que el proceso de abandono debe responder a los principios que guían la función administrativa, tales como la celeridad, la economía, la moralidad, la transparencia, la publicidad, la igualdad, la eficiencia y la efectividad;

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

## CAPÍTULO I

### Disposiciones generales

Artículo 1°. *Objeto.* La presente resolución tiene por objeto definir los requisitos, competencias, términos y elementos generales del proceso de abandono de bienes puestos a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, en adelante FEAB.

Artículo 2°. *Definición de Bienes.* Para efectos de la presente resolución, se entienden como bienes, todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica o sobre los cuales pueda recaer derecho de dominio, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los mismos.

Artículo 3°. *Campo de aplicación.* La presente resolución aplica a todos los bienes puestos a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 4°. *Características de los bienes.* El FEAB podrá iniciar procedimiento de abandono sobre los bienes puestos a disposición del FEAB y que reúnan alguna de las siguientes características:

- a) Bienes sobre los cuales se haya ordenado su devolución por autoridad competente;
- b) Bienes sobre los cuales se desconozca su titular, poseedor o tenedor legítimo.

Artículo 5°. *Competencia.* Conforme a lo establecido en la Resolución número 01296 del 22 de julio de 2015, es competencia de los Subdirectores Seccionales de Apoyo a la Gestión y el Subdirector Nacional de Bienes, aplicar los diferentes sistemas de administración sobre los bienes administrados por el FEAB según la jurisdicción allí establecida, sin perjuicio de la competencia que le asiste a la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión sobre aquellos bienes que su valor supere los 1.000 smlmv y la competencia preferente que tiene para la aplicación de sistemas de administración sobre todos los bienes administrados por el FEAB.

En concordancia con lo anterior, corresponde a los Subdirectores Seccionales de Apoyo a la Gestión tramitar la totalidad del proceso de abandono sobre los bienes del FEAB ubicados geográficamente en el territorio donde ejercen sus funciones administrativas, cuyo valor sea inferior a 1.000 smlmv.

El Subdirector Nacional de Bienes adelantará el proceso de abandono sobre los bienes o recursos ubicados en Bogotá, D. C. afectados en procesos penales adelantados por el Despacho del Fiscal General de la Nación, el Despacho del Vicefiscal General de la Nación, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Fiscalías Nacionales y las Direcciones de Fiscalías Nacionales Especializadas. Lo anterior, sin perjuicio de que el Director del FEAB determine una competencia diferente sobre este asunto particular.

La Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión tiene competencia para adelantar el proceso de abandono sobre los bienes cuyo valor sea igual o superior a 1.000 smlmv, y competencia preferente para adelantar el proceso de abandono sobre cualquier bien puesto a disposición del FEAB a nivel nacional.

Artículo 6°. *Pruebas.* Durante la actuación administrativa se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado, en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CAPÍTULO II

### Actuación administrativa preliminar

Artículo 7°. *Expediente.* Deberá conformarse un expediente en orden cronológico que contenga la totalidad de los soportes del proceso de abandono del bien, en caso de que bajo un mismo procedimiento se tramite el abandono de varios bienes podrá conformarse un único expediente de abandono.

Artículo 8°. *Actividades preliminares.* El inicio del proceso de abandono se realizará cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

- a) El FEAB es enterado, por el interesado, la autoridad competente o cualquier medio, de la orden de devolución de un bien afectado dentro de un proceso penal, allegándose copia de la decisión correspondiente;
- b) El FEAB constata qué bienes bajo su custodia no tienen titular, poseedor o tenedor legítimo conocido.

Artículo 9°. En el evento descrito en el literal “a” del artículo 8°, los servidores competentes para adelantar el proceso de abandono deberán realizar un informe sucinto sobre la descripción y condiciones físicas del bien o bienes, el tiempo aproximado que el bien ha estado a disposición del FEAB, descripción de la orden de devolución, y registro fotográfico y/o filmico del bien.

Artículo 10. Para el evento descrito en el literal “b” del artículo 8°, los servidores competentes para adelantar el proceso de abandono deberán realizar las siguientes actividades:

- a) Realizar un informe sucinto sobre la descripción y condiciones físicas del bien o bienes, las gestiones adelantadas para determinar el origen y titular del bien, el tiempo aproximado que el bien ha estado en custodia del FEAB y registro fotográfico y/o filmico del mismo;
- b) Certificar que se desconoce el titular poseedor o tenedor legítimo del bien.

## CAPÍTULO III

### Apertura procedimiento de abandono

Artículo 11. *Acto de apertura.* Una vez sea verificado por el FEAB que han transcurrido más de quince (15) días hábiles desde que se surtió la comunicación de la orden de devolución

al interesado o expedida la certificación de que trata el artículo 10, el servidor competente proferirá acto administrativo motivado dando apertura al proceso de abandono del bien.

El acto administrativo deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:

- a) Reseña de las normas en que se funda el proceso de abandono;
- b) Explicación de las circunstancias de hecho que sustentan el inicio del procedimiento;
- c) Identificación del bien o de los bienes objeto de la decisión;
- d) Orden de notificación personal a los interesados, cuando se trate de propietarios, poseedores o tenedores legítimos conocidos, conforme a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
- e) Orden de publicación en diario de circulación nacional, por un domingo, la cual se realizará una vez surtidas las notificaciones o comunicaciones a personas determinas si hay lugar a ello;
- f) Orden de comunicación a los terceros interesados, en caso de que el FEAB identifique que hay personas que pueden ver afectados sus derechos;
- g) Información sobre la dependencia, correo o medio de contacto, a través del cual los interesados podrán ejercer su derecho de contradicción y defensa.

Artículo 12. *Reclamación.* Si dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del acto de apertura o las notificaciones correspondientes, se presenta cualquier persona a reclamar el bien, el FEAB deberá estudiar la reclamación o solicitud de devolución, a la luz de los medios de prueba idóneos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las demás normas aplicables, para acreditar el derecho que aduce el reclamante.

El escrito de reclamación deberá contener al menos el nombre e identificación del reclamante, las razones de hecho y de derecho que justifiquen su petición, las pruebas que pretenda hacer valer, y la dirección donde podrá ser notificado. Del mismo modo, si pretende que se le exonere de los gastos de bodegaje, custodia, administración derivados de no haber reclamado oportunamente el bien, deberá demostrar las razones que justifiquen convincentemente la dilación.

Si al proceso concurren dos o más personas alegando derechos sobre el bien, de los respectivos escritos se correrá traslado a la contraparte por el término de tres (3) días.

La autoridad correspondiente decretará las pruebas solicitadas, en cuanto sean lícitas, conducentes y pertinentes, y las que de oficio el órgano instructor considere convenientes.

Parágrafo 1°. Verificada la información se procederá a la entrega del bien en el estado en que se encuentre conforme al numeral 1 del artículo 11 del Decreto número 696 de 2014, levantando el acta de entrega respectiva que será suscrita por las partes intervinientes. En ella se dejará constancia de que la decisión no concede al compareciente ningún derecho del que no sea titular y que la restitución del bien solamente pretende restablecer el statu quo existente al momento en que se judicializó el bien.

Parágrafo 2°. Si el interesado no acreditó con suficiencia las razones que justificaran la demora en reclamar el bien, se liquidarán los gastos de bodegaje, custodia, administración a su cargo.

Parágrafo 3°. Si el reclamante no demuestra el derecho que aduce o si este no implica la devolución del bien, así lo dispondrá el órgano instructor al resolver el abandono del mismo.

Parágrafo 4°. Si dentro del mismo término el legítimo propietario manifiesta formalmente, sin objeción de terceros interesados, su falta de interés sobre el bien, se procederá a tomar la correspondiente decisión de manera inmediata.

## CAPÍTULO IV

### Decisión

Artículo 13. *Acto de declaratoria de abandono.* Transcurridos quince (15) días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del acto de apertura y surtidas las notificaciones que correspondan, sin que se hayan presentado interesados o sin que estos hubiesen logrado demostrar el derecho que reclaman, el servidor competente declarará, mediante acto administrativo motivado, el abandono del bien a favor de la Fiscalía a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), en un término máximo de 10 días hábiles so pena de las acciones disciplinarias a que haya lugar.

Parágrafo. La declaratoria de abandono deberá notificarse a los intervinientes, propietarios, poseedores o tenedores legítimos conocidos, conforme a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En caso de que el FEAB identifique que existen terceras personas que pueden ver afectados sus derechos, deberá comunicársele el acto de declaratoria de abandono.

El acto de declaratoria de abandono deberá publicarse en la página web de la Fiscalía, en el vínculo que se creará para tal efecto. Del mismo se tomará nota en el Registro Público de Bienes del FEAB.

Artículo 14. *Recursos.* Contra el acto administrativo que declare el abandono del bien, procederá únicamente el recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y así se advertirá en la decisión correspondiente.

Artículo 15. *Inscripción.* En firme el acto administrativo que declara el abandono, deberá hacerse la anotación de la propiedad en la oficina de instrumentos públicos correspondiente.

## CAPÍTULO VI

### Disposiciones finales

Artículo 16. *Abandono y chatarrización de vehículos.* En caso de que, a juicio de los servidores competentes, los bienes que sean objeto de abandono deban ser chatarrizados, inmediatamente se declare el abandono deberá iniciarse el proceso correspondiente.

Artículo 17. Los asuntos no previstos en el presente reglamento podrán ser desarrollados por el Director del FEAB, y de manera supletoria se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Artículo 18. En lo pertinente, se aplicará el trámite de que trata esta resolución cuando por decisión de carácter jurisdiccional se ordene devolver bienes o recursos al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, la Sociedad de Activos Especiales o cualquier entidad pública, que se encuentren en poder del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía (FEAB) y aquellos se abstengan de reclamarlos oportunamente.

En este caso el expediente deberá contener copia de la decisión del Juez o del Fiscal, si es del caso, que ordenó la entrega a favor de esa entidad y copia de por lo menos dos requerimientos enviados a esa entidad con un intervalo no inferior a cinco (5) días para que procediera a reclamar los bienes o recursos de que se trate.

Artículo 19. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.  
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá -  
Zona Sur

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000800 DE 2015

(diciembre 17)

por la cual se establece la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-97023.

Exp. A.A. 126 de 2009

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO:

...

RESUELVE:

Artículo 1°. Déjese sin valor ni efectos jurídicos la anotación número 8 del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-97023, de conformidad con la parte motiva de este proveído, dejando constancia en el mismo sobre tal circunstancia y efectúense las salvedades de ley (arts. 59 y 60 Ley 1579 de 2012).

Corrójase la naturaleza jurídica del acto contenido en la anotación número 9 del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-97023, por compraventa de cosa ajena (Cód. 0604) y en personas que intervienen en el acto sustitúyase la X de titular de derecho real de dominio por la I de dominio incompleto, dejando constancia en el mismo sobre tal circunstancia y efectúense las salvedades de ley (art. 59 Ley 1579 de 2012).

Artículo 2°. Notifíquese personalmente la presente providencia a Basilio, Antonio, Alonso, Alicia, Juan, Alberto López Rodríguez, Basilio López Pinilla y Jaime Alfonso Rodríguez Villalobos; si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso y a terceros que no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia por una sola vez, en el **Diario Oficial** a costa de esta oficina o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados (arts. 67, 69 y 73 Ley 1437/2011).

Artículo 3°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, ante el Registrador Principal de esta Oficina (arts. 74, 76 Ley 1437/2011).

Artículo 4°. Una vez en firme la presente providencia, comuníquese y envíese copia a los siguientes despachos judiciales:

Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá, D. C., Ref.: Ejecutivo número 2009-01179 de Giovanni Gutiérrez Gómez contra Jaime Alfonso Rodríguez Villalobos y Luis Gerardo Rincón Sánchez.

Juzgado Cincuenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, D. C., Ref.: Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía número 2009-1853 de Norberto Español Vargas contra Félix Enoc Coronado Armero, Félix Coronado, Jaime Alfonso Rodríguez y Manuel Antonio Moreno Granados.

Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá, D. C., Ref.: Ejecutivo Singular número 2010-00383 de Faustino Guerrero Peña contra Jaime Alfonso Rodríguez Villalobos, Claudia Patricia Largo Becerra y Blanca Ruth Becerra.

Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá. Ref.: Proceso de Restitución de Inmueble Arrendado de Menor Cuantía número 2010-0808 de Constanza Isabel Rico Pabón contra María Camila Rojas Rondón y Jaime Alfonso Rodríguez.

Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá. Ref.: Ejecutivo Singular número 2010-01244 de Claudia Morales de Ortiz contra Jaime Alfonso Rodríguez Villalobos y Magda Yury Peñaloza Obando.

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Ref. Proceso Administrativo de Cobro Coactivo número 5689/2011 A. C. 180 Fase I, contra Jaime Alfonso Rodríguez Villalobos.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 5°. Una vez en firme la presente providencia, remítanse los turnos de documento número 2009-108593, 2010-22289, 2010-26788, 2010-41337, 2010-72606, 2011-21909, 2011-63845, 2015-7641 y 2015-49734 al funcionario calificador respectivo, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2015.

El Registrador Principal,

Édgar José Namén Ayub.

<sup>i</sup> Artículo 3° de la Ley 1579 de 2012. **Principios**. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral son los principios de:

a) **Rogación**. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa.

El Registrador de Instrumentos Públicos solo podrá hacer inscripciones de oficio cuando la ley lo autorice...()

d) **Legalidad**. Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su inscripción;

e) **Legitimación**. Los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, mientras no se demuestre lo contrario...()

Artículo 4°. **Actos, títulos y documentos sujetos al registro**. Están sujetos a registro:

a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles;

b) Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o administrativas que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad administrativa en los casos de ley;

c) Los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma de conformidad con la ley.

Artículo 8°. **Matrícula inmobiliaria**. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando...( )

Artículo 13. **Proceso de registro**. El proceso de registro de un título o documento se compone de la radicación, la calificación, la inscripción y la constancia de haberse ejecutado esta.

Artículo 16. **Calificación**. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su análisis jurídico, examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder al registro.

Artículo 20. **Inscripción**. Hecho el estudio sobre la pertinencia de la calificación del documento o título para su inscripción, se procederá a la anotación siguiendo con todo rigor el orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a inscribir, distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del radicador y la indicación del año con sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la fecha de la inscripción, la naturaleza del título, escritura, sentencia, oficio, resolución, entre otros, su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables.

El funcionario calificador señalará las inscripciones a que dé lugar. Si el título fuere complejo o contuviere varios actos, contratos o modalidades que deben ser registradas, se ordenarán las distintas inscripciones en el lugar correspondiente.

Artículo 22. **Inadmisibilidad del registro**. Si en la calificación del título o documento no se dan los presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, elaborando una nota devolutiva que señalará claramente los hechos y fundamentos de derecho que dieron origen a la devolución, informando los recursos que proceden conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique. Se dejará copia del título devuelto junto con copia de la nota devolutiva con la constancia de notificación, con destino al archivo de la Oficina de Registro.

Artículo 45. **Adulteración de información o realización de actos fraudulentos**. La adulteración de cualquier información referente al título de dominio presentado por parte del interesado, o la realización de actos fraudulentos orientados a la obtención de registros sobre propiedad, estarán sujetos a las previsiones contempladas en el parágrafo del artículo 32 de la Ley 387 de 1997 y del Código Penal o a las leyes que las modifiquen, adicionen o reformen, trámite que se llevará a cabo ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 49. **Finalidad del folio de matrícula**. El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. **Procedimiento para corregir errores**. Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: (...).

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

Artículo 60. **Recursos.** (...).

Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohíbe o es manifiestamente ilegal, en virtud de que el error cometido en el registro no crea derecho, para proceder a su corrección previa actuación administrativa, no es necesario solicitar la autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia accedió al registro.

Artículo 89 del Decreto-ley 960 de 1970. **<Expedición de certificaciones>**. Los notarios están para expedir certificaciones sobre aspectos especiales y concretos que consten en el protocolo, con fuerza probatoria de instrumentos públicos solo en los casos autorizados por la Ley.

Pertenecen a esta categoría los extractos de las escrituras de constitución, reforma, disolución o liquidación de sociedades, conforme a las normas pertinentes de los Códigos Civil y de Comercio.

Artículo 90. **<Otras certificaciones>**. Los notarios podrán certificar también sobre aspectos concretos de un determinado instrumento o de un documento protocolizado, tales como el hecho de haberse formalizado una compraventa con indicación del precio pactado o de haberse constituido un gravamen. Dichas certificaciones tendrán el mérito señalado en la ley.

Artículo 100. **Inexistencia>**. El instrumento que no haya sido autorizado por el Notario no adquiere la calidad de escritura pública y es inexistente como tal. Empero, si faltare solamente la firma del Notario, y la omisión se debiere a causas diferentes de las que justifican la negativa de la autorización, podrá la Superintendencia de Notariado y Registro, con conocimiento de causa, disponer que el instrumento se suscriba por quien se halle ejerciendo el cargo.

<sup>ii</sup> Artículo 251. **Distintas clases de documento.** Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magne-tofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

Los documentos son públicos o privados.

Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo se denomina escritura pública.

Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000812 DE 2015

(diciembre 21)

por la cual se decide Actuación Administrativa tendiente a corregir la anotación número 11 del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-184529 Expediente A.A. 149 de 2012.

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 2723 de 2014, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:

...

RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin valor ni efectos jurídicos la anotación número 11 del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-184529 por las razones expuestas en la parte conside-rativa de esta resolución y realizar las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Notificar personalmente esta resolución al señor Óscar René González Mar-tínez, y de no poder hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso y a terceros que no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia, por una sola vez, en el **Diario Oficial** a costa de esta oficina o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados (arts. 67, 69 y 73 Ley 1437/2011).

Artículo 3°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Registrador Principal de esta Oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, ante el Registrador Principal de esta Oficina (arts. 74, 76 Ley 1437/2011).

Artículo 4°. Una vez en firme la presente providencia, comunicar y enviar copia de esta al Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá para que obre dentro del proceso ejecutivo 110013103043201000673 en donde Bancolombia S. A. acciona en contra de los señores Óscar René González Martínez, Libardo Herrera Pérez e Impohermac Ltda.; de igual forma, comunicar y enviar al Juzgado 07 Civil del Circuito de Bogotá para que obre tal auto dentro del Proceso Ejecutivo Singular número 2010-610 seguido por Sociedad Tarson y Cía. en contra de los señores Óscar René González Martínez, Libardo Herrera Pérez e Impohermac Ltda.

Artículo 5°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2015.

El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.

<sup>i</sup> Artículo 8°. **Matrícula inmobiliaria.** Es un folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y providencias relacionado; en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando (...).

Artículo 49. **Finalidad del folio de matrícula.** El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. **Procedimiento para corregir errores.** Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:

(...)

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedi-mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000826 DE 2015

(diciembre 31)

por la cual se decide Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-1173921, 50S-40505359 y 50S-40505360

Expediente A.A. 017 de 2009.

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 2723 de 2014, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:

...

RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin valor ni efectos jurídicos la anotación número 13 del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-1173921, por las razones expuestas en la parte consi-derativa de esta resolución y realizar las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Notificar personalmente esta resolución la señora Epifanio Garzón Álvarez, Eddier Mosquera Montenegro, Gloria Stella Cely Holguín, Rosaura Peñaranda Parada y la sociedad Inversiones Lanceros Ltda., su representante legal o quien haga sus veces; y de no poder hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso y a terceros que no hayan intervenido en la actuación y que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, con publicación de la presente providencia, por una sola vez, en el **Diario Oficial** a costa de esta oficina o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados (arts. 67, 69 y 73 Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Registrador Principal de esta oficina y el de apelación para ante el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, ante el Registrador Principal de esta Oficina (arts. 74, 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Una vez en firme la presente providencia, comunicar y enviar copia de esta al Juzgado 18 Civil del Circuito para que obre este acto administrativo dentro del Proceso Ejecutivo Singular número 2008-00451 en donde la señora Rosaura Peñaranda Parada Acciona contra el señor Epifanio Garzón Álvarez.

Artículo 5°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2015.

El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.

<sup>i</sup> Artículo 8°. **Matrícula inmobiliaria.** Es un folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y providencias relacionado; en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando (...)

Artículo 49. **Finalidad del folio de matrícula.** El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien.

Artículo 59. **Procedimiento para corregir errores.** Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera:

(...)

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedi-mientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.

(C. F.).



AUTOS

AUTO DE 2016

(febrero 5)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-473239.

Expediente A.A. 250 de 2015.

La Registradora Principal Encargada de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 22 Decreto 2723 de 2014, Ley 1437 de 2011 y la Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:

...

RESUELVE:

Artículo 1°. Iníciase la correspondiente actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-473239, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido por el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa y hasta antes de proferir decisión de fondo, alléguese, apórtense, pídanse y practíquense de oficio o a petición del interesado, sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comuníquese y envíese copia de la presente a Miguel E. Morales López, quien actúa como apoderado de Flor María Ovalle, Lina Pérez y Javier Pérez Ovalle y demás herederos indeterminados del señor Edinson Antonio Pérez Pérez o personas que puedan estar directamente interesadas o resultar afectadas con la decisión, con publicación del presente auto en el ***Diario Oficial*** a costa de esta oficina, o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados si hay lugar a ello (artículo 37 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Comuníquese y envíese copia de la presente providencia al Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, D. C., para que obre dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario 1997-04266 de Miguel Sandoval Cubides contra Edinson Antonio Pérez Pérez, que allí se adelanta.

Igualmente, al Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá, D. C., para que obre dentro del proceso ejecutivo singular que María Yolanda Castillo Granados contra Edinson Pérez, que allí se adelanta.

Artículo 5°. Contra el presente auto, no procede recurso alguno en vía gubernativa (art. 75 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2016.

La Registradora Principal (e) Oficina de Registro I. P. Zona Sur, Bogotá, D. C.,

Consuelo Perdomo Jiménez.

<sup>i</sup> Artículo 21. El patrimonio de familia no es embargable, ni aun en caso de quiebra del beneficiario. El consentimiento que este diere para el embargo o tendrá efecto ninguno.

Artículo 22. El patrimonio de familia no puede ser hipotecado ni gravado con censo, ni dado en anticresis, ni vendido con pacto de retroventa.

Artículo 23. El propietario puede enajenar el patrimonio de familia o cancelar la inscripción por otra que haga entrar el bien a su patrimonio particular sometido al derecho común; pero si es casado o tiene hijos menores, la enajenación o cancelación se subordinan, en el primer caso, al consentimiento de su cónyuge y, en el otro, al consentimiento de los segundos, dado por medio y con intervención de un curador, si lo tienen, o de un curador nombrado ad hoc.

<sup>ii</sup> Artículo 63 Ley 1579 de 2012. *Efectos de la cancelación.* El registro o inscripción que hubiere sido cancelado carece de fuerza legal y no recuperará su eficacia sino en virtud de decisión judicial o administrativa en firme.

<sup>iii</sup> Artículo 49. *Finalidad del folio de matrícula.* El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien.

<sup>iv</sup> Artículo 60. *Recursos...*()

Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohíbe o es manifiestamente ilegal, en virtud de que el error cometido en el registro no crea derecho, para proceder a su corrección previa actuación administrativa, no es necesario solicitar la autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia accedió al registro.

(C. F.).

AUTO DE 2015

(diciembre 11)

por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio 50S-40138260

Expediente número A.A. 281 de 2015

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial por las conferidas por el artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO QUE:

...

RESUELVE:

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-40138260 por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del interesado, sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a la Notaría Segunda del Círculo de Neiva, a Eder Julio Arrieta Díaz en calidad de actual propietario registrado y a Karen Julieth González Parada en calidad de denunciante y anterior propietario registrado.

Artículo 4°. Envíese oficio a la Fiscalía General de la Nación para que entregue información de radicado y existencia de denuncia por delito de fraude en documento público, presentada por Karen Julieth González Parada (cédula de ciudadanía 52836428) en contra de Eder Julio Arrieta Díaz (cédula de ciudadanía 8407289), envíese copia de la impresión simple del folio 50S-40138260 y de la Instrucción Administrativa 011 del 30 de julio de 2015 Supernotariado.

Artículo 5°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.

Artículo 7°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2015.

El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Bogotá Zona Sur,

Édgar José Namén Ayub.

(C. F.).

AUTO DE 2015

(diciembre 24)

por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio número 50S-458811.

Expediente número A.A. 291 de 2015

El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

CONSIDERANDO QUE:

...

DISPONE:

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-458811 por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. Fórmese el expediente respectivo según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 2°. Durante la actuación administrativa, y hasta antes de proferir decisión de fondo, se ordena allegar, aportar, pedir y practicar, de oficio o a petición del interesado, sin requisitos especiales, las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente providencia, conforme lo indica el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, a Gladys Yolanda Ortiz Nieto en calidad de anterior propietaria inscrita, a Marlene Acecho Fontana en calidad de actual propietaria registrada, a Nohora Cortés Ruiz en calidad de acreedora hipotecaria.

Artículo 4°. Envíese oficio a:

a) Juzgado 6° Civil municipal de Bogotá para :

• Que certifique si expidió o no el Oficio número 0497 del 13 de marzo de 2009, en caso negativo se le requiere para que envíe a esta oficina copia de la denuncia penal instaurada. Envíese copia del oficio presentado para registro con el Turno número 2011-108779 y de la impresión simple del Folio número 50S-458811.

• Que certifique si expidió o no el Oficio número 2316 del 24 de noviembre de 2011, en caso negativo se le requiere para que envíe a esta Oficina copia de la denuncia penal instaurada. Envíese copia del oficio presentado para registro con el Turno número 2011-111035 y de la impresión simple del Folio número 50S-458811. En caso afirmativo, se le requiere para que explique el alcance del oficio remitido, pues de su lectura no se puede establecer si está informando sobre el no levantamiento de una medida cautelar, si en verdad la está levantando o si dejó la misma en remanentes para el Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá.

b) Notaría 54 del Círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia de la Escritura Pública número 2849 del 16 de noviembre de 2011, sus partes y sus actos; envíese copia de la escritura presentada para registro con el Turno número 2011-108780 para que se certifique su autenticidad, y de la impresión simple del Folio número 50S-458811.

e) Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá para que certifique si expidió o no el Oficio número 1289 del 20 de mayo de 2015, en caso negativo se le requiere para que envíe a esta Oficina copia de la denuncia penal instaurada. Envíese copia del oficio presentado para registro con el Turno número 2015-49537 y de la impresión simple del Folio número 50S-458811.

d) Notaría 54 del Círculo de Bogotá para que certifique en protocolo la existencia de la Escritura Pública número 2998 del 6 de junio de 2007, sus partes y sus actos; envíese copia de la escritura presentada para registro con el Turno número 2015-51415 para que se certifique su autenticidad, y de la impresión simple del Folio número 50S-458811.

Artículo 5°. Publicar el presente auto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, con la finalidad de que cumpla los fines de publicidad para los interesados de los que se desconozca medio eficaz de comunicación y para comunicar el inicio de la actuación administrativa a los terceros que puedan estar interesados.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso alguno en sede gubernativa.

Artículo 7°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de diciembre de 2015.

El Registrador Principal, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Bogotá, Zona Sur,  
*Édgar José Namén Ayub.*  
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
Seccional Facativá

AUTOS

AUTO DE 2016

(marzo 15)

*por medio del cual se inicia una actuación administrativa.*

Expediente número 156-AA-2016-21

El Registrador de Instrumentos Públicos de la Seccional de Facativá, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto número 2723 de 2014, Ley 1437 de 2011, artículos 54 y 59 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

...

DECIDE:

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 156-58173.

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación Unidad Primera Fe Pública Fiscalía 177 Seccional de Bogotá, D. C., y a su vez solicitarle se ordene la cancelación de la medida provisional de **abstenerse de registrar cualquier nuevo trámite que se pretenda realizar sobre el inmueble**, ubicado en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, hasta nueva orden en el proceso al que le correspondió el **Expediente 110016000020201503120 número interno 2004**, ordenado mediante el Oficio número 0125 de fecha junio 12 de 2015, registrado en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 156-58173.

Artículo 3°. Notificar personalmente a los señores Juan de Jesús Villamil Guzmán, Lisandro Hurtado Malagón y demás personas indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Artículo 4°. Sino fuere posible la notificación personal súrtase ella mediante aviso (artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 5°. Publíquese la parte decisiva del presente auto, en un diario de amplia circulación. En consecuencia entréguese copia del Auto antes mencionado a la Oficina de Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 6°. Formar el expediente correspondiente (artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 7°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Facativá, a 15 de marzo de 2016.

El Registrador,

*Carlos Mario Restrepo Restrepo.*  
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Ramiriquí, Boyacá

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 14 DE 2016

(marzo 14)

*por la cual se ordena unificación de Folio de las Matrículas Inmobiliarias números 090-7900 y 090-7901.*

La suscrita Registradora de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí (Boyacá), en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 7°, 49 y 59 de la Ley 1579 de 2012 y el Decreto número 01 de 1984,

CONSIDERANDO QUE:

...

RESUELVE:

Primero. **Ordénese** la unificación del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0007900 en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0007901, como consecuencia de ello déjese sin valor y sin efecto la apertura del primer folio de matrícula citado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, previo traslado de la Anotación número uno (1) del Folio número 090-0007900 correspondiente al registro de la Escritura número 490 de fecha 06/09/1975 de la Notaría Segunda de Ramiriquí, registrada en la fecha 02/01/1976, valor del acto \$5.000, venta de García Valero Hormisdas a favor de Cruz Barreto Vicente, naturaleza jurídica. Falsa tradición compraventa de derechos y acciones por Feliciano García compra por Escritura número 323 de 1927. Código 0606; quedando esta como Anotación número dos (2) en el Folio número 090-0007901.

Segundo. **Ciérrese** el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0007900 en su Anotación número dos (2), en razón a que quedará sin valor y sin efecto, por ser unificado a la Matrícula Inmobiliaria número 090-0007901.

Tercero. **Adiciónese** al campo de cabida y linderos del folio de matrícula vigente lo referente a la matrícula del antiguo sistema (Partida 141 Tomo 2).

Cuarto. Una vez cumplido lo ordenado en los numerales anteriores, corrija el orden cronológico de las anotaciones del acápite de tradición del Folio número 090-0007901, hágase la salvedad del caso, y desglósese los documentos respectivos de la Matrícula número 090-0007900 al folio que quedará vigente.

Quinto. Notifíquese personalmente de esta resolución al señor Carlos Andrés Arias López y/o Jorge Danilo Fonseca La Rotta a quien se le confirió poder para notificarse de la presente actuación administrativa.

Sexto. Notificar la siguiente providencia en la forma prevista en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si no fuere posible su notificación personal, súrtase esta mediante publicación de la parte resolutive de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional, publicación que tendrá efecto frente a terceros indeterminados.

Séptimo. Contra la presente providencia procede recurso de reposición ante esta seccional y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 y siguientes del C. P. C. y fórmese el expediente correspondiente (artículo 29 C. C. A.).

Octavo. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición y de ella se conservará copia del archivo de antecedentes del mencionado inmueble.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Ramiriquí, hoy 14 de marzo de 2016.

La Registradora Seccional,

*Sandra Graciela Montejo Castro.*  
(C. F.).

AUTOS

AUTO DE 2016

(febrero 18)

*por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “El Rosal” y/o “El Gallinazo” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0008105.*

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí (Boyacá), en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 59 del Estatuto de Registro Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

...

DISPONE:

Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se ordena abrir el proceso correspondiente a la actuación administrativa que de acuerdo a las disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la revisión jurídica de la tradición de la Matrícula Inmobiliaria número 090-0008105, y de la totalidad de los documentos que esta contiene, se ajustará el folio de matrícula inmobiliaria a su real situación jurídica según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la conformación de la hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente a la señora Parra de Pulido Rosa María y demás personas determinadas e indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal, súrtase esta mediante aviso (artículos 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutive del presente auto, en un diario de amplia circulación. En consecuencia entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0008105, objeto de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan en las respectivas carpetas de antecedentes registrales.



Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.  
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.  
Dado en Ramiriquí, a 18 de febrero de 2016.  
La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.  
(C. F.).

**AUTO DE 2016**

(marzo 7)

por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real de los predios denominados “El Consuelo”, “El Consuelo”, “El Vergel” y “Terreno” relacionados a los Folios de Matrículas Inmobiliarias números 090-0017158, 090-0017159, 090-0019228 y 090-0027869.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 59 del Estatuto de Registro Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

...

DISPONE:

Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se ordena abrir el proceso correspondiente a la actuación administrativa que de acuerdo a las disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la revisión jurídica de las Matrículas Inmobiliarias números 090-0017158, 090-0017159, 090-0019228 y 090-0027869, y de la totalidad de los documentos que esta contiene, se ajustará el folio de matrícula inmobiliaria a su real situación jurídica según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la conformación de la hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente al señor Juan Carlos Leguizamón Sanabria y demás personas determinadas e indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal, sùrtase esta mediante aviso (artículos 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutive del presente auto, en un diario de amplia circulación. En consecuencia entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia los Folios de Matrículas Inmobiliarias números 090-0017158, 090-0017159, 090-0019228 y 090-0027869 objetos de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan en las respectivas carpetas de antecedentes registrales.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.  
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.  
Dado en Ramiriquí, a 7 de marzo de 2016.  
La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.  
(C. F.).

**AUTO DE 2016**

(marzo 14)

por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “La Playa” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0013986.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 59 del Estatuto de Registro Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

...

DISPONE:

Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se ordena abrir el proceso correspondiente a la actuación administrativa que de acuerdo a las disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la revisión jurídica de la tradición de la Matrícula Inmobiliaria número 090-0013986 y de la totalidad de los documentos que esta contiene se ajustará el folio de matrícula inmobiliaria a su real situación jurídica según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la conformación de la hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente a los señores Mendoza Parra Mónica Andrea y Buitrago Pulido Merardo, herederos y demás personas determinadas e indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal, sùrtase esta mediante aviso (artículos 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutive del presente auto, en un diario de amplia circulación. En consecuencia entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0013986, objeto de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan en las respectivas carpetas de antecedentes registrales.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.  
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.  
Dado en Ramiriquí, a 14 de marzo de 2016.  
La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.  
(C. F.).

**AUTO DE 2016**

(marzo 14)

por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “El Volcán” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0026443.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 59 del Estatuto de Registro Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

...

DISPONE:

Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se ordena abrir el proceso correspondiente a la actuación administrativa que de acuerdo a las disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la revisión jurídica de la tradición de la Matrícula Inmobiliaria número 090-0026443 y de la totalidad de los documentos que esta contiene se ajustará el folio de matrícula inmobiliaria a su real situación jurídica según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la conformación de la hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente a la señora Mendoza Parra Mónica Andrea y demás personas determinadas e indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal, sùrtase esta mediante aviso (artículos 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutive del presente auto, en un diario de amplia circulación. En consecuencia entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0026443, objeto de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan en las respectivas carpetas de antecedentes registrales.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.  
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.  
Dado en Ramiriquí, a 14 de marzo de 2016.  
La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.  
(C. F.).

**AUTO DE 2016**

(marzo 15)

por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “El Borrachero” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0003780.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 59 del Estatuto de Registro Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

...

DISPONE:

Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se ordena abrir el proceso correspondiente a la actuación administrativa que de acuerdo a las disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la revisión jurídica de la tradición de la Matrícula Inmobiliaria número 090-0003780 y de la totalidad de los documentos que esta contiene se ajustará el folio de matrícula inmobiliaria a su real situación jurídica según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la conformación de la hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente al señor Páez Ávila Carlos y/o herederos y demás personas determinadas e indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal, súrtase esta mediante aviso (artículos 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva del presente auto, en un diario de amplia circulación. En consecuencia entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0003780, objeto de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan en las respectivas carpetas de antecedentes registrales.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Ramiriquí, a 15 de marzo de 2016.

La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.  
(C. F.).

AUTO DE 2016

(marzo 17)

por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “Los Andes” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0002438.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 49 y 59 del Estatuto de Registro Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:

...

DISPONE:

Primero. De conformidad a lo previsto en la parte motiva de esta providencia, se ordena abrir el proceso correspondiente a la actuación administrativa que de acuerdo a las disposiciones ya enunciadas en el considerando del auto y una vez realizada la revisión jurídica de la tradición de la Matrícula Inmobiliaria número 090-0002438 y de la totalidad de los documentos que esta contiene se ajustará el folio de matrícula inmobiliaria a su real situación jurídica según los resultados del estudio exhaustivo de la tradición y la conformación de la hoja de ruta.

Segundo. Notifíquese personalmente a las señoras Mazorca Soracipa Filedigna, Beltrán Murillo Pablo Emilio y Valero Pérez María Hortensia y demás personas determinadas e indeterminadas que puedan tener interés en la presente actuación.

Tercero. Si no fuere posible la notificación personal, súrtase esta mediante aviso (artículos 68 y 69 del Código Contencioso Administrativo).

Cuarto. Publíquese la parte resolutiva del presente auto, en un diario de amplia circulación. En consecuencia entréguese copia del auto antes mencionado a la Oficina de Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Quinto. Déjese en custodia el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0002438, objeto de la presente actuación administrativa.

Sexto. Téngase como pruebas de la presente actuación y los documentos que reposan en las respectivas carpetas de antecedentes registrales.

Séptimo. Contra la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo.

Octavo. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Ramiriquí, a 17 de marzo de 2016.

La Registradora Seccional,

Sandra Graciela Montejo Castro.  
(C. F.).

Secretaría de Educación de Zipaquirá

EDICTOS

La Secretaria de Educación de Zipaquirá

INFORMA:

Que el pasado 4 de diciembre de 2015, falleció la docente María Leonor Pinzón González, quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 20596333 expedida en Subachoque, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial número 08700952 de Registraduría Nacional del Estado Civil, afiliada a “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fompremag” y a reclamar el reconocimiento y pago de la Pensión de Sobrevivientes y Cesantía Definitiva se presentó el señor Ramón Pinzón Gómez, identificado con cédula número 49719 expedida en Bogotá, D. C.” en calidad de Padre de la causante;

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor derecho, quienes deben manifestarlo mediante escrito radicado en la carrera 13 N° 3C-15 barrio San Pablo, Secretaría de Educación de Zipaquirá, Área de Prestaciones Sociales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente edicto emplazatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 44 de 1980, modificado por la Ley 1204 de 2008.

Dado en Zipaquirá, a 2 de abril de 2016.

La Secretaria de Educación,

Lic. Ana Lucía Segura Medina.

Segundo aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21600454. 7-III-2016. Valor \$51.500.

CONTENIDO

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Págs.
Decreto número 0000529 de 2016, por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ....	1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
Decreto número 528 de 2016, por el cual se crea y se organiza el Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita y se dictan otras disposiciones. ....	1
VARIOS	
Fiscalía General de la Nación	
Resolución número 0–1005 de 2016, por medio de la cual se reglamenta el Centro Administrativo de Control y Monitoreo de los Sistemas Electrónicos de Seguridad “Cacym”. ....	4
Resolución número 0 – 1006 de 2016, por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. ....	5
Resolución número 0-1026 de 2016, por medio de la cual se regula el procedimiento para la declaratoria de abandono de los bienes puestos a disposición del Fondo Especial de Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación. ....	21
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Sur	
Resolución número 00000800 de 2015, por la cual se establece la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-97023. ....	23
Resolución número 00000812 de 2015, por la cual se decide Actuación Administrativa tendiente a corregir la anotación número 11 del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-184529 Expediente A.A. 149 de 2012. ....	24
Resolución número 00000826 de 2015, por la cual se decide Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-1173921, 50S-40505359 y 50S-40505360. ....	24
Auto de 2016, por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-473239. ....	25
Auto de 2015, por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio 50S-40138260. ....	25
Auto de 2015, por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio número 50S-458811. ....	25
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional Facatativá	
Auto de 2016, por medio del cual se inicia una actuación administrativa. ....	26
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ramiriquí, Boyacá	
Resolución número 14 de 2016, por la cual se ordena unificación de Folio de las Matrículas Inmobiliarias números 090-7900 y 090-7901. ....	26
Auto de 2016, por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “El Rosal” y/o “El Gallinazo” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0008105. ....	26
Auto de 2016, por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real de los predios denominados “El Consuelo”, “El Consuelo”, “El Vergel” y “Terreno” relacionados a los Folios de Matrículas Inmobiliarias números 090-0017158, 090-0017159, 090-0019228 y 090-0027869. ....	27
Auto de 2016, por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “La Playa” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0013986. ....	27
Auto de 2016, por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “El Volcán” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0026443. ....	27
Auto de 2016, por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “El Borrachero” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0003780. ....	27
Auto de 2016, por el cual se inicia una actuación administrativa para establecer la situación jurídica real del predio denominado “Los Andes” relacionado al Folio de Matrícula Inmobiliaria número 090-0002438. ....	28
Secretaría de Educación de Zipaquirá	
La Secretaria de Educación de Zipaquirá, informa que falleció María Leonor Pinzón González, y a reclamar el reconocimiento y pago de la Pensión de Sobrevivientes y Cesantía Definitiva se presentó Ramón Pinzón Gómez. ....	28